

# DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Montevideo, Viernes 16 de Diciembre de 1955

TOMO 201

Dirección:  
Florida 1178

Teléfonos:  
83371 - 95925

Número 14696

## S U M A R I O

### Ministerio de Hacienda

1

Decreto. Se aprueba el presupuesto de la Administración Nacional de Puertos.

### Ministerio de Defensa Nacional

2

Decreto. Se modifica la disposición que estableció los

mínimos meteorológicos fijados para la aeronáutica en la Bahía de Montevideo.

### Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social

3

Resolución. Se acepta la renuncia del Director Honorario de la Revista Nacional y se encomienda a la Academia Nacional de Letras la dirección de la publicación.

## CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO

### MINISTERIO DE HACIENDA

1

Decreto. Se aprueba el presupuesto de la Administración Nacional de Puertos

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 6 de diciembre de 1955.

Visto: Las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo al proyecto de presupuesto de la Administración Nacional de Puertos para el año 1955;

Resultando: Que el Directorio de la Administración Nacional de Puertos aceptó dichas observaciones,

El Consejo Nacional de Gobierno

DECRETA:

1º Apruébase el presupuesto de la Administración Nacional de Puertos para el año 1955.

2º Comuníquese, etc.

Por el Consejo: ALBERTO F. ZUBIRIA. — RENAN RODRIGUEZ. — Justo José Orozco, Secretario.

### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

Decreto. Se modifica la disposición que estableció los mínimos meteorológicos fijados para la aeronáutica en la Bahía de Montevideo.

Ministerio de Defensa Nacional. (Decreto N° 23.898).

Montevideo, 9 de diciembre de 1955.

Visto estos antecedentes por los cuales la Dirección de Aeronáutica Civil sugiere la conveniencia de modificar el artículo 1º del decreto N° 19.370, del 2 de octubre

de 1951, en lo que respecta a los mínimos meteorológicos para el Hidropuerto de la Bahía de Montevideo;

Atento al informe de la Inspección General de Marina,

El Consejo Nacional de Gobierno

DECRETA:

Artículo 1º Modifícase el artículo 1º del decreto número 19.370, del 2 de octubre de 1951, en la parte donde dice: "Vientos de cualquier sector, superior a los 80 kilómetros por hora", por lo siguiente: "Viento de cualquier sector, superior a los 70 kilómetros por hora".

Art. 2º Comuníquese, publíquese y archívese:

Por el Consejo: ZUBIRIA. — General JUAN P. RIBAS. — Justo José Orozco, Secretario.

### MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION SOCIAL

3

Resolución. Se acepta la renuncia del Director Honorario de la Revista Nacional y se encomienda a la Academia Nacional de Letras la dirección de la publicación.

Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.

Montevideo, 7 de diciembre de 1955.

Vista la renuncia presentada por el señor Raúl Montero Bustamante del cargo de Director Honorario de la "Revista Nacional", órgano de literatura, arte y ciencia, editada bajo los auspicios del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social;

Atento a que la mencionada renuncia que se funda en razones de salud, ya había sido presentada en otras oportunidades, siendo diferida su aceptación por el Ministerio, en el ánimo de retener el concurso intelectual de una personalidad tan relevante como la del nombrado escritor compatriota, a quien debe contemplarse sin embargo en sus deseos de hacer una pausa en las actividades que ininterrumpidamente le han absorbido durante largos años en la Dirección brillantemente ejercitada de la "Revista Nacional" desde su primer número hasta el ciento ochenta y seis;

Atento asimismo, a que no sería posible exigir en adelante a una sola persona tan intenso trabajo de direc-

ción, selección, corrección y compaginación de la revista, estimase pertinente conferir ese cometido a la Academia Nacional de Letras, tan estrechamente vinculada a este Departamento del Poder Ejecutivo, considerándose aconsejable la edición trimestral del citado órgano de publicidad;

Por estas consideraciones,

El Consejo Nacional de Gobierno

#### RESUELVE:

1º Aceptar la renuncia presentada por el señor Raúl Montero Bustamante, del cargo de Director Honorario de la "Revista Nacional" debiendo expresarse el profundo reconocimiento del Poder Ejecutivo, por su aporte valioso a la causa de la cultura pública, significando asimismo al dimitente la alta estimación que merece su personalidad de biógrafo, historiógrafo y cronista.

2º Declárase clausurado, con los ciento ochenta y seis

números aparecidos, este primer ciclo de la "Revista Nacional".

3º Encomendar a la Academia Nacional de Letras, la dirección de esta publicación, en lo relativo con toda la parte literaria (solicitud de material, selección, ordenación, corrección y publicación), continuando el resto de su cometido como hasta la fecha, debiendo además, designar la persona que en sustitución del renunciante y conjuntamente con el Director Honorario de Administración, firmará los correspondientes conformes para el retiro de los fondos de que esta publicación pueda disponer, para su normal funcionamiento.

4º En adelante, la "Revista Nacional" aparecerá trimestralmente, debiendo continuar su numeración correlativa.

5º Comuníquese y publíquese.

Por el Consejo: A. F. ZUBIRIA. — RENAN RODRIGUEZ. — Justo José Orozco, Secretario.

## SECRETARÍAS DE ESTADO

### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Acta N.º 780. — En Montevideo, el día nueve del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y cinco, en Acuerdo celebrado entre el Consejo Nacional de Gobierno y el señor Ministro de Defensa Nacional, y visto los asuntos de esta Cartera sometidos a su consideración, a propuesta del mismo:

#### RESUELVE:

##### Retiros.

Soldado de la R. M. N.º 2, Ramón Antonio Correa Riveros, \$ 73.34. Soldado (TEA) de la Base Aérea N.º 2, Olney Castro Barcelona, \$ 102.66.

##### Modificaciones de Retiro

Soldado retirado Luis Lira, \$ 150.43. Soldado retirado Santos Vega, \$ 225.00. Soldado retirado Matías Modesto Medina, \$ 273.96.

##### Pensión

Se otorga a favor de la señora Bonifacia Acosta de Barboza \$ 56.66 mensuales.

##### Compensaciones Especiales

Se acrece a \$ 21.00 la que percibe el Cabo del Regimiento de Caballería N.º 4, Gualberto Isidro Rivera, a partir del 15/XI/955. Se acrece a \$ 14.00 la que percibe el Cabo del Regimiento N.º 6, Alvario Toledo, a partir del 19/XI/955. Se acrece a \$ 28.00 la que percibe el Sargento del Regimiento de Caballería N.º 6, Pedro Ferreira, a partir del 15/XI/955.

##### Varios

Autorízase a la Contaduría General de la Nación a liquidar las siguientes cantidades a favor de las personas que se indican: N.º 1, Soldado Telmo do Canto Vargas, \$ 62.50. Sargento retirado Atanasio Fleitas, \$ 104.44. Soldado Pedro Teixeira Larronda, \$ 165.00. Sargento retirado Severo Pacheco, \$ 65.00. Suboficial de Cargo de Sanidad retirado, Hilario Anselmo Aguirre, \$ 884.46. Cabo retirado José María González, \$ 136.04. Refuézase el Rubro 2.09.03 "Gastos Generales de Oficina" del Item 3.01 en pesos 250.00 a tomarse del Rubro 2.04.02 "Impresiones y Encuadernaciones" del Item 3.01; N.º 8.

Autorízase al Servicio de Intendencia

a abonar suministros por \$ 442.58, según Estado de Cuentas N.º 39.

Autorízase a la Dirección de Aeronáutica Civil a reforzar el rubro 3.12.01 "Combustibles y lubricantes" en \$ 350.00 a tomarse del rubro 5.02 "De Inmuebles", ambos del Item 3.27. Conceder a la pensionista militar, Liropeya de León de Curtáble, prórroga de licencia por el término de 6 meses a partir del 16 de julio de 1955, para continuar residiendo en el extranjero (Italia).

Entiéndanse las Resoluciones correspondientes en los expedientes respectivos, las que serán firmadas por el señor Ministro de Defensa Nacional, dejándose constancia de haber sido autorizadas en la presente Acta.

Por el Consejo: ZUBIRIA. — General JUAN P. RIBAS. — Justo José Orozco, Secretario.

Acta N.º 37. — En Montevideo, el día nueve del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y cinco, en Acuerdo celebrado por el Consejo Nacional de Gobierno y el señor Ministro de Defensa Nacional y visto los expedientes pensionarios de Jefes y Oficiales de los Institutos Armados, sometidos a su consideración, a propuesta del mismo:

#### RESUELVE:

Fijanse las cuotas pensiones de las señoras Trifonia Sofía Burgueño de Neves y Benicia Romana Burgueño de Sánchez, en el período comprendido entre el 26/1-53 al 13/VII/55 en \$ 24.31 mensuales a cada una y a partir del 14/VII/55 en pesos 32.41 mensuales a cada una. La señora Burgueño de Neves puede seguir acumulando la pasividad que le sirve la Caja de J. y Pensiones Civiles y Escolares. Otórgase a la señora Noemí María Deus de Yates, una pensión de \$ 610.00 mensuales. Otórgase a la señora Alice Viva Zucchelli de Lernoud una pensión de \$ 172.50 mensuales, acumulable a la pasividad que percibe de la Caja de J. y Pensiones de la Industria y Comercio.

Extiéndanse las Resoluciones correspondientes en los expedientes respectivos, las que serán firmadas por el señor Ministro de Defensa Nacional, dejándose constancia de haber sido autorizadas en la presente Acta.

Por el Consejo: ZUBIRIA. — General JUAN P. RIBAS. — Justo José Orozco, Secretario.

### MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO

#### Trámite de la Dirección de la Propiedad Industrial

Montevideo, 5 de diciembre de 1955.

Se elevan al Ministerio de Industrias y Trabajo: Acta N.º 7.401 "Cepillo de dientes con depósito", de Elisabet Calette Neo Monteil, de Francia. — Acta N.º 8.970 "Farol a presión", de Aladd Industries Ltd., de Inglaterra. — Acta N.º 7.496 "Método mejorado para la producción de productos de celulosa regenerada", de Oscar Kohorh y Co. Ltd., de EE. UU. de América. — Acta N.º 56.192 "Lord Calvert", de Calvert Distillers Ltd., de Canadá. — Acta N.º 51.901 "Co-Op", de Aditian Crosignani, de Montevideo. — Acta N.º 39.921 "Collection Chantecler", de Pedro F. Simón e hijo Ltda., Librairie Francaise, de Chile. — Acta N.º 53.015 "3 3", de Fabregas y Cía., de Montevideo. — Acta N.º 53.254 "El boletín avisador comercial", de Rodolfo Greco, de Montevideo. — Acta N.º 57.029 "Cristal", de Roberto Slowak, de Montevideo. — Acta N.º 7.924 "Máquina para coser la punta y el talón de la plantilla de las alpargatas", de S. A. Inc. y Com. Fábrica Arg. de Alpargatas, de Buenos Aires. — Acta N.º 8.671 "Un dispositivo expulsor aplicable en máquinas elaboradoras de hilos de goma", de Abraham Kopelowicz, de Buenos Aires. — Acta N.º 53.275 "Wayne", de A. Atelo, de Montevideo. — Acta N.º 5.640 "Mejoras en botones de forrar", de Mario Pascual Maio, de Buenos Aires. — Acta N.º 7.074 "Vigas prefabricadas por asociación de elementos alineados preferiblemente de material cocido", de Aedesnova A. G., de Liechtenstein. — Acta N.º 8.113 "Mejoras en alpargatas", de S. A. Ind. y Com. Fca. Argentina de Alpargatas, de Buenos Aires. — Acta N.º 52.653 "Tussora", de Sudamtex del Uruguay S. A., de Montevideo. — Acta N.º 3.889 "Nuevo tipo de máquina cortadora actuada manualmente para el corte de cabellos barba y elementos capilares similares en general", de José Koprich, de Montevideo. — Acta número 56.671 "Monofilamento", de Roberto Slowark, de Montevideo. — Acta número 56.673 "Multifilamento", de Roberto Slowark, de Montevideo. — Acta número 8.577 "Una máquina de lavar ropa o lo similar", de la Soc. de Resp. Ltda., de Buenos Aires. — Acta N.º 8.632 "Procedimiento fabricación y productos lameliformes en cerámica", de Kerlus S. A., de Suiza. — Acta N.º 57.512 "Alfa-Romeo", de Alfa Romeo S. A., de Italia.

—Pasa a la Facultad de Arquitectura: Acta N.º 9.287 "Procedimiento de transformación mecánica de granulados varios", de Ditt Pratelli Capoferri, de Italia.

—Pasan a la Dirección de Industrias: Acta N.º 10.628 "Compresor blindado para equipos frigoríficos", de Luis Friggeri, de Buenos Aires. — Acta N.º 9.866 "Procedimiento y dispositivo para tratar con vibraciones mecánicas partículas dispersas en un líquido, especialmente para la formación artificial de cristales", de International Physical Establishment, de Liedtchenstein. — Acta N.º 10.525 "Unapinza o brusela de cartón para uso personal", de Antonio Enrique Felippa, de Montevideo. — Acta N.º 10.413 "Mejoras en antideslizadores aplicables a las ruedas de los tractores", de Juan Sicalo, de Salto (R. O. U.). — Acta N.º 10.526 "Una nueva máquina destructora de maderas", de Ambrosio Antonio Bonicaizi, de Montevideo. — Acta N.º 9.571 "Mejoras eno relativas a métodos de hacer tubos de descarga eléctricos y tubos de descarga hechos por medio de esos métodos", de N. V. Phillips Gloehampfabriek, de Holanda. — Acta N.º 6.008 "Elementos para exterminio de animales dañinos para el suelo", de J. R. Geigy A. G., de Suiza. — Acta N.º 7.965 "Un procedimiento para preparar derivados de ácidos dicarbocíclicos de las sulfonamidas", de Sharp y Dgme, del Canadá. — Acta N.º 10.696 "Mejoras en una solución de grafito de coloidal conductora de electricidad", de Pittsburgh Plate Glass Co., de EE. UU. de América. — Acta N.º 10.754 "Procedimiento de fabricación de abonos fosfatados a partir de fosfatos naturales y de una solución sulfurosa", de Comptoir de Phosphates de l'Afrique du Nord, de Francia. — Acta N.º 10.129 "Nuevo procedimiento de fabricación de artículos en acero y productos así obtenidos", de Soc. Acieries de Pompey, de Francia. — Acta N.º 10.375 "Mejoras en o relativas en dispositivos de sostén para mujer", de Henry Macintyre Herbener, de EE. UU. de América. — Acta N.º 10.395 "Una máquina para abonar tierras de cultivo", de Florentino Berges Gonzales, de Montevideo. — Acta N.º 8.664 "Mejoras en un método de preparar sales de penicilina y las sales de penicilina resultantes de dicho método", de Commercial Solvents Corporation, de EE. UU. de América. — Acta N.º 9.733 "Mejoras en o relacionadas con una plancha de vapor calentada con electricidad", de The Hoover Company, de EE. UU. de América. — Acta N.º 6.270 "Mejoras en o relativas a la preparación de 2 sulfanilamido pirazina", de la American Cyanamid Company, de EE. UU. de América.

—Pasan a la Cámara de Industrias: Acta N.º 9.418 "Mejoras en procedimientos para la elaboración de cemento para construcción", de Belisario Maldonado Perez, y otros. — Acta N.º 8.773 "Mejoras en dispositivo revelador de fotocopias", de Lumoprint, Fabrik Photographischer Gerate Dr. Boger K. G., de Alemania. — Acta N.º 9.641 "Procedimiento y dispositivo para la unión y separación de piezas metálicas", de Ulrich Brunch, de Alemania. — Acta N.º 6.494 "Procedimiento para la obtención de estearina de mezclas de ácidos grasos que contienen sustancias insaponificables", de Gustavo Neudert, de Buenos Aires. — Acta N.º 10.447 "Un producto que aumenta el rendimiento de la nafta, gas-oil y kerosene", de Julio Castro Fher, de Montevideo. — Acta número 9.670 "Canasto de lavado para la máquina lavadora de ropa", de "Uber" Ubezzi, Bértola y Cia., de Montevideo. — Acta N.º 10.680 "Mejoras en paneles para construcciones", de Kurt Boerger de Montevideo. — Acta N.º 10.439 "Nueva Parrilla", de Diego Rodríguez Venegas, de Montevideo. — Acta N.º 6.066 "Nuevo tipo de cerradura para muebles en general en los cuales se suprimen los gorges

o fladores con elásticos individuales", de Orestes Ghia, de Montevideo. —

—Se autorizan las siguientes inscripciones de marcas: Acta N.º 45.863 "Rectosedan", de la Cia. Ind. Farmacéutica Ltda., de Montevideo. — Acta N.º 47.496 "Cimier", de Jacobo Cachovsky, de Montevideo. — Acta N.º 51.740 "Globe", de Globe Slicin Machine Co. Inc., de EE. UU. de América.

Se autorizan las siguientes anotaciones de cambio de nombre: Acta N.º 63.370 "Etiqueta", de la Soc. Bestrand de Mun y Ccompañia, de Francia. — Acta N.º 48.955 "Packard", de la Packard Motor Car. Company, de EE. UU. de América. — Acta N.º 58.107 "Btaemar", de Imes Hender, son y Co. Ltd., de Inglaterra. — Número 63.103 "Dieldrin", de Shell Mex Uruguay Ltd., de Montevideo. — N.º 46.039 "Helene Curtis", de National Industries, Inc., de EE. UU. de América.

—Por resolución superior se autorizan las siguientes transferencias de marcas: N.º 51.557 "Arsinette", de la William Cooper y Nephews Ltda., de Montevideo. — N.º 62.692 "Nisperina", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 55.392 "Flor de España", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 55.810 "Búfalo", de Oyama S. A., de Montevideo. — Número 47.318 "Texas", de Barrera Hnos. S. A., de Montevideo. — N.º 47.319 "De Barrera Hnos. S. A.", de Montevideo. — N.º 47.568 "Rolando Queirolo", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 47.859 "El Aragonés", de Rolando Queirolo, de Montevideo. — N.º 47.876 "Valencia", de Oyama S. A., de Montevideo. — Número 48.068 "Murillo", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 48.755 "Queirolo", de Oyama S. A., de Montevideo. — Número 50.310 "Cristobal Colón", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 50.447 "Congreve", de Barrera Hnos. S. A., de Montevideo. — N.º 62.717 "Non Plus Ultra", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 63.510 "Ravocaine", de Winthrop Products, Inc., de EE. UU. de América. — N.º 63.421 "Benzetacil", de American Home Products Corporation de EE. UU. de América. — N.º 63.795 "Vox", de Vox Productions, Inc., de EE. UU. de América. — N.º 63.729 "Ledenrnat", de la American Cyahamid Company, de EE. UU. de América. — N.º 63.702 "Hálo", de Colgate Palmolive Company, de EE. UU. de América. — N.º 63.656 "Chypron", de Eau de Cologne y Parfumerie - Fabrik Glockengasse, N.º 4711 genuber per Pferdpost Von Ferd, Mulhens, de Alemania. — N.º 62.718 "Amara Queirolo", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 43.837 "Fiambrión", de Kasdorf S. A., de Montevideo. — N.º 44.009 "Olimpia", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 42.807 "El Peñón", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 42.806 "Pompeya", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 43.072 "Kadolaka", de Kasdorf S. A., de Montevideo. — Número 43.114 "Miura", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 43.509 "Queirolo", de Oyama S. A., de Montevideo. — Número 43.764 "Saturno", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 58.369 "Monte Bianco", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 60.361 "Ideales", de Barrera Hnos. S. A., de Montevideo. — N.º 59.998 "María Cristina", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 57.856 "Catedral de Reims", de Oyama S. A., de Montevideo. — Número 44.114 "resto", de José Castiglioni (h) Soc. Ano., de Montevideo. — Número 62.691 "Quemada", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 55.338 "Rotterdam", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 51.864 "Cruz Blanca", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 59.913 "Amarga - Amarín Venus", de Oyama S. A., de Montevideo. — N.º 55.410 "Oro Miel", de Oyama S. A., de Montevideo.

—Se conceden las siguientes patentes de invención: Acta 8.348 "Nuevos agen-

tes antipalúdicos y métodos para preparados", de Burroughs Welcome y Co. (U.S.A.), de EE. UU. de América. — Acta 8.018 "Mejoras en o relacionadas con la preparación de antibióticos", de Chas Ppizer y Co. Inc., de EE. UU. de América.

Vista por el término de 20 días: Acta N.º 9.756 "Una máquina para la fabricación rápida de calzado", de Jaime Rotger Alemany, de Montevideo. — Acta Número 10.508 "Mejoras en sistema de reductor exclusivo del diámetro externo del orificio de oído, para boquillas de primus, de ruido", de Manuel Pallares Padilla, de Montevideo. — Acta N.º 9.305 "Mejoras en marmitas para cocina", de Juan Goldstein y Angel Colombo, de Buenos Aires. — Acta N.º 10.792 "Nuevos derivados del carbazol y sus procedimientos de preparación", de Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc. — Acta N.º 10.755 "Procedimiento de fabricación de fosfato bicálcico", de Comptoir des Phosphates de l'Afrique du Nord, de Francia. — Acta N.º 9.904 "Un dispositivo para varios usos como la caza y la pesca, especialmente diseñado para uso de hombres vanas y balsas de salvamento", de Carlos Travieso Fernández, de Montevideo. — Acta N.º 10.506 "Mejoras en sistema en reductores del diámetro externo del orificio de oído, para boquillas de primus", de Manuel Pallares Padilla, de Montevideo. — Acta N.º 10.798 "Nueva máquina de lavar", de César Ellero, Miguel Angel Gargano, Carlos Omar Rago y Andrés Luis Pereyras, de Montevideo. — Acta N.º 10.165 "Aplicación de un nuevo sistema para transmitir y multiplicar un determinado arco, en los movimientos alternativos de agitadores o tambores, en máquinas de lavar ropa", de General Electric S. A., de Montevideo.

—Prórrogas concedidas por el término de 90 días: Acta N.º 9.630 "Mejoramientos relativos al tratamiento de textiles y materiales similares", de Standfast Dyers y Printers Ltd., de Inglaterra. — Acta N.º 1.039 (Privilegio Industrial Acta 1.039), de Benito Pintos Hazzan, de Montevideo. — Acta N.º 70.364 "Cremovan", de la Com. Ind. Farmacéutica Ltda., de Montevideo. — Acta N.º 10.011 "Tratamiento de hilazas, hilos y los similares para uso textiles", de I. Du Poit De Nemours Adm Compan., de EE. UU. de América. — Acta N.º 6.989 "Un procedimiento para la elaboración de jabones, indolos, partiendo de aceites o grasas malos, mezclados con aceites de esperma", de la Com. Ind., de Chile. — Acta Número 69.686 "Matador", de Transglobal Ltda., de Montevideo.

—Se concede vista por el término de 30 días por el pago de la Primera Anualidad: Acta N.º 7.479 "Perfeccionamientos en lapiceras estilográficas o fuente", de Camacho y Cia., de Buenos Aires. — Acta N.º 7.904 "Mejoras en o relativas al tratamiento de lana y de material que contiene lana", de la American Cyanamid Co., de EE. UU. de América. — Acta número 7.260 "Dispositivo para fabricar mangueras y tubos enroscados estriados helicoidamente", de Kopex Maschinen S. A., de Suiza.

—Renovaciones concedidas: Acta número 73.624 "Maderas", a favor de Myrurgia S. A., de Barcelona, España. — Acta N.º 73.623 "Hindustan", a favor de la misma firma y lugar. — Acta número 73.622 "Suspiro de granada" a favor de la misma firma y lugar. — Acta número 73.621 "Flor de Elasón", a favor de la misma firma y lugar. — Acta N.º 73.620 "Maderas de Oriente", a favor de la misma firma y lugar. — Acta N.º 73.605 "Asturias", a favor de Cia. Oleaginosa Urug. S. A. Com. e Ind. de Montevideo. — Acta N.º 73.597 "Colt", a favor de Colt's Manufacturing Company, de EE. UU. de América. Acta N.º 73.549 "Mattereme",

a favor de Eau de Cologne y Parfumerie Fabrik", Glockengasse N.º 4711", Gege-nuber Der Pferdepost Von Ferd. Mulhens, de Colonia, Alemania. — Acta N.º 73.369 "Cifram", a favor de Materprim S. R. L. de Montevideo. — Acta N.º 73.548 "Tos-ca", a favor de Eau de Cologne y Parfu-merie Fabrik", Glockengasse N.º 4711", Genenuber Der Pferdepost Von Ferd. Mulhens, de Colonia, Alemania. — Acta nú-mero 73.550 "Rhinegold", de la misma firma y lugar. — Acta N.º 73.844 "Trix", a favor de José Pumarega, de Montevideo. — Acta N.º 73.625 "Goyesca", a favor de Myrurgia S. A., de Barcelona, España. — Acta N.º 73.843 "Fontanares", a fa-vor de S. A. Manufactura de Tabacos Falcon Calco y Cia. Ltda., de Buenos Aires, (Rep. Argentina). — Acta N.º 73.563 "Perborol", a favor de A. G. Mayon, de Montevideo. — Acta N.º 73.559 "Kao-magma", a favor de American Home Pro-ducts Corporation, de EE. UU. de Amé-rica. — Acta N.º 73.644 "Johann Faber", a favor de A. W. Faber-Castell, de Nu-remberg, Alemania. — Acta N.º 73.627 "Morisco", a favor de Myrurgia S. A., de Barcelona, España. — Acta N.º 73.572 "Franklin", a favor de Franklin Camacho, de Montevideo. — Acta N.º 73.635 "Con-ventos", a favor de Luis Comas Compte S. C. de Memo, Departamento de Cerro Largo, (Rep. O. del Uruguay). — Acta N.º 73.725 "Astrocar", a favor de Produc-tos Farmacéuticos Astra S. de Resp. Ltda. de Buenos Aires, (Rep. Argentina). — Acta N.º 73.448 "Boston", a favor de N. Dermedjian Hnos., de Montevideo. — Ac-ta N.º 73.744 "Cerebos", a favor de Ce-rebos Ltd., de Londres, Inglaterra. — Acta N.º 73.677 "Syncortyl", a favor de Laboratoires Francais de Chimiotherapie Ste. Anonyme, de París, de Francia. — Acta N.º 73.688 "Naicol", a favor de Ab-bott Laboratories, de Chicago, EE. UU. de América. — Acta N.º 73.773 "Santa Inés", a favor de Industrias Lanera del Uruguay (ILDU), S. A., de Montevideo. — Acta N.º 73.823 "Marmite", a favor de The Marmite Food Extract Co. Ltda., de Londres, Inglaterra. — Acta número 73.810 "Garlock", a favor de The Gar-lock Packing Company, de EE. UU. de América. — Acta N.º 73.552 "Jockey Club", a favor de Caussi Hnos. Ltda., de Montevideo, Uruguay. — Acta N.º 73.726 "Tonivimín", a favor de Productos Far-macéuticos Astra S. de Resp. Ltda., de Buenos Aires, República Argentina. — Acta N.º 73.558 "Plastules", a favor de American Home Products Corporation, de EE. UU. de América. — Acta N.º 73.560 "Beprón", a favor de la misma firma y lu-gar. — Acta N.º 73.655 "Coluton", a favor de Mario C. Isola, de Montevideo, Uruguay. — Acta N.º 73.634 "Gamberoni", a favor de Gamberoni S. A., de Mon-tevideo. — Acta N.º 73.633 "Gambero-

ni", a favor de la misma firma y lugar. — Acta N.º 73.632 "Gorro Frigio", a favor de Larrieux, García y Cia., de Mon-tevideo. — Acta N.º 73.561 "Gerasol", a favor de J. R. Geigy S. A., de Bas-silea, Suiza. — Acta N.º 73.641 "Pino-pan", a favor de Agfa Aktiengesellschaft für Photofabrikation, de Alemania. — Ac-ta N.º 73.640 "Raymat", a favor de Ray-mat S. A., Productos Alimenticios, de Buenos Aires, República Argentina. — Acta N.º 73.551 "Queen Mary", a favor de Thirion S. A. de Montevideo, Uruguay. — Acta N.º 73.510 "Esso", a favor de Esso Standard Oil Company, de Delawa-re, EE. UU. de América. — Acta nú-mero 73.596 "Timonox", a favor de As-sociate Lead Manufacturers Ltd., de In-glaterra. — Acta N.º 73.591 "La Espiga-dora", a favor de El Chaná, J. Pastori-no S. A., de Montevideo. — Acta nú-mero 73.581 "Alpacrom", a favor de Ina-met S. A., (Industrializadora Nacional de Metales S. A.), de Montevideo. — Ac-ta N.º 73.577 "Hipofmelanin", a favor de Héctor Santini, de Montevideo. — Acta N.º 73.675 "Veinotropo", a favor de So-ciedad De Therapie Biochimique, de París, Francia. — Acta N.º 73.761 "Supra", a favor de Joaquín Puiggros, de Montevi-deo. — Acta N.º 73.826 "Emblemática", a favor de Fcas. Nacionales de Cervezas S. A., de Montevideo. — Acta N.º 73.827 "C. O. S. A.", de la misma firma y lu-gar. — Acta N.º 73.756 "Ovo-Sedicy", a favor de Veritas Drug Company Ltd., de Inglaterra. — Acta N.º 73.676 "Eetogy-nestryl", a favor de Laboratoires Francais de Chemiotherapie Ste. Anony. de París, Francia. — Acta N.º 73.647 "Aralen", a favor de Winthrop Products, Inc. de EE. UU. de América. — Acta N.º 73.646 "Portruga", a favor de Agfa Aktiengesells-ffur Photofabrikation, de Alemania. — Acta N.º 73.645 "Superpan", de la misma firma y lugar. — Acta N.º 73.628 "Flo-res del Mal", de Myrurgia S. A., de Bar-celona, España. — Acta N.º 73.626 "Em-blemática", a favor de la misma firma y lugar. — Acta N.º 73.653 "Apolo", a favor de José Rodríguez y Rodríguez, de Montevideo. — Acta N.º 73.652 "Thew", a favor de The Thew Shovel Company, de EE. UU. de América. — Acta N.º 73.637 "Carborundum", a favor de The Carbo-rundum Company, de EE. UU. de Améri-ca. — Acta N.º 73.636 "Manhattan", a favor de The Manhattan Shirt Company, de EE. UU. de América. — Acta núme-ro 73.755 "Apodon", a favor de Veritas Drug Company Ltd., de Inglaterra. — Ac-ta N.º 73.897 "Wander", a favor de doc-tor A. Wander, S. A., de Berna, Suiza. — Acta N.º 73.968 "Razmurray", a favor de Manuel Buceta Barbara, de Montevideo. — Acta N.º 73.964 "Neo-Riodine", a favor de Pierre Astier, de París, Francia.

— Acta N.º 73.965 "Teletype", a favor de Teletype Corporation, de EE. UU. de América. — Acta N.º 73.686 "Productos de alpargatas", a favor de S. A. Fábrica Uruguaya de Alpargatas, de Montevideo. — Acta N.º 73.687 "Kavitin Abbott", a favor de Abbott Laboratories, de Chicago, EE. UU. de América. — Acta N.º 73.712 "Ferrocrete", a favor de The Associated Portland Cement Manufacturers Ltd. de Londres, Inglaterra. — Acta N.º 73.774 "Tamandú", a favor de The Chillington Tool Company Ltd. de Inglaterra. — Ac-ta N.º 73.654 "Dermodectol", a favor de Mario C. Isola, de Montevideo. — Acta N.º 73.990 "Liticil", de Cosme de los Santos, de Montevideo. — Acta número 74.024 "Levantarina", a favor de Terrono y Giolito S. de Resp. Ltda. Cap. pe-sos 170.000, de Buenos Aires, República Argentina. — Acta N.º 73.981 "Visca-chi", a favor de Industrias Químicas Uru-guayas "Duperial", de Montevideo. — Acta N.º 73.595 "Emblemática", a favor de Paul Kacques Krug, de Reims, Fran-cia. — Acta N.º 73.661 "Kinsey Disti-ling Corp. de EE. UU. de América. — Acta N.º 73.664 "Life Savers", a favor de Life Savers Corp. de EE. UU. de Amé-rica. — Acta N.º 73.662 "Lacalba", a favor de Alba S. Limitada, de Montevideo. — Acta N.º 73.954 "Director", a favor de A. y M. Smith Limited, de Averdeen, Gran Bretaña. — Acta N.º 73.953 "Dis-necor", a favor de Eduardo Marques Cas-tro S. A., de Montevideo. — Acta nú-mero 73.962 "Bella Aurora", a favor de Drogueria Franco Inglesa S. A., de Bue-nos Aires, (República Argentina. — Acta N.º 73.978 "Aguila", a favor de Gaione Hnos. S. C. de Pueblo Rodríguez, Depar-tamento de San José, República O. del Uruguay. — Acta N.º 73.667 "Biela", a favor de Mc. Millan Middleditch y Cia. S. L. R. de Montevideo. — Acta núme-ro 73.666 "Crown Brand", de Cia. de Jarcia de Matanzas S. A., de Provincia de Matanzas, República de Cuba. — Acta N.º 73.665 "Charter Cak", a favor de Continel Distilling Corporation, de EE. UU. de América. — Acta N.º 74.043 "Imbertau", a favor de Pedro Vilanova, de Montevideo. — Acta N.º 74.072 "El Grajo", a favor de Oyama S. A., de Mon-tevideo. — Acta N.º 74.082 "Turquois", a favor de Eagle Pencil Company, de EE. UU. de América. — Acta N.º 74.087 "El Gauchito", a favor Viuda e Hijo de Alberto Pont, de Montevideo. — Acta N.º 73.685 "El Cardo", a favor de S. A. Fábrica Uruguaya de Alpargatas, de Mon-tevideo. — Acta N.º 73.979 "Aguila", a favor de Gaione Hnos. de Pueblo Rodrí-guez, Departamento de San José, Repúbli-ca O. del Uruguay.

La Secretaría.

## SOCIEDADES ANONIMAS Y POR ACCIONES

### OBLIGACION DE PUBLICAR SUS BALANCES

Por el artículo 12 de la ley 12.080, de 11 de diciembre de 1953, se modificó el artículo 74 de la ley 11.924, de 27 de marzo de 1953, referente a la obligatoriedad de publicar balances, en la forma que sigue:

"Artículo 74. Las sociedades por acciones estarán obligadas a publicar en el Diario Oficial el balance general, estado de pérdidas y ganancias y proyecto de distribución de utilidades, dentro de los ciento cincuenta días de cierre del ejercicio, previa visación de la Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas".

**MUY IMPORTANTE.** — Los avisadores de la Capital deben observar cómo aparecen sus textos, indicando a las 24 horas de circular aquéllos los errores a subsanar. Para avisos del interior, el plazo se amplía de acuerdo con la forma de realizarse el servicio de Correos. La demora en ordenar correccio-nes hace perder el derecho de reinscripción.

(Continuación de la Asamblea General realizada los días 18 y 19 de octubre de 1955)

que estos \$ 3.000.000.00 le pertenecen? ¿Qué nuevos servicios, qué mejoras ha introducido en los viejos servicios que justifiquen que una nueva o mayor retribución?

La pretensión de la CUTCSA es semejante en este caso, a la que afirmarían aquellos comerciantes que dijeran: Contribuimos al Estado con los impuestos que pagan los consumidores; o los escribanos que recauden para éste, los impuestos que pagan sus clientes; y que en función de ello, éstos y aquéllos, dijeran que se trata de una exacción, pues tales tributos les pertenecerían...

Tomadas en conjunto las líneas, considerados como un solo sistema todos los servicios, fundamentando la unificación en la unidad del departamento, ni la CUTCSA ni la AMDET, tienen derecho a la recaudación por el tributo creado por el decreto 9.843. Lo que produce el servicio debe volver al servicio, por los conceptos anexos al mismo servicio.

Ni la AMDET ni la CUTCSA tienen tampoco derecho a las líneas que recorren sus respectivos autobuses. Si mañana el Municipio cambiara los recorridos de una y otra, ni ésta ni aquélla, tendrían derecho a reclamar. El Gobierno Departamental no ha enajenado los servicios públicos ni podría hacerlo, aunque algunos propietarios de la empresa privada creyeran que pueden comprar y vender los autobuses "con línea y todo".

Por lo tanto, la invalidación de la Ordenanza conduciendo, entonces, al régimen de permisos precarios y revocables creado por el Decreto 5.974 y el restablecimiento para el Gobierno Departamental del derecho de ordenar o reordenar los recorridos existentes sin ningún derecho de reclamación por parte de las empresas privadas.

Para terminar y resumiendo los cuatro puntos en que se condensa la reclamación a estudio de la Asamblea General, diremos, en forma afirmativa: 1.º) El Decreto 9.843 ha sido sancionado con acatamiento de las competencias atribuidas por la Constitución a los órganos que integran el Gobierno Departamental de Montevideo.

No existe renuncia ni delegación de funciones de la Junta Departamental al Concejo Departamental; el órgano ejecutivo municipal era y sigue siendo competente para otorgar autorizaciones y permisos para los servicios de transporte colectivo de pasajeros. Así era bajo la Constitución de 1918, bajo la Constitución de 1934, y sigue siéndolo bajo la que está en vigor. Durante la vigencia de la Constitución de 1942, fué dictado el Decreto 5.974, bajo cuyo imperio se hallaban circulando los autobuses después de decretada la caducidad de la concesión otorgada por el Decreto 1.750, y seguirá circulando hasta la aplicación del sistema coordinado que se implanta por la Ordenanza objetada.

Los permisarios particulares, incluso la CUTCSA, no impugnan esa competencia del Concejo cuando los beneficia o les otorga las resoluciones que le solicitan; tampoco impugnaron la competencia del Gobierno Departamental cuando éste les autorizó aumentos de tarifas, cuyos excedentes sobre la diferencia de salarios se embolsaron sin mejorar los servicios.

En segundo lugar, el Decreto 9.843 acata las limitaciones impuestas por la Constitución al poder tributario de los Municipios.

Ha creado una tasa para cubrir los aumentos de sueldos, salarios y cargas sociales anexas que los permisarios particulares no quisieron pagar.

El excedente de lo que se recaude no irá a engrosar las ganancias ya crecidas de los transportadores privados, sino que será devuelto a los usuarios bajo forma de nuevas líneas y coordinación de servicios, sin atender a que sean productivas o no; bastará con que sean necesarios a la población.

Como la coordinación y fiscalización total del sistema de transporte estarán a cargo del Gobierno Departamental, quien además paga y pagará las diferencias de salarios, etc., ¿puede pretenderse que no hay servicio prestado por el Municipio; en contraprestación de la tasa? Por lo demás, como ya lo demostramos, los propietarios de autobuses, incluso la CUTCSA, carecen de legitimación, de argumentos suficientes para reclamar contra la tasa creada por el Decreto 9843, de la que son beneficiarios en una buena parte de su producido.

En tercer lugar el Decreto 9.843 no viola, ni siquiera roza, el principio constitucional de protección a la propiedad y el trabajo.

La ordenanza crea un sistema de coordinación de los transportes; a lo que tiene derecho, y llama a los particulares interesados en adherirse, bajo las condiciones que expresa.

En esas mismas condiciones, no hay áleas ni riesgos; se asegura la satisfacción de los costos, se asegura la retribución decorosa de los propietarios y los trabajadores, se ase-

gura la amortización y la reposición de los vehículos, se asegura el aumento de aquella retribución mediante el pago de primas a propietarios y trabajadores que sinceramente impulsan el sistema con su labor.

Lo que no se asegura es que nadie obtendrá remuneraciones sin servicio ni excedentes no ganados, por el simple juego de quedarse con las diferencias del producido de la tasa y la suma que realmente reclamen los laudos de salarios. Los excedentes de la tasa, deben volver y volverán al usuario, bajo forma de nuevas líneas y coordinación de servicios.

El Decreto 9.843 no viola ni siquiera roza, el principio de igualdad de todos ante la ley.

Lo que pasa es que la CUTCSA pretende olvidar que AMDET fué creada por ley para atender un servicio público, con pérdidas si fuera necesario. CUTCSA fué creada por capitalistas para obtener ganancias en la explotación de ese servicio. Si tal servicio no da ganancia, la empresa pública debe igual ser mantenida. Pero la empresa privada no se puede sostener, porque los capitalistas no son filántropos.

Pero tampoco lo es el Estado o el Municipio, quien si tiene la obligación de mantener un servicio público deficitario, no tiene la obligación de enriquecer o permitir el enriquecimiento indebido de los capitalistas.

Por enriquecimiento indebido entendemos, —ya se ha dicho— todo lo que excede a los costos, la amortización y las remuneraciones, con primas o sin ellas, es decir, los lucros no ganados, ni justificados por nuevos o mejores servicios reconocidos.

El Decreto 9.843 es, pues constitucional y legal.

Ha sido sancionado respetando las atribuciones de ambos órganos del Gobierno Departamental y manteniendo en lo posible, legal y económicamente, la vinculación que actualmente mantienen los propietarios de autobuses, incluso la CUTCSA, con el servicio público de Transporte.

Se ha creado un sistema de coordinación que asegura beneficios reales y conocidos de antemano para los usuarios y los propietarios particulares; y se reserva al poder público el ejercicio de sus derechos de fiscalización y reglamentación que le competen por Constitución y ley.

He terminado, señor Presidente.

SEÑOR ACQUISTAPACE. — ¿Me permite, señor Presidente?

En realidad, el doctor Ganón ha hecho una exposición desde el punto de vista doctrinario, creo que exhaustiva y expresando conceptos que han sido vertidos en las distintas reuniones del Concejo Departamental. Sin embargo, como este tema ha tenido tantas derivaciones y tantos comentarios y afecta tantos intereses, si el señor Presidente de la Comisión no tuviera inconveniente agregaría algunas pequeñas puntualizaciones, que sin entrar estrictamente al aspecto jurídico, sirven para situar el problema un poco mejor.

SEÑOR PRESIDENTE. — Corresponde oírlo.

Tiene la palabra el señor Presidente del Concejo Departamental.

SEÑOR ACQUISTAPACE. — En primer lugar, quisiera decir que el Concejo Departamental, al preparar y estudiar esta ordenanza no lo ha hecho con ánimo agresivo frente a CUTCSA en ningún momento. Esa acusación parece surgir de toda la prédica que ha hecho la empresa: El Concejo Departamental ha tenido un ciudadano permanente en atender los intereses de CUTCSA porque entiende que ella ha realizado en los servicios públicos y además, está llamada a realizar, un servicio que considera muy importante y que no conviene, por lo menos en la situación actual y tal vez por mucho tiempo, que pase a manos de la entidad oficial que es AMDET.

Nosotros hemos tenido cuidado permanente de que cada una de las disposiciones defendiera el servicio que CUTCSA podría prestar porque entendíamos que era útil a la población.

Simultáneamente, hemos cuidado que la vigilancia que nosotros poníamos a los intereses de las empresas privadas no significara olvidar o ser débiles en la defensa de los intereses de la población.

La ordenanza fué hecha en un contacto permanente con la empresa, conversando sobre todos los aspectos. Nosotros fuimos tan optimistas que en el momento mismo de terminar el trabajo de la ordenanza creímos haber llegado a una fórmula que podría ser firmada de común acuerdo. Pero en ese momento nos dimos cuenta de que la empresa nos había ido llevando a extremos que eran los más favorables a su gestión, pero que después la impugnaría.

Esa lucha entre la defensa de los intereses de la empresa y la de los intereses de la población que nosotros entendíamos que hacíamos, está traducida en distintos aspectos que no están estrictamente contenidos en la ordenanza y conviene citar algunas.

CUTCSA hace confusión en su prédica de un pago de \$ 1.500.00 que tiene que hacer obligadamente de acuerdo con una resolución del Concejo, y cuando hace referencia dice: se nos limitan las ganancias en \$ 500 y además se nos obliga al pago de \$ 1.500.000. Son dos cosas separadas, distintas y que no se suman. Conviene aclararlo y es oportuno hacerlo al mostrar cuáles fueron nuestros mecanismos de relación con CUTCSA y donde están los desentendimientos.

El Gobierno nacional recibió un laudo del consejo de salarios que aumentaba las remuneraciones del personal en una suma que, en total, comprendidos todos los obreros del transporte, llegaba aproximadamente a \$ 10.000.000. El propio consejo de salarios al laudar, estableció que CUTCSA no tenía los recursos necesarios para pagar ese laudo.

El Consejo Nacional recibió el laudo y simultáneamente, el pedido del Concejo Departamental de que las situaciones que se reconocieran en el laudo fueran documentadas. En una palabra, que si el consejo de salarios entendía que CUTCSA no podía pagar el laudo que se dictaba se pedía al Consejo Nacional, que se incorporaran los elementos de juicio de carácter contable que llevaban a esa determinación.

En ese momento, el consejo de salarios, tuvo que reconocer que no tenía elementos contables para juzgar y que se había apoyado en las cifras e informes proporcionados por la propia CUTCSA.

El Consejo Nacional, estudió el laudo, esa condición impuesta, la información del consejo de salarios y dictó su resolución estableciendo que los aumentos y la retroactividad decretada sería exigible a partir de la fecha de la resolución del Gobierno Departamental de Montevideo declarando que CUTCSA puede absorberlos, o disponiendo los medios o recursos total o parcialmente necesarios a juicio para que la empresa pueda absorberlos.

De manera que cuando este laudo llegó al Concejo Departamental traía la obligación de arbitrar recursos por \$ 10.000.000 y la necesidad de estudiar la situación financiera de CUTCSA. El Gobierno Departamental ya había tenido la preocupación, antes del laudo, de que estaba subsidiando con recursos provenientes de distintos gravámenes, a CUTCSA para pagar laudos anteriores; también lo estaba haciendo para AMDET, pero de AMDET, tenía toda la documentación contable en cambio de CUTCSA no la tenía. Es decir, no había elementos de juicio totales como para determinar si la empresa no sólo estaba en condiciones de pagar ese laudo, sino si estaba recibiendo con justicia los subsidios que tenía para compensar las pérdidas que le ocasionaban los laudos anteriores.

Con esa preocupación el Gobierno Departamental había designado un grupo de técnicos para que fueran estudiando la situación de CUTCSA. CUTCSA está integrada por un número de propietarios, muy importantes. Esos propietarios son dueños relativamente de un 20 o/o de los ómnibus, el resto, el 80 o/o son de propiedad individual de distintos grupos, o de distintos propietarios.

Sobre los ómnibus de propiedad colectiva se lleva contabilidad. Los ómnibus de propiedad colectiva tienen un régimen similar al de AMDET y por eso mismo, tampoco dan ganancia. Los ómnibus de propiedad individual no tienen contabilidad más que de los grandes gastos, excepto en los gastos de reparaciones, que son también muy importantes; pero en todo lo que está fuera de la órbita del régimen de la compañía CUTCSA, sobre eso no hay contabilidad.

Quiere decir que es imposible —y así lo vieron los técnicos— llegar a una conclusión de carácter contable que fie, en forma indiscutible el resultado económico de la explotación.

Esa información técnica que nosotros teníamos, llegaba simultáneamente con el laudo que nos obligaba a hacer una revisión. Esa revisión no es ni siquiera posible, hasta el momento que se dicta esta ordenanza, porque CUTCSA que estaba sometida a un régimen de concesión había incorporado a la concesión primitiva, sus estatutos, y dentro de ellos estaban las obligaciones de los propietarios a determinados cumplimientos, pero no estaba la obligación de llevar su contabilidad individual y de ponerla a disposición de la autoridad municipal.

Es decir que CUTCSA ofrecía sus ómnibus y quería poner, según decía, a disposición del Gobierno Departamental todos los elementos, pero solamente lo que existía, y del 80 o/o de los vehículos no existía ninguna documentación.

Quiere decir que en ese momento el Gobierno Departamental cuando tuvo que declarar si CUTCSA estaba o no en condiciones de absorber el costo del laudo, no tenía valores numéricos certificados por una contabilidad que le permitiera hacerlo. ¿Cómo se manejó el Gobierno Departamental? Con estadísticas de la propia empresa; tomando los resultados económicos sobre lo que había con-

tabilidad: de 126 vehículos. Pero resultaba que estos 126 vehículos estaban prestando servicios que no eran generales porque siendo de propiedad colectiva no tenían servicio de preferencia, sino aquellos que significaban posibilidad de pérdidas.

Sin embargo, tomando los rendimientos de esos servicios, tomando los recorridos de esos servicios de propiedad individual, controlando los consumos de combustibles, de unos a otros, en fin, tomando esas cifras que estaban registradas, y haciendo generalizaciones, a partir de lo que se tenía para llevar a lo que no se tenía, se podía sacar datos presuntivos de lo que podía ser la contabilidad total de CUTCSA.

El Gobierno Departamental, el Concejo Departamental, analizó el estudio que los técnicos hicieron bajo esas directivas y llegó a la conclusión que se podía estimar que, una vez cubiertos todos los gastos de la empresa CUTCSA, —llamando gastos a los combustibles, lubricantes, reparaciones, conservación general, amortizaciones,— quedaba un margen de ganancias, que se podría considerar razonable, del orden de 500 a 800 pesos, por vehículo, para cubrir intereses y vigilancia de los patrones y demás. Quedaba, todavía, una ganancia superabundante que, con los datos estimativos que surgían de las partes contables de que se disponía y con algún otro dato que se supuso para el resto, podría fijarse en un millón y medio de pesos, en el momento en que el Gobierno Departamental tenía que declarar si CUTCSA podía o no pagar el laudo. Con ese cálculo de que había una ganancia superabundante, el Gobierno Departamental hizo la declaración que correspondía, estableciendo que CUTCSA podía pagar, de acuerdo con los informes y estudios, esa suma de un millón y medio de pesos. Por supuesto, que esto tenía un fondo de arbitrariedad porque no era un cálculo exacto, ya que no se disponía de elementos contables.

Entonces, la resolución, con todos los fundamentos que son más o menos los que he dicho, estableció: "El Concejo Departamental de Montevideo resuelve en las actuales circunstancias, y de acuerdo con los datos suministrados por la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima, esa empresa y los permisarios particulares, cuyos coches son administrados por la misma, pueden absorber los aumentos decretados por el laudo de 4 de marzo de 1955 hasta la cantidad de un millón y medio de pesos anuales. 2.º) Establecer que con relación a la suma necesaria para complementar los pagos a efectuarse por la aplicación del mencionado laudo, este Departamento Ejecutivo propondrá a la Junta Departamental la creación de los recursos necesarios".

Dicho así parecería que aquí faltaba el aspecto de futuro. En el proceso de ese año se establece que se pague un millón y medio de pesos con los recursos de CUTCSA, y no se dice si esos recursos quedan al firme o pueden ser modificados según el resultado económico.

Pero eso surge de los antecedentes, surge de la parte expositiva, donde se establece: "3.º Que de los informes de la Comisión Especial resulta que CUTCSA está en condiciones de abonar parcialmente el laudo, debiendo arbitrase los recursos necesarios para completar su pago mediante una solución que garantice a los usuarios el mínimo de costo compatible con la continuidad de los servicios.

4.º Que en consecuencia, en este acto se determinará la suma que la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A. puede absorber anualmente, sin perjuicio de los reintegros o pagos complementarios que correspondan, una vez practicados la liquidación y ajuste definitivo, de acuerdo con el sistema de contralor que se establece en el proyecto que con esta fecha se remite a consideración de la Junta Departamental.

CUTCSA ha hecho omisión de estos considerandos y ha dicho que se le ha impuesto al pago de un millón y medio de pesos.

El Gobierno Nacional estableció una solución para que el laudo tuviera fecha de vigencia en el momento en que el Gobierno Departamental estableciera hasta donde podía absorber CUTCSA el laudo. Nosotros establecimos hasta un millón y medio de pesos. Pero, simultáneamente, hacíamos notar que faltaba información, que no había elementos contables y que durante un año se iba a realizar un proceso contable para revisar el sistema económico de la empresa, tanto sobre sus vehículos como sobre sus gastos y que al cabo de un año se fijarían las cifras definitivas haciéndose las devoluciones o los cobros correspondientes.

A este planteamiento CUTCSA contestó que no disponía de esa suma, sino que la ganancia de que podía disponer para pagar, llegaba a 600.000 pesos anuales. Para nosotros, la opinión de CUTCSA no era importante, ya que habíamos hecho una estimación fundada en números discutibles, pero que era una estimación, lo decíamos: aceptábamos la estimación de CUTCSA, ya que era condicionada.

El Gobierno Departamental hizo su declaración diciendo

que aceptaba el pago de 600.000 pesos, condicionado al cumplimiento del proceso contable que se establecía. Si al cambio del año cumplido, resultaba que CUTCSA había tenido una ganancia superabundante de \$ 600.000, nosotros dábamos la cuenta por saldada. Si la ganancia da, como creíamos, de un millón y medio de pesos, esa suma sería la que se debía destinar al pago del laudo, como aporte de CUTCSA. Parece que esto entraba dentro del mecanismo que había establecido el laudo, y, por otra parte, esa afirmación del pago de un millón y medio de pesos o aceptación de los seiscientos mil pesos, era siempre condicionado al resultado final de los análisis que se harían. Frente a esto, CUTCSA declaró que no aceptaba ese procedimiento: o aceptábamos los seiscientos mil pesos, lisa y llanamente; o no había aporte de CUTCSA.

El Gobierno Departamental no tuvo más remedio de confirmar su resolución anterior, estableciendo su deseo de aceptar los seiscientos mil pesos, pero condicionado a la revisión durante un año, y no hubo aporte de CUTCSA que reclama de esta resolución ante el Tribunal de lo Contencioso.

Traigo estos elementos de juicio a colación porque son los disentimientos que teníamos con CUTCSA. En el principio de que había que establecer un contralor contable, CUTCSA y el Gobierno Departamental estaban de acuerdo. CUTCSA dice: "muy bien, estamos de acuerdo en que Uds. revisen nuestros libros", pero cuando llega el momento de poner en práctica cualquier cosa que signifique una verdadera revisión, o que signifique comprometer los elementos económicos de CUTCSA, allí aparecen los disentimientos.

En todo el proceso de la ordenanza esto se ha repetido sistemáticamente. Nos hemos puesto de acuerdo con los principios a poner dentro de la ordenanza, principios que sirven para fijar las relaciones entre CUTCSA y el Gobierno Departamental, pero cuando llega el momento de las relaciones escritas, no nos hemos puesto de acuerdo. Es lógico que así sea, porque nosotros estamos buscando en las normas a regir en el transporte, soluciones de interés general y CUTCSA está buscando soluciones económicas y toma, para eso, como base, la situación actual. ¿Y qué es la situación actual? Es la de que CUTCSA tiene como único competidor a AMDET, en una situación crítica. Nosotros hemos sentido decir repetidamente que se le han dado muchos millones de pesos a AMDET. Lo que se le ha dado ha sido autorizaciones para emisiones de deuda que no han podido ser colocadas y, sobre todo, grandes obligaciones.

La primera obligación, fué la de administrar el tranvía, porque se entendía que era un medio de transporte que no estaba de acuerdo con las necesidades y que era necesario reorganizarlo y establecerlo en un régimen que la compañía tranviaria no podía realizar. La compañía tranviaria tenía concesión hasta 1975.

Esta Compañía estaba haciendo la explotación de un servicio antieconómico que iba a ser en el futuro cada vez más costoso y que traería los mismos problemas que nos trae hoy CUTCSA, en el sentido de reclamar por concepto de laudos, no sólo el importe de los laudos, sino el derecho a un beneficio impugnado, porque estaba vinculado a empresas extranjeras, sobre las que no había ningún contralor. En este caso, con CUTCSA, el panorama es muy similar, porque tenemos los propietarios privados, sobre cuya contabilidad no tenemos contralor, pero existía una diferencia, porque consideramos que el tranvía no era adecuado y consideramos ahora que el ómnibus tiene que ser un elemento de transporte conveniente. Se tomaron los tranvías y la ley le impuso la administración de AMDET. El tranvía va llegando al límite de su duración. Ya cuando los vendió la empresa, estaban en situación de funcionamiento que no hubiera justificado su compra como elemento para seguir transportando por tantos años a la población de Montevideo. Se justifica la compra porque era necesario ir a la evolución y, en ese proceso, se retiraron los tranvías de 13 de Julio. Pero, estas líneas de 13 de Julio, ¿son sustituidas por AMDET? No, por la propia CUTCSA, que recibe el beneficio de que se retiran los tranvías y coloca sus coches primero a un minuto, y a cinco por minuto en determinados momentos del día, y recibe así el beneficio del sacrificio económico de la AMDET.

Cuando el doctor Ganón decía recién que hay una necesidad de hacer un block, decía las palabras de CUTCSA. CUTCSA también siente la necesidad de hacer un block porque, hasta ahora, AMDET trabajó en ese espíritu de sacrificio, no voluntario, sino obligado, y el beneficio económico lo recibió CUTCSA, porque se retiraron los tranvías y no se sustituyeron con ómnibus oficiales, y porque las líneas de gran rendimiento están en manos de CUTCSA. Sus propietarios están recibiendo sumas muy elevadas por rendimiento de sus ómnibus, porque, a medida que desaparecen los tranvías aumenta el transporte que hacen los ómnibus con gran rendimiento, en las líneas principales, hecho con el sacrificio de AMDET.

Eso tiene que terminar en un plazo breve y lo saben los propietarios de CUTCSA, porque AMDET ha comprado 250 trolleybuses y 50 microómnibus y, además, las líneas de AMDET no tienen porque seguir teniendo el régimen de explotación que tenían hasta el momento, de seguir la vía del tranvía. Hasta el momento, AMDET tuvo que ceñirse a las líneas del tranvía. Ahora, cuando AMDET fija sus recorridos lo hace con sentido económico como CUTCSA lo hizo en un principio. De manera que el proyecto general de líneas de AMDET, no tiene una orientación como tuvo en los momentos en que se le encomendó la explotación de los servicios vigentes. Además, los servicios de ómnibus que se le dieron a AMDET no fueron libres, se les dió AMSA y TUSA, dos empresas de ómnibus fundidas, que significaron para AMDET el 15 o/o de los déficit que tuvo.

Además, AMDET tuvo una serie de perjuicios económicos por otras razones ajenas a su voluntad, como el mantenimiento de los abonos tranviarios. Las tarifas de AMDET y CUTCSA no eran iguales. Eran iguales en número, pero AMDET tiene el abono tranviario, que le significó, una pérdida de siete millones de pesos. Esto tiende a desaparecer, porque, cada vez que desaparece un tranvía, desaparecen abonos, y cada vez que desaparece un tranvía se le sustituye por un trolley-buses, y desaparece el sentido a pérdida que tenía la explotación, y además, al tener un número mayor de vehículos, AMDET los puede distribuir con el mismo sentido que los distribuyó CUTCSA, poniéndolos con gran frecuencia en las líneas de buen rendimiento.

Ese es un aspecto económico muy importante.

AMDET tenía, además de AMSA, TUSA y los tranvías, un grupo de ómnibus, pero los ponía en aquellos lugares donde el Municipio quería que se hiciera transporte, y resultaban anti-económicos, con el criterio de servir a muchos barrios. Los ómnibus se pusieron a diez minutos, distribuidos en toda la planta urbana. AMDET recorre prácticamente toda la ciudad de Montevideo, con un número de coches menor que CUTCSA, puestos a diez minutos unos de otros. ¿Qué sucede con eso? Que cuando llega el momento de hacer gran recaudación, al mediodía o al final de la tarde, CUTCSA, que tiene sus coches en reserva, y que los puede poner a un minuto, hace la gran recaudación. AMDET los tiene a diez minutos y no puede poner más, y no recibe el beneficio del pico de tránsito. De manera que, en el momento de ganar, no gana, porque tiene sus coches distribuidos en largos recorridos, pero, por la noche, cuando llega el momento de perder, entonces CUTCSA, si los tiene a un minuto, puede retirar 9 de cada diez, y quedan diez minutos; si retira 19 de cada 20, le quedan 20 minutos. AMDET no puede retirar, porque, si retira los coches, ya los tiene a treinta minutos y está en peores condiciones de CUTCSA, que ha retirado 19. En el momento de perder, AMDET recibe todas las pérdidas, y en el momento de ganar, no gana nunca.

Los ómnibus de AMDET tienen un recorrido el 50 o/o más alto que los coches de CUTCSA, quiere decir que los de AMDET están puestos en trabajo al máximo de utilización y, los otros, de CUTCSA, están a la reserva. Con 50 o/o menos de recorrido en el día, están siempre en perfectas condiciones, además del régimen conveniente de administración hecho directamente por los propietarios.

Todo eso va a modificarse; AMDET pondrá los coches con pequeña frecuencia, y ya lo habrán visto con los trolleybuses. Se pondrán líneas a gran frecuencia en los momentos de ganancia, que se podrán retirar de noche. Además, son 250 vehículos nuevos que entran a la circulación.

Quiero decir, que no es el Gobierno Departamental el que tiene interés en la coordinación, sino que también lo tiene CUTCSA. En eso estamos de acuerdo. No es posible que AMDET fije las líneas por donde crea más conveniente, y que se superpongan con las de CUTCSA, y haya barrios sin servicios.

En estos momentos que empieza a cumplirse con los propósitos de la ley de creación de AMDET, que empieza a hacer sus servicios mejor, que recién se empiezan a retirar los obreros tranviarios, que en número de 1.500 estuvo manteniendo AMDET sin beneficio, pagándoles los mismos laudos y jornales que a los obreros de los ómnibus, y que recién se ha podido empezar a utilizar a algunos de ellos, a los más capaces, en los trolley-buses, en el momento en que todas esas situaciones se superponen, se suman, tenemos que hacer una distribución distinta, y también llega a esa conclusión CUTCSA.

Esta necesidad del block único, tiene además, una exigencia interna en CUTCSA. CUTCSA tiene líneas que ganan mucho dinero, como la línea A; otras, donde ganan menos. El conjunto de los patronos que están en las líneas que ganan menos, eran los que en delegaciones iban a hablar con el Intendente y con los Representantes del Gobierno Departamental, reclamaban y pedían. Se había formado un ambiente tal, de que ganaban poco, que los mismos patronos llegaron a creerlo. Cada uno que ganaba mucho pensaba que era él, porque la administración de

coche hacía que tuviera una ganancia elevada; pero siempre creía que era su ganancia y superior a la de los demás, y estaba orgulloso de su administración, a tal extremo que cuando nosotros fijamos las bases económicas del nuevo servicio, todos los patronos estaban de acuerdo en que una ganancia de \$ 500 u \$ 800, era una buena ganancia.

Tanto es así que en el momento de convenir con el señor Afón cuáles podrían ser los límites de esas ganancias, me dijo aproximadamente cuánto era y le pedí que lo escribiera en un papel que guardamos como un documento porque se trataba de una conversación preliminar. Ese borrador nosotros lo tenemos aquí y el señor Afón escribe: "La CUTCSA adelanta un millón cien mil pesos como contribución y a cuenta de pagos al Municipio para pago de retroactividad. Entraremos a fijar amortización por el valor de reposición de la flota, garantizando ganancia mínima de \$ 500 y con derecho a obtener hasta \$ 800 mensuales por coche comprendido interés y vigilancia".

Quiere decir que CUTCSA entendía que 500 u 800 pesos era una ganancia razonable y resolvía el problema de la coordinación del transporte sobre bases económicas convenientes. Después, CUTCSA, que tenía esas líneas que ganaban y otras que no ganaban, llegó a la conclusión de que para enfrentarse a la ordenanza tenía un punto débil que era esa diferencia de unos propietarios con otros, y se hizo una asamblea y se resolvió que en el futuro se haría una recaudación distribuida uniformemente entre todos los coches. Cuando llegó ese momento cada uno dijo lo que realmente ganaba y parece que 500 y 800 pesos muy pocos los ganaban. ¿Por qué era esa confusión? Porque es imposible saber cuál es el verdadero resultado económico de la empresa, cuando la conservación de los vehículos se hace en casa, cuando no hay garaje, ni lavador, ni rapicero, ni contralor en los grandes gastos, lo que hace las diferencias fundamentales entre la organización colectiva de CUTCSA y la organización de los ómnibus separados. Nosotros creemos que ese aspecto económico de la empresa, de la actividad del patrón, es el que debe conservarse y luchamos para hacer estable esa situación; y digo para hacer estable, porque no lo es, como lo explicó muy bien el doctor Ganón. La estabilidad de CUTCSA es un mito; no existe y sólo pudo mantenerse porque AMDET no estaba en condiciones de hacer el servicio; 1º) porque la ley de AMDET establece la expropiación de los ómnibus de CUTCSA, solución que nosotros no compartimos porque ello hubiera significado entregar los ómnibus de CUTCSA a la AMDET, estando ésta en un proceso de formación que todavía no estaba cumplido, con un personal que no estaba en condiciones y hubiera ello significado la crisis total del servicio.

Como primera cosa dijimos que la expropiación de CUTCSA, no puede ser una aspiración nuestra, mientras AMDET no demuestre que ha tenido un cambio tan radical que justifique la modificación del régimen de empresas privadas. De manera que nosotros entramos a este estudio honestamente sobre la base de mantener a CUTCSA. Encontramos entonces, facultades que superan a las de la ordenanza. La ordenanza no hace más que limitar las facultades del Concejo Departamental. Dice el Decreto número 5974, artículo 2.º, "Facúltase a la Intendencia Municipal a conceder permisos con carácter precario y revocable en cualquier momento para el transporte colectivo de pasajeros".

Es decir que el Concejo hubiera podido tomar algunas de esas muchas propuestas que tiene, donde se ofrecen centenares de ómnibus. El Concejo Departamental, hasta la sanción de la ordenanza, tenía facultades para dar cualquier número de permisos. El artículo 3.º dice: "Autorízase a los actuales propietarios de autobuses comprendidos en la concesión otorgada a la CUTCSA por Decreto número 1750 y concordantes y, que fuera declarada caducada por Decreto N.º 5973, a continuar prestando los servicios de transportes colectivos de pasajeros con carácter precario y revocable, en cualquier momento".

Esta es la situación de CUTCSA. Ellos dicen que este decreto que declaró caducada esa concesión está siendo discutido en los tribunales. Es exacto, que se ha iniciado una acción; pero mientras esa acción no llegue a una sentencia contraria, el hecho real es que ésta es la situación de CUTCSA, permiso precario y revocable.

SEÑOR CHIARINO. — ¿En qué estado está ese pleito?

SEÑOR GANÓN. — Están diligenciándose las últimas actuaciones de prueba. Hay dos pleitos en primera instancia, porque se opusieron excepciones dilatorias y relativas al agotamiento de la vía administrativa, y porque estaba el famoso problema de los actos complejos de los gobiernos departamentales, sobre si eran o no recurribles. Entonces, para obviar ese inconveniente, apenas promulgado el decreto, recurrieron ante la Justicia y consumada la vía administrativa, volvieron a recurrir otra vez. De manera que hay dos pleitos sobre el mismo problema.

SEÑOR FUSCO. — ¿Esas apelaciones tienen efecto suspensivo?

SEÑOR DUPETIT. — No, señor. Esos pleitos sólo tienen por objeto la reparación de daños causados, en el supuesto de que la caducidad hubiera sido decretada ilegalmente. No es el restablecimiento de la concesión, que ya quedó definitivamente liquidada. Por otra parte, el término de la concesión venció el año pasado. De manera que por caducidad y vencimiento del límite, la situación de CUTCSA ha quedado definitivamente consumada.

SEÑOR AQUISTAPACE. — El doctor Dupetit ya adelantó el segundo aspecto que yo iba a citar, porque, además, existe la limitación legal de plazo pues fué en el cincuenta y cuatro que terminó esa concesión. Por ninguna de esas vías CUTCSA puede hacer el servicio en las condiciones originales. Podría reclamar daños o perjuicios, pero no a circular en las condiciones originales. Decía que esa es la verdadera situación y que los dictámenes que han hecho los asesores olvidan ese aspecto fundamental. Porque no se trata de fijarle condiciones a una empresa, que, ante todo, tiene todos los derechos, limitándole esos derechos y creándole nuevas obligaciones. Se trata de cumplir con la organización de un nuevo servicio que tenga cierta estabilidad para ajustarse a las exigencias del tránsito. Esa es la ordenanza. Ahora, ¿qué imposiciones se hacen en ella? Al Concejo se hacen imposiciones. Por el artículo que leí antes del Decreto 5974, el gobierno departamental le había dado al Concejo la facultad para conceder permisos precarios y revocables, sin ninguna limitación. En la ordenanza, a propuesta del Concejo, se establecen limitaciones, por ejemplo, que los servicios tienen que ser concedidos dentro de un plan general del transporte, distribuidos los vehículos donde conviene económicamente que vayan. Los trolley-buses en determinados sitios, los ómnibus en otros y los micros en otros, según las exigencias económicas, y no darle los permisos a cualquiera. Nosotros establecimos esa primera limitación que es muy importante. No podemos ahora conceder a cualquiera los servicios, sino que previamente debe hacerse un plan coordinado, sujeto a una serie de normas que nosotros propusimos a la Junta y recién después de hecho se pueden hacer las concesiones de permisos. Si nosotros tenemos necesidad de ordenar todos los servicios, si tenemos 300 vehículos nuevos, que se incorporan al transporte, si AMDET tiene el reclamo de todos los barrios, el pedido angustioso de los barrios para que se les instale nuevos servicios, nosotros también sentimos la obligación de imponer en la ordenanza la necesidad de cumplir con esas reclamaciones.

Pero la obligación de cumplir con esos reclamos significaba la posibilidad de que muchos de los servicios nuevos fueran prestados a pérdida, sin resultados económicos inmediatos. Entonces, teníamos necesidad de poner en la ordenanza la garantía del rendimiento mínimo, no con el ánimo de limitar la ganancia, sino de tener la libertad necesaria para imponer servicios en función de la utilidad de la población, y no en función del rendimiento económico, como es el régimen actual.

Para eso, teníamos fundamentos. Voy a leer lo que hubiera pasado o pasaba por el régimen de explotación de las líneas con sentido económico que dice CUTCSA. CUTCSA llama sentido económico a esto. Un grupo de vecinos solicitan una nueva línea, una extensión, una modificación, un mejor horario. En este caso, dice CUTCSA: "Paralelamente a la proyectada prolongación de ruta y en parte por la misma ruta, existen servicios que dan cumplimiento a las necesidades públicas". La empresa juzga la necesidad pública de un servicio, la analiza según su cristal y entonces opina rechazando el pedido.

Continúa CUTCSA: "Porque creemos que de realizarse los servicios entre puntos extremos, cumpliendo la prolongación proyectada, debe realizarse teniendo en cuenta la mejor necesidad pública y evitando competencias innecesarias e inconvenientes".

Incluso el recorrido lo quiere fijar CUTCSA, de acuerdo con el sentido que ella da a las necesidades públicas.

Nosotros creemos que ni CUTCSA ni AMDET están en condiciones de juzgar la necesidad y conveniencia públicas de un servicio. A pesar de reconocer que en Ente Público, que es AMDET, tiene un sentido distinto para mirar las cosas, un Directorio que está cuidando el resultado económico, también va a verlas de modo distinto que el Gobierno Departamental, que no tiene esa limitación económica inmediata.

Nosotros, las ataduras de una coordinación para hacer los trazados con sentido de utilidad pública, las imponemos a CUTCSA y AMDET iguales, y constituimos la Comisión de Coordinación con un Delegado de CUTCSA, un Delegado de AMDET, un Delegado del Gobierno Departamental,

y dos asesores, uno de la facultad de Ingeniería y otro de la de Arquitectura.

Eso dice la Ordenanza, porque queremos que la coordinación se haga con un sentido técnico, con la opinión del concesionario público, y con la opinión del concesionario privado.

En otro caso, en que se trata de prolongar una línea que lleva a otros barrios vecinos de Villa García, CUTCSA dice: "Es una zona que dispone de medios de transporte a cargo de otra compañía, con bastante frecuencia, y el interés de los vecinos no puede ser otro que el de obtener un precio más reducido del pasaje". Es cierto el interés de los vecinos es el de obtener un mejor servicio a precios más reducidos.

En otro caso, CUTCSA dice: "La necesidad pública que se señala, no tiene entidad".

En otro: "En consecuencia, la iniciativa planteada por la H. Comisión de Fomento del Banco, no obedece a una gestión de pública necesidad".

Por otro lado, decía, ya en la última visión distinta, a través de las discusiones con el Concejo: "En consecuencia, creemos que las extensiones o modificaciones de los recorridos, movidas por intereses particulares y sin que previamente se haya trazado el plan y que se ajustara el servicio público, sólo servirían para entorpecer o dificultar las soluciones de carácter general". Aquí CUTCSA reconoce, en mayo 23, la necesidad de hacer técnicamente la coordinación de los servicios.

Dice CUTCSA: "Entendemos que los pedidos de modificaciones o prolongaciones de recorridos, deben ser tenidos en cuenta para su estudio en el momento de realizarse el nuevo plan de transporte colectivo para la ciudad de Montevideo". Estamos de acuerdo. Hemos llegado, al final a un acuerdo con CUTCSA, en el sentido de que el servicio hay que coordinarlo. Por lo menos, teóricamente, porque cuando llega el momento de llegar prácticamente a un acuerdo, entra a jugar el aspecto económico, que es importante, y que traba el entendimiento.

Por eso nosotros quisimos que en la ordenanza se fijaran las bases del entendimiento. ¿Y qué bases tomamos? ¿Las bases que nosotros propusimos? No; las bases que CUTCSA propuso y nosotros aceptamos.

Los \$ 500.00 de recaudación mínima y la posibilidad de una ganancia mayor, es la apropiación de ganancias, que dice CUTCSA. La apropiación de ganancias significa que nosotros le fijamos el derecho de ganancia mínima en \$ 500.00. Hay que decir bien cuál es esa ganancia. Primero, se pagan y garantizan todos los gastos. Se paga el salario del chófer y del guarda, aunque sea el mismo patrón. Se le garantiza el laudo al patrón, cuando trabaja de guarda, conductor, tapicero, pintor, o cualquier otro trabajo aportado al ómnibus".

Se paga la amortización del coche, no al valor de compra, sino al valor de reposición. Se calcula la cantidad que mensualmente debe tener libre el patrón, disponible para que, al cabo de diez años —nosotros sabemos que los coches duran más de diez años, pero hacemos el cálculo a diez años, para ventaja del patrón— tenga el patrón esa suma, necesaria para comprar un coche nuevo. Eso le garantiza que no pierde su capital.

Por encima de todos los gastos, de los valores por concepto de intereses del capital original, que en realidad es muy remoto, y no se puede conocer exactamente, a través de las distintas transferencias de líneas, por intereses y por concepto de la vigilancia que el patrón efectúa en el vehículo, —que es el factor que nosotros no queremos, como dice el doctor Ganón, solamente premiar o compensar sino que queremos darle incentivo—, le damos pesos 500.00 básicos libres. \$ 500.00 básicos libres que, en el caso de las líneas en manos de la Cooperativa, o de la compañía general, que no es cooperativa, nosotros redujimos, y lo dejamos en el 8 o/o, porque nosotros queremos premiar de manera especial al patrón que atiende al coche, y no nos interesa que la administración sea hecha por CUTCSA colectivamente, porque correríamos el riesgo de que CUTCSA tuviera cada vez más en su esfera común los vehículos y tuviéramos, al final, una CUTCSA igual a AMDET.

A ese régimen iba dirigida.

Entonces, no tendríamos ningún interés. Nos interesa la vigilancia directa del patrón, todos los días, en el coche, y para eso damos esa ganancia mínima de \$ 500.00.

Por encima de esos \$ 500.00, el dinero excedente, no queda en poder del Gobierno Departamental, sino que se pone en un fondo, y ese fondo se redistribuye entre los patrones. ¿Por qué es necesaria esta redistribución? Primero, porque hay líneas de distintas recaudaciones y distintos rendimientos. Además, porque la diferencia que hay entre CUTCSA y AMDET la tienen entre sí las propias líneas de CUTCSA.

De manera que, si nosotros no admitimos que una li-

nea que va a ir a determinado barrio a perder sea de AMDET, y admitimos que los demás vehículos le puedan dar una ayuda económica a AMDET, tampoco tendríamos que dejar de admitir un equilibrio de recaudaciones entre los integrantes de la propia CUTCSA.

Ese equilibrio de las recaudaciones, dice CUTCSA que mata el incentivo comercial; lo que no es exacto. El incentivo comercial no está en la distribución de las ganancias que nosotros hacemos, y la hacemos en función de los servicios que prestan los coches, con lo que hay diferencia fundamental con el régimen actual, sino que el incentivo económico está en la primera distribución y fijación de los costos. El costo para cada vehículo tiene sentido promedial. Tomando los resultados de todos los coches, y los resultados de los coches de AMDET, inclusive, y fijando la cifra promedio, la cifra estadística general, entonces se dice que cada coche tiene derecho, por kilómetro recorrido, a una compensación de tantos centésimos. Si el propietario recorre más, por concepto de es mayor número de kilómetros, obtiene una mayor recaudación.

Pero si el propietario cuida mejor su coche en lugar de gastar los \$ 0.70 o \$ 0.80 previstos por kilómetro, gasta menos, eso menos que gasta en razón de su vigilancia del vehículo, es para él.

El aliciente para conservar mejor los coches, no se pierde, sino que se aumenta, porque ahora nosotros vamos a fijar, según la estadística el número colectivo, y todo lo que sea, en gastos, por menos del número colectivo, esa es ganancia a sumar para el patrón.

SEÑOR FUSCO. — ¿Es esa la única vía por la cual el propietario puede recibir un "sur plus" sobre los \$ 500, o hay otras?

SEÑOR ACQUISTAPACE. — Está la otra vía, la redistribución.

Actualmente ganaban más las líneas que ponían en el mismo coche, un mayor número de pasajeros, porque el régimen era que la recaudación en la línea se hacía a promedio y se distribuía a todos los patrones.

Había una especie de equilibrio en la línea. La línea que fuera por 15 de Julio, podía poner 80 pasajeros donde cabían 60 y, por consiguiente, daba un mayor rendimiento que las líneas que no podían poner tantos pasajeros en un mismo coche. Las ganancias por líneas eran en perjuicio de la comodidad de los pasajeros.

Esto lo decía el propio señor Afión, de que "no hay servicio nocturno, por razones de elemental economía". "Si el promedio de pasajeros hora que actualmente viajaba descendiera proporcionalmente, el público viajaría con más comodidad, pero la empresa tendría una retribución insuficiente que no cubriría los costos".

Cuanto más incómodo viaja el pasajero, más gana la empresa.

Nosotros creemos que la ganancia de la empresa no debe ser en función de la incomodidad, sino en función de la comodidad.

Proponemos hacer en lo que excede de \$ 500, un fondo común y distribuirlo en la mejor prestación del servicio, dándosele a las líneas que tienen problemas de conservación, o dándoselos a los patrones que han tenido los coches en mayor número de horas; o dándoselos, por otra vía, en un 40 %, a los conductores o guardas que han hecho un mejor promedio en la atención del público.

Nosotros le damos acceso a las mismas ganancias, porque la suma es igual; pero en función de la comodidad y no de la incomodidad. Damos vuelta el sentido de la retribución de las ganancias, y damos acceso a los obreros con carácter obligatorio, porque ahora los obreros tienen acceso a las ganancias, pero por la vía voluntaria del patrón, quien si tuvo el coche más horas en la calle, le da el obrero \$ 40 o \$ 50 de aporte voluntario. lo que es denigrante.

A nosotros nos interesa este procedimiento para AMDET, porque AMDET en sus obreros no tiene el sentido de colaboración con un patrón también colaborador. Nosotros queremos que los obreros de AMDET se sientan en parte dueños del coche y que el mantenimiento del coche en la calle traiga un premio para el conductor y para el guarda. Por esa vía queremos cambiar el sentido de conservación de los coches, hecho por AMDET.

Nosotros hemos visto a través de la publicidad hecha por CUTCSA —aparte de este régimen de decir algo que no es exacto— esto que yo dije recién, a propósito de que hace desaparecer el incentivo. Conviene decirlo como lo dijo CUTCSA: "La Ordenanza destruye la organización cooperativa de los actuales servicios de autobuses a cargo de CUTCSA y de los propietarios que agrupa, quitando todo estímulo para producir y para ahorrar gastos y conservar el material".

En primer lugar, la organización de CUTCSA no es cooperativa, sino que es una compañía, sociedad anónima, donde hay adentro un montón de otras compañías, don-

de hay muchos propietarios de pocos vehículos y unos pocos propietarios de muchos vehículos.

Unos que ganan mucho y otros poco. Es un régimen de simples unidades, que sirve para disfrazarlo de empresa cooperativa, pero no hay un régimen cooperativo.

Hay líneas donde las recaudaciones se distribuyen entre los patrones de esa línea, pero en conjunto, el patrón de la línea A, por ejemplo, no excede al patrón de otra línea que pierde.

Lo haría ahora en función de la Ordenanza. Esta Ordenanza no destruye el régimen cooperativo, que no existe y, además, establece que los patrones podrán asociarse por el régimen cooperativo, siempre que sea en beneficio del servicio, y esto surge de la Ordenanza.

Dice el comunicado de CUTCSA: "Quitando todo estímulo para producir y ahorrar gastos". Si nosotros vamos a pagar el valor uniforme, por kilómetros recorrido, en incentivo para gastos existe y es realmente garantizado.

"... conservar el material, que ha sido la característica..." Tampoco es exacto, porque nosotros vamos a tener la conservación del material a través de ese régimen.

Una de las cosas que proponía CUTCSA era organizar una sociedad integrada por CUTCSA y AMDET, regida por el régimen de CUTCSA que tan buen resultado ha dado. Entonces se extendería el régimen de explotación con sentido económico.

No podemos ir al servicio único en manos de CUTCSA, como tampoco creemos que puede ser en manos de AMDET.

Estos, en una y otra oportunidad, dice que no puede subsistir de ninguna manera CUTCSA y AMDET simultáneamente.

En otro lado dicen: "Se nos ha olvidado, desconocido y agravado; incluso, los propietarios de ómnibus no están representados en la Comisión que estudia el problema de coordinación".

Inmediatamente de sancionada la Ordenanza, el Concejo Departamental pidió a CUTCSA que designara sus delegados, y CUTCSA es el único organismo que no los ha designado.

De momento la coordinación está prácticamente paralizada; o se está haciendo por los mecanismos de carácter oficial.

Estas informaciones que estoy dando no tienen sentido de complementar el aspecto jurídico, pero el aspecto va ubicando el panorama en que se tiene que desempeñar el Concejo Departamental.

Cuando nosotros remitimos a la Junta Departamental nuestro proyecto de Ordenanza, remitimos conjuntamente el proyecto de Ordenanza que hizo CUTCSA, desde crear la tasa de \$ 0.02 hasta crear un bloque de recaudaciones, más gravoso para CUTCSA que el actual, que le hubiera dado toda la inyección de recursos de CUTCSA a AMDET.

SEÑOR BACIGALUPPI. — Sería interesante conocerlo.

SEÑOR BAYLEY. — ¿Me permite, señor Presidente?

¿Está en la Comisión el proyecto de Ordenanza de CUTCSA?

SEÑOR FUSCO. — En su exposición en el Parlamento, fundamentando la apelación, CUTCSA agrega las dos variantes, los dos proyectos de Ordenanza que propuso.

SEÑOR ACQUISTAPACE. — Es lo que se llama proyecto de CUTCSA.

SEÑOR BAYLEY. — La Secretaría podría verificar si hay coincidencia entre algunos antecedentes que obran en poder de la Comisión y este texto que obra en poder del Concejo y si no la hubiera habría que facultar a la Comisión para pedir esta Ordenanza.

SEÑOR SISTO. — ¿Me permite, señor Presidente?

En el curso del estudio que se hizo del proyecto y a través de numerosas entrevistas que se realizaron entre el señor Presidente de CUTCSA y los Concejales; incluso con todo el Directorio de CUTCSA, éste, entregó dos proyectos distintos: una Ordenanza completa, sustitutiva de la que había estructurado el Concejo; por ella se creaban tasas y se establecía, además, la unión de los dos servicios, el de AMDET y el de CUTCSA, para unir las recaudaciones en una Caja común.

Las características de ese primer proyecto entregado por el señor Afión el 8 de junio al Concejo consistía en lo siguiente: se creaba una tasa de dos centésimos, pero se establecían como disposiciones complementarias que se entregaría a CUTCSA el 4 % de la recaudación de esa tasa por concepto de comisión de cobranza y se establecía, además que el total de los aumentos de jornales originados en CUTCSA serían pagados por esa tasa y el excedente sería entregado, en un 30 % a CUTCSA. Es decir que por ese proyecto, CUTCSA obtenía un aumento de beneficio por encima de los actuales, a costa de la implantación de la tasa: uno era el 4 % del total de lo recaudado por CUTCSA por concepto de cobranza y el otro el 30 % de los exce-

dentos, una vez cubiertos los gastos o diferencias de jornales que originaba ese laudo.

El otro punto era el que se refería a la unión de las recaudaciones. El inciso F) del artículo 29, decía: "La recaudación se distribuirá entre los coches en proporción a las horas de trabajo o kilómetros recorridos y a su capacidad de transporte, considerando todo el servicio como un solo bloque", es decir, CUTCSA y AMDET. Eso está más aplicado aún en la exposición que hizo el doctor Panizza en la Junta Departamental diciendo concretamente que se trataba de formar un block con todos los vehículos de CUTCSA y AMDET, unir todas las recaudaciones y distribuirías proporcionalmente a los kilómetros recorridos por cada uno de los vehículos.

Nosotros entendimos en el Concejo, como lo expresó el señor Presidente hace unos minutos, que esa solución no se ajustaba a la realidad, porque por esa vía se le iban a sacar beneficios que estaba obteniendo CUTCSA en el servicio que estaba realizando, para entregárselo a AMDET y entendimos que ahí se iba a un desplazamiento inconveniente de recaudación. Por eso se estructuró el sistema de la Ordenanza, que es más justo, porque está adecuado a la realidad del problema.

Posteriormente el Directorio de CUTCSA fué recibido por el Concejo y en esa oportunidad entregaron las bases de lo que constituía la coordinación física del servicio y económica de los resultados de producción y en esa oportunidad, también, se reitera en una de las bases —la unión de CUTCSA y AMDET en un solo servicio— y la recaudación en una sola Caja, así como la distribución de recaudaciones de todos los coches como un solo bloque.

Pero hay otro elemento importante: en una de las oportunidades se agregaba, como otro elemento coadyuvante el mejoramiento, que CUTCSA se comprometía a incorporar 250 ómnibus nuevos en sustitución de los viejos, cosa que no le estaba prohibida ni antes, ni ahora. Pero últimamente, en un boletín de informaciones que está repartiendo, va ha cambiado el concepto, porque dice que esa incorporación de los 250 ómnibus nuevos, tiene este propósito: se sustituyen los viejos por los nuevos y los viejos se llevarían a otras líneas; en el fondo ese propósito tenía por finalidad, la adquisición de 250 nuevos permisos, cosa que no fué aclarada en el primer momento ante el Concejo.

Evidentemente, esta confusión en los planteamientos que fué llevado el Concejo, es como expresó el señor Presidente: cuando creímos nosotros haber interpretado las aspiraciones de CUTCSA y haber llevado a incorporar a la Ordenanza los deseos de CUTCSA resultaba que las aspiraciones eran otras y su oposición a la Ordenanza era total. Era lo que quería expresar.

SEÑOR BAYLEY. — Tratando de reunir el mayor número de antecedentes, insisto, que la Presidencia autorice a la Secretaría a recabar del Concejo Departamental todos estos antecedentes que se han mencionado: el proyecto entregado el 8 de junio y el segundo proyecto de Ordenanza a que se ha referido en último término el ingeniero Sisto, así como la exposición del doctor Panizza en el seno de la Junta, y además, si no se encuentran en su poder, que se pidan a la Secretaría de la Junta, el número de colecciones suficientes del Boletín de la Junta que contiene la versión taquigráfica de la discusión sobre este asunto.

Me parece pues, que la Junta o el Concejo podrían alcanzarnos ese material en número suficiente.

SEÑOR ACQUISTAPACE. — Con mucho gusto, vamos a proporcionar esos antecedentes.

SEÑOR BAYLEY. — No voy a sacar consecuencias, por ahora, al menor, de la iniciativa de este decreto objeto del recurso de apelación. Pero pienso que de acuerdo con la Constitución, si se establece una nueva tasa, es forzoso el concurso de los dos Organos del Gobierno Departamental: del Ejecutivo y del Legislativo o de contralor.

Sin embargo, a través de las exposiciones formuladas en esta Sala, —aunque no escuché la del doctor Ganón porque llegué tarde— me pareció que se ha hecho referencia, no menos de dos veces, al primitivo proyecto o a la iniciativa del Concejo Departamental.

Yo querría saber, primero, si existe una iniciativa concreta que pone en movimiento la actividad de la Junta Departamental para culminar esa actividad en el decreto objeto del recurso.

Segundo, siempre con el deseo de compulsar mayor número de antecedentes, antes de fijar posición, si esa iniciativa del Concejo o esa contribución del Concejo Departamental en la formación de la Ordenanza o decreto final, está incorporada a los antecedentes que obran en poder de la Comisión. En caso de que no hubieran sido objeto de remisión desearía que lo hicieran llegar, tanto el proyecto originario del Concejo Departamental como cualquier otra modificación que se hubiera votado durante el proceso de gestación de la Ordenanza.

SEÑOR ACQUISTAPACE. — Tenemos todo el material disponible.

Quiero hacer conocer que esta Ordenanza fué estructurada en el Concejo Departamental con participación unánime de sus integrantes en todo su proceso de elaboración, luego fué sometida a la Junta Departamental; en la Junta le hicieron observaciones, y después se aprobó en el Concejo el texto modificado por la Junta.

Quiere decir que ha rabido un proceso largo, cuidadoso, y de todo eso hay material abundante en la Junta y en el Concejo que ponemos a disposición de la Comisión de la Asamblea General.

SEÑOR GANON. — Quería agregar a las manifestaciones del señor Presidente, que es entendido por los señores Concejales y por nosotros que tenemos el honor de asesorarlos, que el Decreto 9.843 es una auténtica ley departamental que se trata de un cuerpo de ley, de un texto legal que tuvo su proceso por iniciativa del Concejo, con discusión de la Junta Departamental. Quiere decir que, en este sentido, hemos defendido ese texto legal y procurado que llegue a su aplicación efectiva.

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no hubiera observaciones, se da por terminado el acto.

(Así se hace).

#### DECRETO Nº 5.973 DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL QUE DECLARA CADUCADA LA CONCESION DE CUTCSA

Junta Departamental. Decreto Nº 5.973.

La Junta Departamental de Montevideo.

DECRETA:

Artículo 1º Declárase caducada, por incumplimiento voluntario de las obligaciones a cargo de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima (CUTCSA) la concesión que le fuera otorgada por Decreto Nº 1.750 de la Junta Departamental y solemnizada por escritura pública autorizada el 14 de marzo de 1938, para efectuar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en el Departamento de Montevideo, con vehículos a tracción automotriz.

Art. 2º Deróganse los Decretos de la Junta Departamental N.ºs 5464, 5536 y 5560, referentes a empadronamiento por CUTCSA de nuevas unidades y el número 5910 sobre empadronamiento, con carácter precario y revocable de trece autobuses.

Art. 3º La declaración referida en el artículo 1.º de caducidad es sin perjuicio de los derechos y acciones que hará valer el Ejecutivo Comunal y en la vía y forma que corresponda, a objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de la inconducta observada por la concesionaria y hacer efectivas las sanciones pertinentes.

Art. 4º Comuníquese.

Sala de Sesiones de la Junta Departamental, a 28 de abril de 1948.

(Fdo.) Ignacio Bazzano, Presidente. — A. Lamboglia de las Carreras, Secretario General.

Intendencia Municipal de Montevideo.

Montevideo, abril 29 de 1948.

Visto: el Decreto Nº 5973 de la Junta Departamental sobre: A) Caducidad de la concesión otorgada a la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima (CUTCSA), por decreto Nº 1750; B) Derogación de los Decretos Nros. 5464, 5536, 5560 y 5910 y, C) Derechos y acciones para resarcimiento de daños y perjuicios.

El Intendente Municipal de Montevideo

RESUELVE:

Promúlgase; hágase haber esta determinación a la Junta Departamental, publíquese, comuníquese a sus efectos a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Tránsito Público, notifíquese a la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima e incorpórese al Registro correspondiente.

Germán Barbato. — M. A. Clavelli.

Decreto Nº 5974 de la Junta Departamental, que autoriza al Municipio, a conceder permisos de carácter precario y revocable, en cualquier momento, para el transporte colectivo de pasajeros y a CUTCSA a continuar dicho servicio con carácter precario y revocable en cualquier momento.

Junta Departamental de Montevideo. Decreto Nº 5974.

La Junta Departamental de Montevideo,

DECRETA:

Artículo 1º Autorízase a la Intendencia Municipal para adquirir, directamente o por intermedio de la Administración Municipal de Transporte de Montevideo, sin llenar el requisito de la licitación, doscientos ómnibus destinados al servicio de transporte colectivo de pasajeros.

Art. 2º Facúltase a la Intendencia Municipal a conceder permisos con carácter precario y revocable en cualquier momento para el transporte colectivo de pasajeros.

Art. 3º Autorízase a los actuales propietarios de autobuses comprendidos en la concesión otorgada a la CUTCSA por Decreto Nº 1750 y concordantes y, que fuera declarada caducada por Decreto N.º 5973, a continuar prestando los servicios de transportes colectivos de pasajeros con carácter precario y revocable, en cualquier momento.

Art. 4º Comuníquese.

Sala de Sesiones de la Junta Departamental a 28 de abril de 1948.

(Fdo.) Ignacio Bazzano, Presidente. — A. Lamboglia De Las Carreras, Secretario General.

Intendencia Municipal de Montevideo.

Montevideo, abril 30 de 1948.

El Intendente Municipal de Montevideo,

RESUELVE:

1º Promúlgase lo dispuesto por el artículo 3.º.

2º Cométese a la Administración Municipal de Transportes de Montevideo, el diligenciamiento referente a la adquisición de doscientos (200) ómnibus.

3º Transcribese a la Dirección de Tránsito Público a los efectos prevenidos por los artículos 2.º y 3.º del Decreto.

4º Acúsesse recibo; publíquese, comuníquese a la Administración Municipal de Transporte de Montevideo e incorpórese al Registro correspondiente.

(Fdo.) Germán Barbato, Intendente Municipal. — Miguel A. Clavelli, Secretario.

RESOLUCION DEL 8 DE JUNIO DE 1955 DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL, FIJANDO LA SUMA QUE LE CORRESPONDE PAGAR A CUTCSA DE LOS AUMENTOS DECRETADOS POR EL LAUDO DEL 4 DE MARZO DE 1955 Y DE LAS TRAMITACIONES CUMPLIDAS EN LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR CUTCSA CONTRA DICHA RESOLUCION

Concejo Departamental de Montevideo.

Visto: 1º La resolución del Consejo Nacional de Gobierno del 20 de abril de 1955, por la que se confirmaron los jornales establecidos en el laudo de fecha 4 de marzo ppdo. emitido por el Consejo de Salarios para el personal común de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A., resolución que dejó sin efecto la condición establecida en el inciso D) del numeral 1º de dicho laudo, disponiendo en su lugar que "los aumentos y la retroactividad decretados serán exigibles a partir de la fecha de la resolución del Gobierno Departamental de Montevideo declarada"; 2º CUTCSA puede absorberlos o disponiendo los medios o recursos total o parcialmente necesarios a juicio para que la empresa pueda absorberlos".

2.º Los antecedentes sobre su situación económica proporcionados por la empresa al Consejo de Salarios en los cuales se fija en \$ 3.386.328.22 la suma que podría disponer para pago de amortizaciones, intereses y beneficios patronales.

3.º Los informes de la Comisión Especial, designada por el Concejo Departamental con fecha 4 de marzo de 1955,

en los que se establece que los datos suministrados por la empresa deben ser verificados mediante adecuados y permanentes contralores.

Considerando: 1.º Que del material y datos suministrados por la empresa resulta que existe una información fundada en la contabilidad que consta en los libros rubricados referentes a los 136 autobuses de propiedad colectiva de CUTCSA, en tanto que con respecto a los vehículos de propiedad individual sólo se poseen cálculos estimativos, cuyo valor ha sido analizado detenidamente por la Comisión Especial, surgiendo de ese análisis observaciones fundamentales para alguno de los rubros;

2.º Que de esos mismos antecedentes se desprenden que no se practica distribución uniforme de gastos y beneficios entre propietarios de coches afectados a las distintas líneas y que alguna de las mismas obtienen recaudaciones que cubren con apreciable exceso sus gastos.

3.º Que de los informes de la Comisión Especial resulta que CUTCSA está en condiciones de abonar parcialmente el laudo, debiendo arbitrarse los recursos necesarios para completar su pago mediante una solución que garantice a los usuarios el mínimo de costos compatible con la continuidad de los servicios.

4.º Que en consecuencia, en este acto se determinará la suma que la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A. pueda absorber anualmente sin perjuicio de los reintegros o pagos complementarios que correspondan, una vez practicados la liquidación y ajuste definitivo, de acuerdo con el sistema de contralor que se establezca en el proyecto que con esta fecha se remite a consideración de la Junta Departamental.

5.º Que la ausencia de informaciones basadas en una contabilidad llevada de acuerdo a las normas legales, hecho motivado por la omisión de CUTCSA que sólo puede ofrecer cifras basadas en un cálculo estimativo con respecto a los coches que no son propiedad de la empresa, hace aconsejable el procedimiento citado precedentemente, dado que del contralor ejercido por el Municipio de Montevideo, sobre una contabilidad en forma, surgirán indudablemente los resultados financieros de la explotación y se obtendrán las sumas definitivas que la empresa podrá absorber durante el transcurso del presente año y en el futuro.

6.º Que la vigencia del laudo tendrá efecto retroactivo desde el 1.º de enero de 1955, retroactividad que al 30 de abril próximo pasado se ha estimado por la empresa como superior a \$ 1.200.000.00 y cuyo pago se hace exigible a partir de la resolución de este Gobierno Departamental;

El Concejo Departamental de Montevideo

#### RESUELVE:

1.º Que en las actuales circunstancias y de acuerdo con los datos suministrados por la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A., esa empresa y los permisionarios particulares cuyos coches son administrados por la misma, pueden absorber los aumentos decretados por el laudo de fecha 4 de marzo de 1955 hasta la cantidad de \$ 1.500.000.00 anuales.

2.º Establecer con relación a las sumas necesarias para complementar los pagos a efectuarse por la aplicación del mencionado laudo, este Departamento Ejecutivo propondrá a la Junta Departamental la creación de los recursos necesarios.

JOSE ACQUISTAPACE, Presidente. — Arturo Maciá, Secretario.

Nota de fecha junio 8 de 1955.

Montevideo, junio 8 de 1955.

Señor Presidente del Concejo Departamental de Montevideo, Ingeniero José Acquistapace.

José Afón y Eladio Suárez, en representación de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A. (CUTCSA) en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Directorio de la citada Institución, ante el señor Presidente se presentan y exponen:

1) Que se nos han notificado la resolución del Concejo Departamental por la cual se establece que la sociedad que representamos, puede absorber los aumentos decretados por Laudos del Consejo de Salarios, hasta la cantidad de un millón quinientos mil pesos, y que las sumas necesarias para complementar los pagos a efectuarse por aplicación del laudo antes indicado, serán integradas por el Gobierno Departamental.

II) Que en tiempo y forma, venimos a interponer contra la resolución a que acabamos de referirnos, los recur-

sos legalmente procedentes, a fin de que se la revoque o reforme. En el Laudo del Consejo de Salarios se establece que con sus actuales recursos, la Empresa no puede absorber los aumentos decretados y estimamos que, desde el punto de vista legal, esas conclusiones permanecen incambiadas.

No tenemos la menor duda de que los estudios que se practiquen en oportunidad de acuerdo con las normas dispuestas o que dispusiere el Concejo Departamental, han de confirmar plenamente las conclusiones a que ha arribado el Consejo de Salarios.

Los elementos de información que posee CUTCSA extraídos de sus libros con referencia a la explotación de 136 autobuses de su propiedad, en todos los rubros que la misma comprende, y también los elementos de información extraídos de la misma contabilidad con referencia a los rubros más importantes: personal, gas-oil, cubiertas, gastos de administración, etc., con respecto a la totalidad de los autobuses adscriptos a la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A. permiten llegar a conclusiones precisas en cuanto a la imposibilidad del servicio tomado en su conjunto, de absorber las cargas impuestas por los Laudos de los Consejos de Salarios y también la contribución parcial en el límite establecido en la resolución del Concejo Departamental de que nos agraviamos.

A esos elementos de información sin duda valiosos, deben agregarse los que el Concejo Departamental pueda extraer de los resultados de la explotación de los autobuses de propiedad de la Administración Municipal de Transportes.

Tenemos la seguridad que ellos han de constituir elementos corroborantes de las afirmaciones precedentes.

III) La cifra fijada por el Concejo Departamental como contribución de CUTCSA para solventar los laudos del Consejo de Salarios es, a todas luces, excesiva y sólo podría hacerse sacrificando la ganancia a que legítimamente tienen derecho, tanto la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A., como los propietarios de ómnibus que la integran.

Como es sabido, las entradas del servicio, constituyen para éstos la única fuente de recursos para atender los gastos de explotación, los riesgos del servicio, fondo de renovación del material rodante, y para obtener los medios para hacer frente a su existencia y la de sus familias.

Se verá oportunamente que el margen que queda una vez cubiertos los gastos y las cargas financieras, sólo constituyen una ganancia moderada y razonable, que ha de reconocerse como legítima y compensatoria de los esfuerzos que realizan CUTCSA y los propietarios de ómnibus y los capitales invertidos en el servicio.

No obstante las afirmaciones que preceden, y en el deseo de colaborar con la autoridad municipal, en la solución de los importantes problemas que aparejan los laudos dictados por el Consejo de Salarios con fecha 4 de marzo y 20 de mayo de 1955, la Sociedad que representamos está dispuesta a contribuir, con carácter de excepción, por el corriente año 1955, con la suma de seiscientos mil pesos.

Esta contribución la hace con sacrificio y a expensas, como dijimos, de ganancias que consideramos legítimas y razonables, para la Sociedad que representamos y para los propietarios de ómnibus que la integran.

Solicitamos, en consecuencia del Concejo, quiera aceptar la contribución ofrecida, suspendiendo la fijada en la resolución que recurrimos, sin perjuicio de que el Concejo haga las verificaciones contables que ha dispuesto y adopte en su oportunidad, las resoluciones que conforme a ella pudieran corresponder.

Por lo expuesto, solicitamos:

Se tenga por interpuesto el recurso a que nos hemos referido, se revoque o reforme la resolución que se nos ha notificado, fijándose como contribución de CUTCSA por el corriente año y en los términos que hemos indicado la cantidad de seiscientos mil pesos.

Quiera el Concejo Departamental acceder a lo pedido.

(Fdo.) José Afón, Presidente. — Eladio Suárez, Secretario.

Resolución de fecha junio 17 de 1955

Montevideo, 17 de junio de 1955.

Visto: El precedente escrito de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A. (CUTCSA), interponiendo "los recursos legalmente procedentes", a fin de que se "revoque o reforme" la resolución N.º 2642 de fecha 8 de junio de 1955, por la cual se declara, con referencia a la decisión del Consejo Nacional de Gobierno del 20 de abril

de 1955, que en las actuales circunstancias y de acuerdo con los datos suministrados por la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S. A., esa empresa y los permisionarios particulares cuyos coches son administrados por la misma, pueden absorber los aumentos decretados por el laudo de fecha 1.º de marzo de 1955 hasta la cantidad de un millón quinientos mil pesos (\$ 1.500.000.00) anuales.

Resultando: Que en su escrito, la CUTCSA, expresa:

1º) Que no puede absorber los aumentos decretados.

2º) Que los elementos de información que posee la CUTCSA confirmarían esa apreciación.

3º) Que la cifra fijada por el Concejo Departamental como contribución de CUTCSA para solventar los laudos del Consejo de Salarios sólo podría hacerse efectiva sacrificando la ganancia a que tendrían derecho tanto dicha empresa como los propietarios de ómnibus que la integran.

4º) Que no obstante las afirmaciones que preceden, la CUTCSA está dispuesta a contribuir, con carácter de excepción, por el corriente año de 1955, con la suma de seiscientos mil pesos \$ 600.000.00, por lo que, en consecuencia, solicita que se la acepte suspendiendo la fijada en la resolución recurrida, sin perjuicio de que el Concejo haga las verificaciones contables que ha dispuesto y adopte en su oportunidad, las resoluciones que conforme a ella pudieran corresponder.

Considerando: 1º) Que por su naturaleza y contenido, la resolución objetada no es susceptible de revocación ni de reforma por parte de este Departamento Ejecutivo. Como explica en la parte expositiva de la misma, y surge de los antecedentes habidos en consideración, el Concejo ha debido cooperar con el Poder Ejecutivo expresando, de acuerdo con los términos del Decreto del 20 de abril de 1955, la parte que la CUTCSA puede absorber de los aumentos y retroactividad establecidos en el laudo del Consejo de Salarios a que en el mismo se hace referencia, y proyectando los recursos necesarios para atender el saldo de dichos aumentos y retroactividad. Tal declaración a falta de otros datos y elementos de juicio disponibles al momento, debió efectuarla fundándose en los antecedentes sobre la situación económica de la empresa, proporcionados por ésta al Consejo de Salarios, y los informes de la Comisión Especial designada por el Concejo Departamental; de todo lo cual se hace también explícita referencia en la resolución del 8 de junio de 1955.

2º) Que, en consecuencia, no está en las facultades del Concejo Departamental modificar la estimación a que arribará sobre la base de los antecedentes e informes ya referenciados; ni tampoco anular o limitar directa o indirectamente la trascendencia del decreto del Poder Ejecutivo, que solicitara aquélla en su declaración.

Todo lo más, manteniendo los fundamentos de la resolución N.º 2642 puede reiterar que la cantidad con que la CUTCSA deberá contribuir para solventar las cargas creadas por el laudo de referencia será fijada en definitiva, una vez que se realice el contralor contable y se efectúen la liquidación y los ajustes definitivos que ha proyectado.

3º) Que en tales condiciones, no hay inconveniente en admitir la cantidad que ofrece la CUTCSA con el expresado destino, lo que así se dispondrá en esta misma resolución.

El Concejo Departamental de Montevideo

#### RESUELVE:

1º) Confírmase la resolución del 8 de junio de 1955, reiterando los conceptos contenidos en la misma en el sentido que los resultados de los contralores a establecer por el Gobierno Departamental permitirán ajustar la cifra que en definitiva habrá de pagar la CUTCSA en cumplimiento del laudo de fecha 4 de marzo de 1955.

2º) Acéptase el pago de seiscientos mil pesos (pesos 600.000.00) que ofrece realizar CUTCSA por el corriente año, en el entendido que cumplido el ciclo económico que permita al Concejo Departamental efectuar directamente las verificaciones dispuestas, se habrán de realizar los reintegros o pagos de complementos que correspondan.

3º) Previa reposición de los sellados y timbres correspondientes, notifíquese y pase al Departamental de Hacienda.

(Fdo.): Ingeniero JOSE ACQUISTAPACE, Presidente. — Doctor Arturo Macció, Secretario.

(A esta resolución contestó CUTCSA dejando sin efecto su oferta de pagar los \$ 600.000.00, luego de suspender el pago del aumento a sus obreros).

#### PARTE FINAL DE LA NOTA DE CUTCSA DE FECHA JULIO 1.º DE 1955

"La oferta de dicha contribución fué dejada sin efecto el día 10 de junio pasado, según lo hizo saber la empresa por intermedio del firmante, Presidente de su Directorio, al señor Presidente del Concejo Departamental, una vez enterado de los proyectos de la resolución con la que se pretendía sustituir la de 8 de junio, cuyos proyectos, a nuestro entender, no eran aceptables.

5. Como es de conocimiento del Concejo, nuestra representación, en los primeros días del mes de junio y en el entendido del acuerdo que se vislumbraba sobre el particular en mérito a las gestiones cumplidas por sus representantes, comenzó a satisfacer las diferencias de los jornales obreros.

Esos pagos fueron suspendidos el 10 de junio, en la misma oportunidad y por iguales razones que las que se consignan en el numeral anterior, y se reiniciaron a solicitud del Concejo, formulada por su Presidente, por cuenta del Municipio, y con cargo de reintegro de las cantidades adelantadas por tales conceptos, que se haría efectivo contra la presentación de las planillas de pagos correspondientes.

Estas últimas han sido ya presentadas, por lo que el Municipio se encuentra habilitado para la devolución de tales cantidades.

Siendo necesarias esas sumas para satisfacer el próximo pago de salarios de nuestro personal, se solicitará en este escrito la adopción de las medidas del caso para proceder a su reintegro.

En virtud de lo expuesto al señor Presidente pedimos:

Primero: Se tenga por interpuesto, en tiempo y forma, el recurso de apelación contra la resolución de fecha 17 de junio pasado.

Segundo: Se ordene la devolución de las cantidades que se le adeudan a la Empresa por los conceptos establecidos en el numeral 5.

Saludamos al señor Presidente muy atentamente.

(Fdo.): José Añón, Presidente. — Eladio Suárez, Secretario.

#### Resolución de fecha julio 4 de 1955

Montevideo, julio 4 de 1955.

Visto el escrito presentado por los señores José Añón y Eladio Suárez, en representación de la "Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima" (CUTCSA), interponiendo recurso de apelación contra la resolución del Concejo N.º 2.926 de 17 de junio último; y gestionando se ordene la devolución de las cantidades que abonó dicha empresa en virtud de lo acordado por esta Corporación con fecha 10 de junio próximo pasado, sobre pago de los aumentos correspondientes a jornales obreros, decretados por el laudo de fecha 4 de marzo del corriente año;

El Concejo Departamental de Montevideo

#### RESUELVE:

1.º Reintegrar a la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima, los importes que la misma abonó —por cuenta de este Concejo— según liquidaciones que obran en la Contaduría General.

2.º Autorizar el pago de los aumentos de salarios al personal de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima, correspondientes al mes de junio próximo pasado.

3.º Los pagos se efectuarán con cargo a los fondos establecidos por la ley de 19 de setiembre de 1953 y Decreto N.º 8302 de la Junta Departamental, y serán reintegrados una vez que se obtengan los recursos previstos para hacer frente a esos aumentos.

4.º Respecto al recurso de apelación interpuesto contra la resolución de este Ejecutivo N.º 2926, de fecha 17 de junio último, pase a informe de la Asesoría y Dirección Jurídica.

5.º Comuníquese al Departamento de Hacienda y a la Contaduría General y pase a la Asesoría y Dirección Jurídica.

(Fdo.): JOSE ACQUISTAPACE, Presidente. — Arturo Macció, Secretario.

SEÑOR VASCONCELLOS. — Pido la palabra para una cuestión previa.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — En nombre de la bancada batllista solicito un intermedio de treinta minutos.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — A consideración de la Asamblea.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Entiendo que podría aplazarse este intermedio.

(Murmullos).

—Todos sabemos cuál es la situación de la bancada batllista.

(Murmullos).

**SEÑOR MARTINEZ VIÑA.** — La Agrupación de Gobierno lo resolvió.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — La Agrupación no estableció eso. La Agrupación estableció que haría un intermedio en la tarde de hoy, pero no veo qué inconveniente hay para que se inicie la discusión que todos estamos esperando y que después se haga el intermedio.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — No tengo ningún inconveniente en discutir en el seno de mi sector con el señor Diputado Batlle Pacheco las objeciones que él formula. Y he transmitido a la Asamblea General un pedido de la bancada batllista y reitero ese pedido en nombre de esa bancada.

(Aprobados).

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Yo he asistido hoy a la reunión de la Agrupación de Gobierno; no me refiero a una agrupación nuestra, sino a la Agrupación que nos comprende a todos y en ella no se estableció este procedimiento de interrumpir de inmediato la reunión de la Asamblea.

Si me opongo a esto es porque me parece que después de las sesiones que hemos tenido sin número, por distintas razones, estaríamos dando la sensación de que queremos eludir el debate.

(Aprobados — No apoyados).

—No creo que sea este el propósito pero creo que todos debemos cuidarnos de que las apariencias no sean contrarias. Por esta razón, le rogaría al señor Diputado que ha hecho esa proposición que la postergara para unos minutos más tarde, por lo menos, hasta que ese iniciara el debate.

Se trata, por otra parte, de un problema de orden legal. No es un problema en el que se puede establecer un mandato a los componentes del Partido, porque a nadie se le puede exigir que interprete una ley o que influya para que la ley se aplique, si no está de acuerdo con el proyecto que se va a votar.

Por eso, no le doy esa importancia que le doy en otros casos a estos intermedios, sobre asuntos en que conviene ponerse de acuerdo sobre lo que se va a discutir.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — El señor diputado Batlle Pacheco tiene en sus manos la posibilidad de oponerse a este intermedio, votándolo en contra.

En cuanto a si se resolvió o no en la Agrupación de nuestro Partido, podremos discutirlo en el seno de nuestra Agrupación o de nuestro sector. Pero nadie tiene derecho, señor Presidente, a sospechar que lo que queremos es eludir una discusión de esta clase.

(Aprobados).

—Todo lo contrario; queremos que la opinión pública se entere bien sobre todas las mentiras que se han dicho sobre esta Ordenanza.

(¡Muy bien!).

—Vamos a decirlo en la forma más clara posible para que todo el país, y especialmente la población de Montevideo, sepa quiénes tiene razón: si el Municipio de Montevideo que defiende los intereses de la población, o la empresa particular.

No rehuimos el debate; lo queremos, lo deseamos y lo vamos a realizar. Pero insisto, señor Presidente, en nombre de la bancada batllista, en que se vote la moción que he formulado.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — ¿Me permite?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — No voy a insistir porque ya he logrado lo que deseaba: que se sepan más o menos nuestras posiciones.

**SEÑOR DUBRA.** — Pido la palabra para ocuparme de la moción.

**SEÑOR DUBRA.** — Desde luego, por tradición del Partido, vamos a votar el intermedio solicitado por un sector de la Cámara, máxime cuando es tan importante, como el sector batllista. Lo que quisiera saber, y es una explicación que solicito al señor Diputado Vasconcellos, es si efectivamente este intermedio va a ser por treinta mi-

nutos. Porque no sería agradable para los demás sectores de la Cámara que estuviéramos un poco a la espera por dos, tres, cuatro o cinco horas, de lo que resuelva la Agrupación Batllista.

Creo que si en treinta minutos no fuera posible a este importante sector mayoritario resolver el problema en función del cual pide el intermedio, sería más conveniente que lo dijeran desde ya, a los efectos de que los demás sectores pudiéramos tomar la determinación que se nos ocurriera.

En ese sentido y entendido vamos a prestar nuestros votos al pedido de intermedio.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Los treinta minutos quedan bajo responsabilidad de la Mesa. Corrido ese plazo, se reiniciará la sesión.

(Aprobados).

—Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

—Noventa en cientos dos: **Afirmativa.**

La Asamblea pasa a intermedio por treinta minutos. A las 19 y 39 se reanuda la sesión.

(Así se efectúa a la hora 19 y 9).

5

—Continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 42).

—Tiene la palabra el señor diputado Pons.

**SEÑOR PONS.** — Señor Presidente: uno de los problemas más importantes y vitales de difícil solución en todas las grandes ciudades del orbe, es el transporte de la enorme masa ciudadana que día a día hora en hora y minuto en minuto se desplaza de un lado a otro para, principalmente, cumplir con sus quehaceres. Facilitarlo y solucionarlo es política de buen gobierno, para evitar, primordialmente, la pérdida de tiempo, tan necesario de utilizar al máximo en esta vida moderna.

Montevideo no escapa a esta regla ni puede ser una excepción. Los viejos sistemas de tranvías de caballos, carretas y coches, fueron sustituidos por los tranvías eléctricos, explotación hecha por concesión a dos compañías de capitales extranjeros, la Comercial y la Transatlántica, reunidas posteriormente por adquisición que hizo la primera de las nombradas. Completaron un ciclo que no podemos olvidar en servicio de la población, pero el crecimiento de esta desbordó sus previsiones y los abusos de su monopolio hicieron que el ex Concejo Departamental de Montevideo permitiera, en 1936, la explotación perpendicular y complementario, —y muchas veces paralelas por razones de mejor servicio,— por contrato de concesión con particulares, del transporte en ómnibus de la población cada día más creciente de la ciudad.

Era tal el aumento de la población que la empresa tranviaria recién nueve años después empezó a sentir la competencia, queriendo adquirir esas empresas privadas, lo que le fué imposible por circunstancias que no es del caso mencionar.

Vinieron los años de la segunda guerra mundial y la empresa La Comercial, de capitales privados del Reino Unido —país que se desangró en defensa de la libertad humana— no pudo ponerse a tono con la época. El tranvía, ya viejo y desusado, había completado su ciclo, y en diciembre de 1947 se sancionó la ley de municipalización de esa compañía, que produjo el nacimiento de AMDET. “Ley de compra de hierro viejo” fué llamada por muchos, y si en parte eso fué cierto, tuvo sus ventajas: se terminó con una concesión dada al extranjero, se adquirieron valiosas propiedades que valen varias veces lo que se ha pagado, se cobró una deuda casi impagable y, sobre todo, se contribuyó en la medida de nuestros esfuerzos a cancelar la deuda de libertad que teníamos con la gran defensora de los pueblos libres, el Commonwealth de las naciones británicas.

Es cierto e innegable que AMDET nació en una pésima situación financiera y, más que nada, con falta de elementos apropiados de trabajo, con una explotación cara y con un personal en la mayoría de los casos inadaptable al ómnibus, sucesor natural, por todas las razones, del viejo y antieconómico tranvía. Por eso AMDET tuvo que readaptarse y ajustarse a la técnica moderna.

Desgraciadamente, a pesar de las sumas millonarias que ha recibido, la empresa no ha hecho más que pesar so-

bre la clase laboriosa de la población, y es un organismo que, si no se toman medidas radicales por quien corresponda, se verá arrastrado a una quiebra estruendosa en poco tiempo o se transformará en un monstruo que se devora a sus hijos, los pasajeros, en base al aumento incesante del boleto.

No conozco las relaciones de CUTCSA y demás concesionarios particulares con AMDET y con la ex Intendencia Municipal, pero imagino que nada de cordiales fueron, por los intereses encontrados y, sobre todo, por el afán municipalista de la Intendencia y de la Junta. A eso se debe, seguramente, el Decreto municipal N.º 5.973, de 28 de abril de 1948, dictado a cuatro meses de la creación de AMDET, que declaraba caducada la concesión otorgada por Decreto N.º 1.750 de la Junta Municipal y solemnizada el 14 de marzo de 1938.

De la lectura del decreto se desprenden agravios de la Junta —uso esta palabra en sentido jurídico— hacia CUTCSA, derogando decretos de empadronamiento y anunciando acción judicial, que fue iniciada por el agraviado ante los Tribunales competentes por daños, perjuicios y demás, y que, según mis informes, se halla en la instancia de ampliación de prueba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Hubiera sido tan enorme la aplicación lisa y llana de ese decreto que inmovilizaba prácticamente a la población de Montevideo, que el mismo día, por el artículo 39 del Decreto N.º 5.974, se autoriza a CUTCSA, con carácter precario y revocable en cualquier momento, a continuar sus servicios, y por el artículo 29 se autorizaba la concesión a cualquier particular que la solicitase. La empresa CUTCSA se amparó en esa disposición no me explico por qué razones ya que si no lo hubiera hecho las consecuencias hubieran sido terribles, cuyos resultados no podemos llegar a imaginar.

Las tratativas han seguido, pasando por el famoso plebiscito del 21 de julio de 1952, llamado vulgarmente "del yintén", desconocido posteriormente, pues el aumento poco tiempo después fue impuesto a la población, hasta desembocar estos vaivenes en la ya famosa ordenanza del transporte de fecha 3 de agosto de 1955, Decreto N.º 9.843 de la Junta Departamental, promulgada por el Concejo el 5 de agosto de este año. Esta ordenanza fue apelada en tiempo y forma el 19 de agosto del corriente año ante la Asamblea General, en nota dirigida al señor Presidente por más de 120.000 ciudadanos hábiles inscriptos del Departamento de Montevideo y por la Organización Obrera Nacional del Omnibus. En fecha 22 de agosto pasó para su estudio a la Comisión de Legislación de la Asamblea General.

Esa Comisión, después de dos entrevistas, una con CUTCSA y otra con el Concejo Departamental de Montevideo, se abocó al estudio del asunto, y el primer problema importante, de carácter previo, fué planteado por el señor senador Bayley, quien con fina dialéctica jurídica, planteó sus dudas sobre la competencia de esta Asamblea General para conocer y fallar en esta materia, las que fueron rebatidas en brillante forma por el señor senador Echegoyen.

Nuestra Carta Magna de 1951 establece una serie de recursos, por diversos motivos, para los particulares, personalmente y en conjunto, según sea la lesión de derecho: algunos ante la Asamblea General, otros ante la Suprema Corte de Justicia y otros ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Se discutió en la Comisión de los 25 y en Sala el alcance de este recurso y la competencia de cada organismo y su capacidad jurídica para sustanciar un proceso y su fallo.

El entonces diputado y hoy senador Ferrer Serra, al hablarse de recursos decía textualmente: "Con esto se quiere diferenciar en forma clara que los actos de gobierno, típicamente de gobierno, de los Gobiernos Departamentales, se pueden recurrir por el motivo político, puro y exclusivamente ante la Asamblea General". Gastón Jeze sostiene que los actos de Derecho Público deben ser recurridos ante la Corte de Casación, organismo que aquí no existe, pero que por su similitud es la Asamblea General.

Bartelémy agrega a esos actos o recursos los de orden político, y Walline, actual profesor de la Facultad de Derecho de París, agrega los de orden social. Dispuso que este recurso de los ciudadanos de característica típicamente públicas, políticas y sociales y por lo tanto es capacitado este Cuerpo para fallarlo.

Cuando se discute si el recurso de inconstitucionalidad debe ser ante la Suprema Corte y la Asamblea General se expresa por el actual senador Ferrer Serra: "Que la Asamblea General tiene que pronunciarse antes por existir un plazo de 60 días para hacerlo y hace por lo tanto innecesario lo otro". Bien claro explica que no da lugar a dudas sobre la competencia de este Cuerpo para examinar el problema que hoy tenemos a consideración.

¿Quién es el titular de todo recurso? Depende de las circunstancias y de los hechos; pero los actos de gobierno nacional y municipal y de acuerdo con nuestra Constitución y su interpretación, cualquier persona individualmente. El recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe ser en el triple carácter de político, personal y legítimo, según lo sostenía el entonces diputado y hoy Ministro de Hacienda, doctor Malet, lo que quiere decir, a "contra sensu", que cuando no se cumplen los requisitos el organismo competente es la Asamblea General. Los decretos del gobierno municipal que se refieren a intereses generales, públicos, políticos y sociales, tienen la vía de inconstitucionalidad ante la Asamblea General. ¿Qué es este recurso? Es de interés de toda la población de Montevideo, o sea social, que se siente lesionada en sus intereses por un decreto u ordenanza. En la misma forma opinaba mi malogrado condiscípulo y colega, el doctor Sosa Aguilar, desde su banca de diputado.

Los diputados Washington y Enrique Beltrán, estando en teoría con esta posición, discrepaban en darle facultades a la Asamblea General, no por razones jurídicas ni políticas, sino prácticas, por lo difícil que es mover un órgano tan pesado, cosa que no debe ser, dada la jerarquía y la repercusión que tiene en todo el país.

Para mí, liquidado el problema de competencia de la Asamblea General —porque al decir del profesor Walline, hay en juego un interés primordialmente social— paso a examinar el caso particular.

Comparto, en general, las consideraciones que se vierten en el escrito con que se interpone el recurso de apelación para ante la Asamblea General contra el Decreto N.º 9.843 de la Junta Departamental de Montevideo, y en especial las consideraciones relativas a los vicios de inconstitucionalidad de que adolece dicho decreto que, como surge de los demás antecedentes que se han tenido a la vista, son similares de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima en los diversos escritos, memorándum presentados con motivo de la aprobación de la Ordenanza de Transporte.

Por eso entiendo que corresponde aconsejar a la Asamblea General que, ejerciendo las facultades que le confiere el artículo 303 de la Constitución de la República —de cuya aplicabilidad al caso no tengo la menor duda— como antes lo he dicho, decida en definitiva, derogando dicha Ordenanza, en primer término por la inconstitucionalidad de la misma y luego —y es un aspecto que de ningún modo puede olvidarse— porque ella no aportará beneficio positivo de ninguna naturaleza a la población de Montevideo, ni dará soluciones correctas a los problemas del transporte que la aquejan.

Señalo, en primer término, que el recurso que se sanciona por el artículo 6º de dicha Ordenanza bajo el nombre de "tasa", por el cual en la práctica se eleva el precio del boleto del transporte urbano a la suma de pesos 0.12.

SEÑOR BALAY. — Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR BALAY. — Señor Presidente: voy a solicitar excusas al estimado legislador Pons, por interrumpirlo en el uso de la palabra; pero como está entrando al fondo del asunto considero —y esto fué planteado en el seno de la Comisión de Legislación de la Asamblea— que justamente el problema que el señor legislador ha dejado finiquitado en su exposición debe ser objeto de una decisión o de un pronunciamiento especial de la Asamblea General.

Entiendo que existe, señor Presidente, de acuerdo al texto del artículo que ha glosado el señor legislador —el artículo 303 de la Constitución— la necesidad de que la Asamblea resuelva previamente si es competente o no para conocer este asunto. Y me parece que desde el punto de vista reglamentario basta con que un legislador lo plantee para que la Asamblea trate este asunto. Antes de entrar al fondo de la cuestión me parece que la Asamblea General debe decidir, repito, si es o no competente para conocer de la apelación interpuesta.

Ya el señor legislador ha esbozado el problema, y en el caso de que se resuelva pronunciarse previamente si la Asamblea es competente o no, nosotros vamos a intervenir en el debate.

SEÑOR PRESIDENTE. — Está a consideración de la Asamblea la moción formulada en el sentido de que previamente se pronuncia sobre su competencia para intervenir en la apelación interpuesta.

SEÑOR PONS. — ¿Me permite, señor Presidente?...

Me va a disculpar el señor legislador Balay que tan finamente me ha interrumpido en la exposición que estaba realizando cuando ni había llegado a ese punto; pero le pediría

que me leyera el artículo del Reglamento de la Asamblea General que establece que tiene que resolverse como cuestión previa el problema que él plantea.

**SEÑOR BALAY.** — ¿Me permite, señor Presidente?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor legislador.

**SEÑOR BALAY.** — No creo que se necesite un artículo que establezca expresamente como cuestión previa que si un legislador solicita que la Asamblea se pronuncie a este respecto, ésta deba hacerlo. Pero se trata de una cuestión de orden que se refiere a la competencia de la Asamblea General para entender en un asunto; es de la esencia misma de un órgano, de su competencia, que una vez que se plantea la duda por uno de sus integrantes de si ese órgano es competente o no para entrar en la discusión de un asunto, que ese problema se trate sobre tablas.

Creo que este planteamiento no admite ninguna duda, y en todo caso lo someto al punto a consideración de los señores legisladores para que si fuera de otro modo así me lo aclaren.

**SEÑOR PONS.** — Cuando empezó esta sesión, antes de pedir el intermedio el sector del Partido Batllista, la Asamblea, por una inmensa mayoría, votó estudiar este asunto, si mal no recuerdo.

(Apoyados).

—Creo que ya hay pronunciamiento de la Asamblea para tratarlo.

(Apoyados).

**SEÑOR PRESIDENTE.** — El voto que la Mesa solicitó de la Asamblea para tratar el asunto tiene el aspecto reglamentario que prevé el Reglamento. La Asamblea no había sido citada por decisión de la Mesa, sino a pedido de los señores legisladores. Los señores legisladores tenían que pronunciarse si se realizaba la sesión para tratar el asunto.

Si ahora se plantea por parte de un señor legislador la incompetencia de la Asamblea para pronunciarse sobre la Ordenanza, ése es un punto de previo y especial pronunciamiento.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor legislador.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Señor Presidente: la tesis que se quiere sostener, de que el hecho de que la Asamblea haya decidido entrar a tratar este asunto implica la no necesidad de pronunciarse sobre un problema de competencia de la propia Asamblea, significaría, lisa y llanamente el hecho de que las firmas reglamentarias para citar a la Asamblea y la decisión del Cuerpo de empezar a ocuparse del problema planteado. Significa también, por si, un pronunciamiento sobre un problema de orden constitucional, en este caso, que se ha planteado y discutido largamente en la Comisión respectiva.

**SEÑOR BALAY.** — ¡Apoyado!

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Estimo que la posición que sostiene el señor legislador Balay es exactamente la que corresponde.

Planteado el punto por el señor diputado Pons, lo que la Asamblea tiene que hacer, como cuestión indispensablemente previa, es resolver si es competente o no para tratar este problema. Una vez hecho eso, entraremos al otro aspecto del problema: si lo resolvemos negativamente, desde luego todo queda descartado; si lo resolvemos afirmativamente, entraremos a analizar los distintos aspectos de la ordenanza contra la cual se ha recurrido a la Asamblea General.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — A consideración de la Asamblea.

**SEÑOR BALAY.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor legislador.

**SEÑOR BALAY.** — Señor Presidente: en consecuencia, voy a entrar a la consideración del asunto para el cual he solicitado que se ocupe la Asamblea.

(Murmullos — Interrupciones).

—Entonces, qué se vote.

**SEÑOR PONS.** — En el uso de la palabra estaba yo. Ahora, si se vota para que sea tratado como asunto previo, está bien. Si no, proseguiré en el uso de la palabra.

**SEÑOR BALAY.** — Pido la palabra para fundar mi moción, señor Presidente.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor diputado.

**SEÑOR BALAY.** — Quiero referirme a lo siguiente: con respecto a las manifestaciones que hacía el señor diputado Pons, la propia circunstancia de que el señor diputado haya planteado el problema de la competencia de la Asamblea, me parece que obliga al Cuerpo a entrar en la consideración del punto que en mi concepto es fundamental, y decidir sobre el mismo.

Quiero además historiar una serie de hechos que ocurrieron en el seno de la Comisión de Legislación de la

Asamblea General. Llegado el asunto a conocimiento de la Comisión, ésta dedicó la totalidad de sus sesiones al estudio del mismo, exponiéndose por parte de los integrantes de la misma las diversas posiciones que tenían sobre el particular, una de las cuales fué la del señor diputado Pons.

Ahora bien: la Comisión, en virtud de la preteritividad de las citaciones de la Asamblea General, vió interrumpida en estos momentos su labor por esta sesión de la Asamblea, y no ha tomado decisión sobre el punto, punto que la propia Comisión consideró como de previo y especial pronunciamiento —para tomar las palabras del señor Presidente de la Asamblea— a efectos de resolver primero este asunto y luego de resuelto, para el caso de declararse competente la Asamblea, entrar al fondo del mismo, al estudio pormenorizado de la ordenanza.

Entendemos, en consecuencia, señor Presidente, que debemos aquí, en el seno de la Asamblea, seguir el criterio de la Comisión de Legislación y tratar este problema previo que dejó planteado. Me parece que es un asunto totalmente reglamentario, y que basta que un miembro de la Asamblea plantee la duda o la necesidad de que se estudie y se decida si es o no competente la Asamblea, para que ésta entre al estudio del asunto y resuelva, después, entrar o no entrar a la consideración del problema de fondo.

**SEÑOR GRAUERT.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor legislador.

**SEÑOR GRAUERT.** — Señor Presidente: a mí me parece que, aparte de que resultan acertadamente claras las argumentaciones dadas por el señor diputado Balay, basta con referirse a los principios generales de derecho elementalísimos, para saber que la simple votación dada por la Asamblea General, en este caso, no quiere decir nada más que desea ocuparse del asunto, y no puede impedir de manera alguna el planteamiento de lo que sería una de las excepciones de fondo, que es fundamentalmente la falta de competencia de un juez para ocuparse de la materia.

Pero no es necesario ni siquiera recordar esto. Basta con que recordemos si, que no hace dos meses estuvimos reunidos aquí, en la Asamblea General, discutiendo, después de haber resuelto ocuparnos del asunto, la incompetencia de este Cuerpo para conocer con respecto a un recurso de retiro de confianza a Ministros de la Corte Electoral.

El problema fué planteado por el señor senador Ferrer Serra, quien en forma muy inteligente y muy hábil habló o disertó a este respecto más de dos horas. A nadie se le ocurrió aquí, en la Asamblea, a pesar de que muchos éramos contrarios a su tesis de fondo, oponerle la posición de que la simple votación realizada previamente por la Asamblea implicaba de hecho la falta de pertinencia en el planteamiento de la competencia de la misma.

Considero que es una cuestión fundamental y como ha dicho el señor Presidente, es de previo y especial pronunciamiento. Afecta a la Constitución de la República, y no se refiere a que este mismo Cuerpo declare si se considera o no competente para entrar a estudiar el fondo del problema. Creo que no es necesario fundamentar más esta actitud para dar en esta incidencia la razón al señor diputado Balay y apoyar su posición.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor diputado.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Señor Presidente: creo que tienen razón los que sostienen que es previo tratar el asunto de si corresponde a la Asamblea o no resolver este asunto. Me parece que no se puede discutir que en cualquier momento, cualquier legislador que advirtiera que un asunto, la Asamblea o un Parlamento lo está tratando sin que corresponda, debe denunciar su pensamiento, y me parece que es una obligación de los demás analizar si se está actuando bien o irregularmente.

Personalmente creo que la Asamblea puede actuar, pero me parece que no se le puede negar el derecho, a quien cree que no puede hacerlo, de someter el punto a la voluntad de la Asamblea.

**VARIOS SEÑORES LEGISLADORES.** — Que se vote.

**SEÑOR TROCCOLI.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor senador Tróccoli.

**SEÑOR TROCCOLI.** — Simplemente, señor Presidente, y a mayor abundamiento, para señalar que en el Reglamento de la Asamblea General hay una expresa disposición, —y con ello evacuo la consulta que hacía el señor diputado Pons— el artículo 77, que contempla y regla expresamente el caso que está a consideración de la Asamblea.

El artículo en cuestión dice que en el curso de la discusión de todo asunto podrán hacerse mociones e indicaciones con el carácter de cuestiones previas o de orden, las que serán inmediatamente resueltas, suspendiéndose entre tanto la discusión del asunto que esté a consideración de la Asamblea.

En este caso la cuestión de orden o previa dice nada menos que sobre la competencia de la Asamblea General para estudiar el problema de fondo para el que ha sido convocada.

SEÑOR PONS. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR PONS. — Me parece que ha habido un mal entendido entre los legisladores del sector batllista que han hecho uso de la palabra. Yo no me he opuesto en ningún momento a que sea tratado cualquier asunto referente a esto en la Asamblea. En esta oportunidad lo único que pedí a la Mesa fué una aclaración: a qué artículo del Reglamento se refería y que el señor diputado Balay hiciera la moción en forma, porque si no, seguiría hablando yo.

Yo no me he opuesto a nada.

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿En qué consiste su moción, señor diputado Balay?

SEÑOR BALAY. — Mi moción consiste en lo siguiente: que se resuelva con carácter previo o que en este momento la discusión se cña al siguiente punto: que la Asamblea General resuelva si es o no competente para entender en la apelación que es motivo del orden del día de hoy y que se entre de inmediato al estudio del problema. El problema de fondo recién podrá ser encarado una vez que la Asamblea resuelva que es competente para entender en este género de apelaciones.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — A consideración de la Asamblea.

SEÑOR BELTRAN. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR BELTRAN. — Quiero plantear una cuestión previa a la votación, con respecto a si puedo intervenir en la misma.

No conozco exactamente el Reglamento de la Asamblea General —creo que muy pocos diputados y senadores lo conocen— pero moviéndome con el Reglamento de la Cámara, quizás en un extremo de sensibilidad —aunque en esta materia nunca la sensibilidad es extrema—, debo denunciar ante el Cuerpo que tengo un parentesco político muy estrecho con el Gerente de la empresa privada, que resultaría interesante en el planteamiento sometido en la Asamblea.

SEÑOR PRESIDENTE. — Está a consideración de la Asamblea el planteamiento del señor diputado Beltrán.

(Murmillos).

—Si la Asamblea no propone resolución al respecto, el señor diputado Beltrán será dueño de la conducta a adoptar.

SEÑOR FUSCO. — ¿Tiene algún ómnibus?

SEÑOR BELTRAN. — No tiene ninguno.

SEÑOR DUBRA. — ¿Me permite?...

Propongo que el señor diputado Beltrán quede habilitado para intervenir en el debate y votar.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a a votar la moción del señor diputado Dubra.

(Se vota: Afirmativa. — 95 en 101).

—Continúa en discusión la moción presentada por el señor diputado Balay para que previamente la Asamblea trate el asunto relacionado con la competencia del Cuerpo para intervenir en este asunto.

VARIOS SEÑORES LEGISLADORES. — ¿Que se vote? (Murmillos).

SEÑOR FUSCO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FUSCO. — Creo que los que sostienen que cuanto se plantea en cualquier Cuerpo un problema de competencia, debe constituir un punto de previo y especial pronunciamiento, aún teniendo razón, no han hecho el planteamiento en forma adecuada.

(Apoyados).

—En realidad, los planteamiento, en los Cuerpos deliberantes, surgen de las exposiciones que hacen los que intervienen en el estudio de los asuntos.

La Asamblea se reunió, a pedido de un grupo de sus integrantes, para considerar la apelación deducida contra una ordenanza del Gobierno Departamental de Montevideo. Resolvió, puesto que había sido convocada a pedido de un determinado número de legisladores, —y en ese caso se requiere una resolución propia del Cuerpo para celebrar sesión— realizar la sesión a fin de estudiar este asunto.

Hubiera sido adecuado que en el momento en que comenzaba el debate sobre el asunto, quienes tuvieran dudas sobre la competencia del Cuerpo, se anticiparan a plantear este problema, exponiendo tales dudas, y el criterio de acuerdo con el cual respaldaran la tesis de la incompetencia.

Como no hay norma que dé derecho de primacía a nadie para solicitar la palabra en el seno de la Asamblea, la pidió previamente un señor legislador para quien esas dudas parecen no existir, o, más bien dicho, existiendo —porque todos las tenemos— él tenía, a su respecto, una posición contraria a la de aquellos que tienen la opinión de que la Asamblea es incompetente.

Creo que lo adecuado habría sido respetar el derecho al uso de la palabra de quien la había solicitado en primer término, para después hacer el planteamiento, en el momento en que se considerara oportuno. —porque no hay ni puede haber, tampoco, en esta materia una norma imperativa de tiempo: hasta puede ocurrir que la duda surja cuando va se esté al término de la deliberación y eso, de todos modos, siempre obligaría a que la votación previa fuera sobre ese punto. Pero no siendo ese el caso por lo mismo que sabemos que las opiniones ya están formadas sobre esta materia, en un sentido u otro—, lo mejor habría sido que cuando terminara el señor legislador que tiene posición formada sobre la competencia de la Asamblea, alguien que tuviera una opinión contraria, hiciera ese planteamiento.

En lugar de eso, se optó por el procedimiento —no creo que haya sido el más ajustado: pero no hago reproche por que no cabe ni siquiera la duda de una intención en esta actitud— de interrumpir al señor legislador que estaba en uso de la palabra, cuando iba a entrar al fondo del asunto, para promover la cuestión previa.

Sucedidas así las cosas, me parece que corresponde admitir el procedimiento, aunque no haya sido el más adecuado, corresponde admitirlo. Pero la forma de admitirlo, la manera de entrar a deliberar sobre el punto previo de la competencia de la Asamblea, no es la de votar una moción en tal sentido, sino simplemente la de plantear la cuestión en sí misma. Lo que corresponde es que quienes tengan la idea de que la Asamblea no es competente, pidan la palabra para hacer una moción en ese sentido, y la funden con toda la extensión que el caso requiera.

No son mociones adecuadas para la votación en los Cuerpos deliberantes las que no señalan un categórico pronunciamiento afirmativo o negativo.

(Apoyados).

—No es moción adecuada la que diga que la Asamblea debe resolver "si es o no" competente: la moción adecuada es la que diga que la Asamblea es competente, o la que diga que la Asamblea no es competente.

(Apoyados).

—En este caso, quienes tienen interés en hacer el planteamiento, son los que entienden que la Asamblea no es competente. Esa es la moción que debe hacerse, fundándola con los argumentos que correspondan y discutiéndola con la amplitud necesaria, hasta que, obtenido el pronunciamiento, si éste fuera en el sentido de la incompetencia, se levanta sin más la sesión, y si, en cambio, fuera en el sentido de la competencia, se entre a tratar el otro aspecto, el del fondo del asunto.

(Apoyados).

—Creo que éste es el procedimiento ajustado. Yo exhorto a los compañeros que sostienen la tesis de la incompetencia de la Asamblea, a que hagan moción en ese sentido, y entren al debate de la misma antes de someterla a votación, porque es del debate que resultará la ilustración adecuada sobre si la Asamblea es o no competente.

SEÑOR BALAY. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BALAY. — Señor Presidente: quiero aclarar mi posición, sobre todo con respecto a mi distinguido compañero doctor Pons: El sabe que lo estimo y lo distingo suficientemente y por cierto no estaba en mi ánimo interrumpirlo y cercenarle su derecho a hacer una exposición para que lo escuchemos con el respeto y la atención que a todos nos merece.

Pero lo cierto es que en la mecánica de la discusión legislativa, cuando el señor Diputado Pons terminó el primer aspecto de su exposición, que se refiere a la competencia de la Asamblea, por una razón hasta de economía en el trabajo parlamentario, se me ocurrió plantear mi duda a efectos de que en una instancia posterior no se tuviera que rever o desandar todo un camino de discusión y de debate legislativo que iba a hacer sobre el fondo del asunto, cuando yo entiendo que este problema es previo y hay que estudiarlo y resolverlo en una primera instancia.

En consecuencia, encuentro atinado el razonamiento que

hace el señor senador Fusco, porque ese fué también mi procedimiento: ni bien hice este planteamiento, entendí que ni siquiera se podía someter a votación. Se trata de una cuestión, digamos, "de cajón", esencial de todo órgano, y sobre todo si es un órgano colegiado pluripersonal, que si un miembro del mismo plantea la duda sobre la competencia, de inmediato el órgano tiene que abocarse al estudio de esa competencia, porque es de la naturaleza misma de ese órgano el no poder actuar si está cuestionada su competencia por alguno de sus integrantes.

No tengo ningún inconveniente en modificar esa moción, si pudiera ser considerada como atentatoria del derecho de un señor legislador, y, en consecuencia, seguiré el desarrollo del discurso del señor Diputado, y esperaré la oportunidad correspondiente para formular las apreciaciones que considere pertinentes.

He terminado.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — La Mesa debe informar a la Asamblea que cuando se inició la sesión, el primer representante que pidió la palabra fué el doctor Balay; pero la Mesa le advirtió que el señor Diputado Pons se había inscripto antes de entrar a la sesión, por lo que el señor Diputado Balay le dijo que, en ese caso, si el señor Diputado Pons se iba a ocupar de la competencia, tenía que cederle la palabra, porque la había pedido con anterioridad. Anunció, además, que se reservaba para plantear el problema en la Asamblea, en caso de que no lo hiciera otro señor legislador.

En virtud de que no se hace cuestión sobre el problema, puede continuar en el uso de la palabra el señor Diputado Pons.

**SEÑOR SEGOVIA.** — ¿Me permite, señor Presidente?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR SEGOVIA.** — Entiendo que el planteamiento formulado por el señor Diputado Balay tenía un claro sentido, que era el de evitar un debate ocioso en el seno de la Asamblea.

Nosotros escuchábamos atentamente la exposición del señor Diputado Pons, en el bien entendido de que iba a plantear un problema estrictamente formal. Pero en el instante mismo en que entra a analizar el fondo del asunto, es absolutamente procedente que los que entendemos — como el señor Diputado Balay — que la Asamblea General es incompetente para pronunciarse sobre el tema en debate, hagamos una moción de orden en ese sentido. Era, evidentemente, una cuestión de orden, como bien se dijo, un artículo de especial y previo pronunciamiento, para evitar un debate absolutamente inútil si, a la postre, culminaba con una declaración de incompetencia de la Asamblea.

Por lo tanto, y justamente en atención al señor Diputado Pons, distinguido expositor en este momento, para evitarle un discurso absolutamente inútil, es que planteamos en esta oportunidad la incompetencia de la Asamblea General. No puede entenderse, de ninguna manera que se está coartando el derecho del señor Diputado Pons a exponer, sino que, por el contrario, se le estaba tomando especialmente en cuenta, tratando de evitar que sus palabras no tuvieran ningún significado ni ninguna resonancia.

No cabe ninguna duda que la Asamblea tendrá que dedicarse inmediatamente a resolver este problema, que, como dije anteriormente, es previo y de especial pronunciamiento.

Creo haber sintetizado la posición de un numeroso sector de la Asamblea que, pronunciándose en el sentido de la incompetencia de la misma, lo plantea en su debida oportunidad, teniendo muy en cuenta, insisto, el derecho del legislador que estaba haciendo uso de la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — No hay moción presentada, señor Diputado.

Puede continuar el señor Diputado Pons.

**SEÑOR SEGOVIA.** — Entonces, culminando mi razonamiento, y vista la observación del señor Presidente, voy a formular moción: atento a las manifestaciones formuladas por el señor Diputado Balay, y sin perjuicio de las aclaraciones que la Asamblea estime pertinentes para la debida fundamentación de la votación, se declare, previamente, la incompetencia de la Asamblea General para pronunciarse sobre el tema actualmente en debate.

(Apoyados).

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Está a consideración la moción presentada.

**SEÑOR BALAY.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR BALAY.** — Señor Presidente: voy a hacer la aclaración de que me ocuparé de la moción del señor Diputado Segovia...

**SEÑOR SEGOVIA.** — Que es suya.

**SEÑOR BALAY.** — ...que es la mía; es exacto.

Señor Presidente: voy a tratar de encarar...

**SEÑOR FERRER SERRA.** — Pero, hay que votar primero!

**SEÑOR BALAY.** — ¿Así que hay que votar ahora?

(Interrupciones. — Murmullos).

— ¡No hay que votar, señores legisladores!...

(Interrupciones. — Campana de orden).

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Permitanme, señores legisladores.

El que estaba en uso de la palabra era el señor Diputado Pons. La Mesa admite que un señor representante pueda pedir que la Asamblea se pronuncie previamente sobre la competencia; pero la Asamblea tendrá que tomar decisión.

(Apoyados).

— No admite, por ejemplo, la tesis que apareció por la Asamblea de que un representante intervenga dos horas sosteniendo la incompetencia de la Asamblea.

**SEÑOR BARRIOS AMORIN.** — ¿Por qué?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Porque, primero, la Asamblea dirá si quiere ocuparse de la competencia, y entonces se concretará el debate a este tema.

(Interrupciones. — Campana de orden).

— Si la Asamblea se pronuncia en contra, los señores legisladores estarán en libertad de hablar sobre el fondo del asunto.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — La tesis que sostiene la Mesa es evidentemente peligrosa, porque podríamos obviar el problema por vía de la votación, sin discutirlo.

(Apoyados).

— Bastaría, simplemente, el hecho de que la Asamblea declarara que no quiere entrar a tratar el problema, para que, sin expedirse sobre el fondo del asunto, el problema no pudiera ser planteado.

(Apoyados).

— Creo que es absolutamente necesario que se den las razones sobre las que se apoya la moción que se ha formulado. Para eso pidió la palabra el señor Diputado Balay. Surgirán luego los contradictores de la posición que él sostiene, como ya aparecieron en el seno de la Comisión respectiva de la Asamblea General. Lo que no podemos hacer es evitar el problema. Si la Asamblea resolviera, simplemente, no tratar este problema, quienes sostienen que no es competente, ¿van a admitir ese pronunciamiento sin dar las razones por las cuales hicieron su moción? Me parece que es tan claro y tan lógico el planteamiento, que su sola enunciaci3n lleva a que se ampare en el uso de la palabra al señor Diputado Balay, para que se exprese sobre este tema concreto que está planteado. Y oportunamente, una vez resuelto este problema previo, continuará en el uso de la palabra el señor Diputado que lo estaba haciendo, para referirse al fondo del asunto.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — La Mesa entiende que los señores legisladores que voten por la afirmativa la moción del señor Diputado Segovia no se pronuncian sobre la competencia o incompetencia de la Asamblea General: se pronuncian sobre si ese asunto es previo.

(Interrupciones. — Campana de orden).

**SEÑOR SILVA.** — ¿Que se repita la moción!

**SEÑOR SEGOVIA.** — ¿Me permite, señor Presidente?

Mocioné concretamente para que la Asamblea declare que es incompetente para entender en el asunto a su consideración.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Pero, por ese camino, vamos a la discusión previa sobre su moción, y la Mesa dará la palabra al señor Diputado Pons.

**SEÑOR SEGOVIA.** — Entiendo que la moción, de por sí fundamental, necesita una explicación, y que lo lógico sería que hablaran a favor y en contra de la misma, si es que existen dos posiciones en la Asamblea.

**SEÑOR BALAY.** — ¿Me permite, señor Presidente?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR BALAY.** — Creo que habiéndose planteado una cuestión de orden — si es o no competente la Asamblea General para conocer de este asunto —, pido la palabra para ocuparme del punto. No creo, con esto, cercenar el derecho del señor Diputado Pons a formular su exposici3n, sino que es una consecuencia lógica de la aplicaci3n del Reglamento de la Asamblea, o del mecanismo de discusi3n que posee: hay un señor representante en el uso de la palabra; se plantea una cuestión de orden; de inmediato, se suspende la discusi3n sobre el asunto y, en consecuencia, queda suspendido en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra aquel señor representante, y los legisladores que plantearon la cuestión de orden, entran a debatir sobre la procedencia o no de la misma. En este sentido es que me voy a ocupar del asunto.

**SEÑOR CARTOLANO.** — ¿Me permite, señor Presidente?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR CARTOLANO.** — Creo interpretar el sentido de la moción del señor Diputado Balay. Puede ser que esté equivocado, pero creo que para poder complacer el espíritu de dicho señor Diputado, lo que hay que votar es lo siguiente: que es previa la consideración sobre la competencia de la Asamblea General.

**SEÑOR MARTINEZ MORENO.** — No hay moción.

**SEÑOR CARTOLANO.** — Entonces, la formulo yo, señor Presidente. Hago moción en el sentido de que es previa la consideración de la competencia de la Asamblea.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — El señor Diputado Cartolano formula moción concreta en el sentido de que la Asamblea declare que es previa la declaración de la competencia de la misma.

**SEÑOR TROCCOLI.** — Pido la palabra para ocuparme de esta moción.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor legislador.

**SEÑOR TROCCOLI.** — Señor Presidente: la moción que ha formulado el señor Diputado Segovia parecería de toda evidencia que es una moción de orden. En consecuencia, la Mesa debe, a nuestro juicio, entrar a hacer jugar el artículo 77 del Reglamento, suspendiendo la consideración del asunto de fondo para el cual ha sido convocada la Asamblea. El problema que quedaría por considerar es el siguiente: si el problema de orden planteado admite o no discusión y parece de toda evidencia que la esencia del planteamiento cuando se refiere a la competencia del Cuerpo para entrar al problema es de los que típicamente no sólo toleran, sino que exigen la discusión.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Las mociones de orden están previstas en el Reglamento, y ésta no lo está, de manera que los señores legisladores tienen dos caminos: o pedir el aplazamiento del fondo del asunto para tratar el de la competencia, o...

**SEÑOR TROCCOLI.** — Se suspende de oficio.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — La Mesa no lo suspende de oficio; los señores legisladores lo proponen y lo aprueban. (Murmillos).

— Está a consideración la moción del señor Diputado Cartolano.

**SEÑOR MICHELINI.** — Solicito que la Mesa haga leer el artículo 77 a que ha hecho referencia el señor senador Tróccoli.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Se va a leer el artículo 77 del Reglamento. Léase.

(Se lee:).

"Artículo 77. En el curso de la discusión de todo asunto, podrán hacerse mociones e indicaciones con el carácter de cuestiones previas o de orden, las que serán inmediatamente resueltas, suspendiéndose entre tanto la discusión del asunto que esté a la consideración de la Asamblea".

**SEÑOR TROCCOLI.** — Pido que se lea por Secretaría el numeral 5.º del artículo 74 cuando establece cuáles son las cuestiones de orden.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Léase el numeral 5.º del artículo 74.

(Se lee:)

"Artículo 74. Numeral 5.º: Suspensión o aplazamiento de la discusión, o consideración de un asunto".

**SEÑOR PRESIDENTE.** — No se ha mocionado. Si se pide el aplazamiento, la Mesa lo someterá a votación.

**SEÑOR MICHELINI.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR MICHELINI.** — Señor Presidente: yo no sé si la observación que voy a hacer es correcta, pero me parece que la moción del señor Diputado Segovia que recoge la del señor Diputado Balay es terminante. En el momento de entrar a considerarse el problema de fondo, algunos legisladores entienden que la Asamblea General no es competente para intervenir en el asunto, y así lo manifiestan. La objeción es tan importante y tan grave que como decía muy bien el señor senador Tróccoli, es de las que exigen discusión, y no puede de ninguna manera considerarse el asunto de fondo si previamente no se resuelve el de la competencia.

El artículo 77 y el inciso 5.º del artículo 74 que se han leído, y a los que hizo referencia el señor senador Tróccoli, evitan toda discusión sobre el problema. La Asamblea General debe abocarse de inmediato a discutir sobre la moción del señor Diputado Balay que expresa que la Asamblea General es incompetente. De uno y otro lado se dan argumentos en pro y en contra, y luego la Asamblea General votará si es competente o no para entender en el problema. Toda otra discusión es completamente ociosa.

**SEÑOR FUSCO.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR FUSCO.** — Señor Presidente: entiendo que la moción propuesta no plantea una cuestión previa ni una cuestión de orden: plantea una cuestión de fondo, una cuestión tan de fondo como el asunto mismo para cuya consideración estamos reunidos. Pero, como lo dije antes, es una cuestión que, una vez planteada, reclama un pronunciamiento previo, porque una vez que se ha puesto en duda la competencia de la Asamblea, no se podría entrar a considerar el problema de fondo, sin establecer anticipadamente que somos competentes.

Lo que hay que hacer es entrar derechamente a discutir el asunto.

(Apoyados).

— Lo que hay que hacer es pedir la palabra y decir: señor Presidente: yo sostengo la moción que he presentado, en el sentido de que se declare que la Asamblea es incompetente, por tales o cuales razones, exponiéndolas con la extensión debida.

(Murmillos).

— Ahora, si no se los deja hablar porque el señor Diputado Pons reclama su derecho inicial a terminar su exposición, habría un poco de razón de parte de dicho señor Diputado, y entonces lo que podría hacerse es esperar a que termine, para plantear el nuevo asunto con los discursos que sostengan la tesis, y en seguida de planteado, entonces sí no se puede ir a otra cosa que a discutir ese punto.

Otra solución sería que el señor Diputado Pons no tuviera inconveniente en renunciar por ahora al uso de la palabra para lo que falte de su exposición, hasta que se dilucide este asunto de previo y especial planteamiento.

De modo que el problema se reduce a que uno u otros, el señor Diputado Pons o los que sostienen la tesis de la incompetencia de la Asamblea, esperen el momento oportuno para hacer uso de la palabra.

Yo le pregunto al señor Diputado Pons: ¿tiene interés en seguir ahora?

**SEÑOR PONS.** — Sí, señor senador. Deseo terminar mi exposición.

**SEÑOR FUSCO.** — Entonces, ahora pido a los otros señores legisladores, que esperen a que el señor Diputado Pons termine su exposición, y entonces expresen su pensamiento.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — ¿El señor Diputado Cartolano insiste en su moción?

**SEÑOR CARTOLANO.** — Retiro mi moción porque la solución del señor senador Fusco es salomónica y me parece bien.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Si no hay moción presentada, puede continuar en el uso de la palabra el señor Diputado Pons.

**SEÑOR BALAY.** — ¿Me permite para que termine el asunto, señor Presidente?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR BALAY.** — No tengo ningún inconveniente ni ningún interés personal en hablar ahora; sé que podré exponer mi pensamiento en esta Asamblea y que ésta me va a escuchar, y eso es suficiente para mí. Pero se ha hecho, por el señor senador Fusco, un planteamiento de prioridades y de oradores que parecería que el interés del legislador que habla es hablar en detrimento...

**SEÑOR FUSCO.** — No señor Diputado.

**SEÑOR BALAY.** — Parecería o podría parecer, a una persona no avisada o que no esté en el "métier" del asunto. Pero lo cierto es que no es ese mi interés y que no tengo ningún afán personal de interrumpir al señor Diputado Pons. Eso es lo que quería aclarar.

Lo que ha ocurrido, vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento, es que el mecanismo de las cuestiones de orden hace que evidentemente un orador sea interrumpido por otro y eso es lo que hace la Mesa aplicando el Reglamento. De manera que voy a hablar en segundo término.

He terminado.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede continuar el señor Diputado Pons.

**SEÑOR PONS.** — Agradezco la deferencia de la Asamblea de dejarme terminar mi exposición, cosa lógica porque se me ha interrumpido bastante. Agradezco también al señor senador Fusco la tesis salomónica que me permite terminar.

Continúo, señor Presidente. Señalo, en primer término, que el recurso que se sanciona por el artículo 6.º bajo el nombre de "tasa", por el cual en la práctica se eleva el precio del boleto de transporte urbano a la suma de pesos 0.12 no es, como se afirma, una "tasa", que es el único recurso fiscal que está constitucionalmente autorizado al Municipio a imponer.

La redacción actual del artículo 297 de la Constitución de la República permite afirmarlo categóricamente, desde que de acuerdo a la misma, tasa es la remuneración al

bierno Departamental por la utilización, aprovechamiento o beneficio de servicios proporcionados por éste.

Es evidente que, en el caso, quien presta el servicio de transporte es la entidad privada; por un lado, y la entidad municipal AMDET por el otro, y en ninguna de las hipótesis el Gobierno Departamental.

Esta sola consideración, que se asiente en el texto claro de la Constitución, basta para revelar el vicio de la ordenanza.

Podría agregarse, también, que el Gobierno Departamental tampoco retira para sí ninguna cantidad del producido de la tasa que crea, por cuanto a estar al contexto general de la ordenanza, aquel se invierte de manera íntegra en la explotación.

Cabe entonces pensar que no se está frente a un recurso o renta municipal de los previstos en el artículo 297 de la Constitución de la República, en cuyo inciso 5.º se encuentra incluida la autorización a los Municipios para crear tasas por servicios que presten por sí mismos.

Lo dicho me exonera de entrar al análisis de la verdadera naturaleza de este aumento del precio de los boletos que, no obstante el interés doctrinario que evidentemente posee, es una cuestión en absoluto ajena al recurso en examen.

Si desde el punto de vista del recurso que crea la ordenanza que se acaba de examinar se ha incurrido, como se afirmó, en inconstitucionalidad, no menos grave es la violación del texto constitucional en que incurre el decreto cuando determina en su artículo 10 el futuro régimen económico de la explotación del servicio a cargo de los permisionarios particulares.

Entiendo que ese régimen, que está caracterizado por la intervención total de los ingresos de la explotación por el Municipio y su distribución de acuerdo con normas predefinidas, implica la disposición por la autoridad de todas las entradas de los empresarios privados y la confiscación de sus ganancias, e interfiere, por consiguiente, en las normas de la Constitución que protegen el trabajo y el derecho a la propiedad.

La explotación del servicio de transporte puede ser hecha directamente por las autoridades municipales, o indirectamente delegando su titularidad en empresarios privados por medio de concesiones o permisos. En este último caso, es decir, si el Municipio decide no efectuar por sí mismo ese servicio público y sí delegarlo, quedan reservadas a la autoridad municipal todas las atribuciones y poderes reglamentarios que le permitirán velar por la correcta prestación del servicio para su adecuación a las necesidades de la población; y le queda además reservada, por disposición constitucional, la facultad de homologar las tarifas, o sea el precio de esos servicios a cargo de los permisionarios o concesionarios.

Entiendo que el Municipio, en lo que tiene que ver con el régimen económico de la explotación, no puede excederse de esta última facultad mencionada. Homologará o no las tarifas, pero una vez que estas se encuentren en vigencia, el producido de las mismas debe pertenecer, necesariamente y en forma íntegra, al concesionario o permisionario, por ser este el dueño de la economía del servicio.

El decreto no tiene en cuenta estos principios elementales que son, por lo demás, los que rigen toda la actividad privada comercial e industrial, y que se encuentran establecidos de manera clara en la Constitución de la República; por el contrario, asume facultades cuyo respaldo legal o constitucional no se advierte para apoderarse del ingreso total de la explotación y distribuirlo a su manera, entregando a los productores, a título de ganancia, una parte de esos ingresos.

Se ve con claridad que el dueño del derecho, el aportador del trabajo necesario para su circulación en el servicio y el responsable de sus riesgos, es desposeído de los frutos que su explotación provoca, en obvia contradicción con el beneficio que de ella debería obtener.

En el decreto, entonces, se pretende la contribución del esfuerzo particular a la prestación de los servicios, sin el reconocimiento del derecho a los concesionarios a la libre disponibilidad del producido de las tarifas. Aparte de que esto puede traducirse en la práctica en una notoria disminución del rendimiento y de la probada eficacia de la organización privada del transporte, rompe los ojos de que es asimismo violatoria de la protección constitucional al trabajo y a la propiedad.

El decreto delega en el Concejo Departamental de Montevideo facultades principalísimas en materia de transporte colectivo de pasajeros y le permite ejercerlas discrecionalmente. Esta delegación de facultades posee un aspecto de política de gobierno que no se encuentra en juego en el recurso y a cuyo examen considero que se debe penetrar. Si los Organos del Gobierno Departamental entienden que tal delegación puede ser eficaz y servir mejor los propósitos que se persiguen, esto es de su resorte ex-

clusivo y el Parlamento es ajeno a la cuestión; pero en cuanto esa delegación viole competencias de orden constitucional, como en algunos casos —no en todos— ocurre con el Decreto N.º 9.843, entonces sí cabe la intervención de la Asamblea General para volver las cosas a su justo lugar, devolviendo al Organismo competente las facultades de las que ha decidido desprenderse.

La parte final del artículo 7º del decreto, en cuanto comete al Concejo Departamental el estudio del régimen actual de las tarifas y su adaptación al sistema coordinado que aquél implanta, implica una delegación de facultades propias, a texto expreso, de la Junta Departamental, que ésta no sólo no debe sino que no puede delegar. Todas las atribuciones que el Gobierno Departamental posee en materia de homologación o establecimiento de tarifas, son de ejercicio exclusivo de la Junta y no pueden ser entregadas por ella a ningún otro órgano de ese Gobierno.

En este aspecto, señor Presidente, hay clara infracción de la Constitución, lo que se señala, sin perjuicio de admitir que es posible que pueda llegarse a una conclusión semejante con respecto a otras facultades, hasta ahora tradicionalmente ejercidas por las Juntas, y que el decreto pone, para el futuro, en manos de los Concejos: otorgar permisos, revocarlos, transferirlos, etcétera.

Entiendo, por consiguiente, que también bajo este punto de vista es inconstitucional la ordenanza municipal.

Además el texto del decreto establece un tratamiento distinto para la Administración Municipal de Transportes Colectivos de Montevideo —AMDET— y para las empresas privadas actual o posteriormente dedicadas a ese fin. Ese tratamiento es de total protección al organismo municipal; de acuerdo con la clara demostración que surge de los antecedentes analizados, AMDET verá reforzada su situación económica con el producido de la explotación a cargo de los empresarios privados.

En lo que tiene que ver con los ingresos que causará el aumento del boleto, resulta transparente el propósito del legislador municipal de lograr que la elevación de salarios del personal de AMDET sea, por lo menos de manera parcial, solventada con los recursos obtenidos por los coches particulares. El producido del tributo en estos últimos es muy superior a la suma que debe abonar a su personal, en tanto que en el Organismo municipal ocurre exactamente lo contrario, vale decir, que la equiparación de salarios con la industria privada demandará una financiación muy superior a lo que las unidades municipales obtendrán con el aumento del boleto.

Por consiguiente, parece claro que el excedente de los primeros va a cubrir las cantidades que faltan para AMDET. Si a esto se agrega que en el mecanismo de la ordenanza se obliga a los propietarios de ómnibus a verter los excedentes de la recaudación de sus coches que sobrepasen la ganancia determinada por aquella, y que uno de los destinos de esos excedentes será pagar primas a todo el personal del servicio —incluso al personal de AMDET—, se verá que también en este aspecto la economía particular apuntala a la economía del ente municipal.

Hay, pues, un distinto tratamiento entre ambos organismos, y en lo que tiene que ver con la organización actual del Municipio, no se adoptan medidas de ninguna naturaleza que tiendan a prevenir las pérdidas millonarias que anualmente arroja su giro.

Hay otro aspecto fundamental, señor Presidente, al cual los recurrentes no han puesto atención, pero que, a mi modo de ver, es muy importante. Puede una simple ordenanza o decreto municipal crear títulos ejecutivos al margen del Código de Procedimiento y de la ley? No; aquí se invaden los fueros del Poder Legislativo, que es el único que puede hacer modificación a las leyes y códigos de la República.

La ordenanza N.º 9843, en su artículo 7º, inciso segundo, y artículo 14, inciso tercero, crea un documento de tal carácter que rebasa sus potestades, al establecer un documento que el concesionario, si desea trabajar, debe aceptar, porque en el caso contrario no lo puede hacer, con lo que se coarta la libertad de trabajo del particular.

Muchas cosas pueden decirse aún, señor Presidente; las dirán otros con más brillo que yo, pero como ocupo un espacio legislativo, electo por el Partido Nacional que antes que todo defiende al pueblo en la paz, en las luchas civiles y, por encima de todo, en el derecho de libertad del hombre en su trabajo, en su iniciativa privada, sin ingerencias políticas, estatales o municipales que llegan a convertir al ser humano en una máquina egoísta, sin sentimientos, sin deseos de crear y progresar, que es lo necesario para el desarrollo económico e institucional de un país y de sus habitantes, vengo aquí, señor Presidente, defendiendo a los pobres y a los trabajadores, que, en número de más de cuatrocientas mil personas, viajan día a

día para trasladarse a su trabajo, para producir y sostener la economía de nuestro país.

Considero arreglado a derecho la apelación interpuesta, y la derogación de la ordenanza demostrará al pueblo que hay consecuencia y sentimiento ciudadano de libertad de trabajo y de amparo a la persona humana.

Nada más y muchas gracias.

(Aplausos en la Barra. — Campana de orden).

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor diputado Balay.

**SEÑOR BALAY.** — Señor Presidente: yo también podría comenzar mi breve exposición con las palabras pronunciadas por el señor diputado Pons, que dice que viene a acá a defender los derechos de los pobres y de los trabajadores. Nosotros también, señor Presidente, creemos en este planteamiento defender los derechos de los pobres, de los trabajadores y de los humildes, porque esa ha sido siempre la trayectoria del partido en cuyas filas milito: la defensa de los humildes.

En este planteamiento concreto que voy a hacer también, al defender o al propiciar una solución que está estrictamente dentro de los marcos constitucionales, me creo configurado o integrante de esa misma línea de actuación de defensa de los intereses colectivos, cual es la correcta aplicación de los mecanismos institucionales.

No voy a entrar en esta primera etapa al pronunciamiento de fondo que ha hecho el señor diputado Pons, sino que me voy a referir al punto que planteé hace un momento: la competencia de la Asamblea General para conocer en este recurso.

Tengo un antecedente fresco aquí sobre mi mesa, que es un dictamen del doctor Echegoyen en la apelación interpuesta por la minoría de la Junta Departamental de Artigas contra la resolución por la que se invalidan todos los actos de cualquier naturaleza que se hayan aprobado en el Cuerpo, en el cual se hicieron argumentos de naturaleza por lo menos similar, o se entró a un estudio más o menos similar a este que voy a entrar ahora.

Señor Presidente: el recurso que estudia hoy la Asamblea General ha sido interpuesto por más de mil ciudadanos inscritos en el Departamento de Montevideo contra una ordenanza del Gobierno y Administración Departamental de Montevideo que tiene todas las características de un acto, por lo menos en primera instancia, formalmente válido. Se trata de un recurso interpuesto de acuerdo con la Constitución, por violación de las normas objetivas básicas de nuestro régimen institucional.

En él se dice que la ordenanza que se impugna es inconstitucional e ilegal; que esas tachas, esos reproches que hacen a la ordenanza son motivo suficiente como para que la Asamblea General la invalide y anule, y le quite eficacia jurídica.

Examinados así, en una forma gruesa, en una primera apreciación, las características de este recurso nos revelan que formalmente el recurso está encuadrado dentro de los extremos constitucionales, es decir, que está interpuesto dentro de tiempo ante la Asamblea General — la cual lo está tratando en tiempo — y por más de mil ciudadanos inscritos en el Departamento.

No voy a entrar ahora en otro problema, que sería la discriminación de si ese recurso, formalmente interpuesto por más de mil ciudadanos inscritos, responde verdaderamente al interés de esos ciudadanos que firmaron la apelación, o se trata del interés personal, particular y directo de una empresa que lo propició y le dio la fuerza material y los medios necesarios para que culminara ante la Asamblea General. Me quiero referir, en esta primera parte de mi exposición, a la naturaleza del recurso que hoy trata la Asamblea General.

En el régimen constitucional de la República, tenemos — y me voy a repetir en unas apreciaciones sumarias que hice en el seno de la Comisión de Legislación de la Asamblea General — una cantidad, una variedad de recursos, de procedimiento o de mecanismos legales o jurídicos, para que cuando el derecho ha sido violado o menoscabado, sea restablecido, para que se produzca la subsanación de los entuertos o de las ilegalidades o de los actos inconstitucionales.

En este sentido, nuestro régimen institucional ha seguido una línea siempre progresiva, siempre de avance. En el régimen de 1930 nosotros teníamos una nítida, una pura separación de poderes, y los particulares, cuando habían sido lesionados en sus derechos, — dejando de lado las contiendas puramente privadas; lo que nos interesa ahora es el aspecto público en función de la actividad política — por la actividad del Poder Público, podían solamente recurrir ante la Justicia en su forma primaria, es decir, ante la Justicia que atendía los asuntos o las contiendas entre particulares.

Posteriormente, en virtud de la ley, hubo una pequeña especialización, creándose Juzgados especiales para atender las contiendas que tuvieran los particulares con el Estado: los Juzgados de Hacienda. Pero siempre se entendió que debido a la separación de Poderes, la Justicia no podía anular los actos administrativos ilegales o inconstitucionales. Del mismo modo, cuando el atropello o el ataque a los derechos individuales fuera por la ley, los órganos judiciales se inhibieron de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Como ejemplo, como noción de aplicación práctica, nos llegaba de Estados Unidos el famoso recurso o declaración de inconstitucionalidad de las leyes.

Fue recién en un movimiento constitucional más moderno y en razón de la implantación de doctrinas europeas, que en nuestro país, cuando se reformó la Constitución en 1934, se ampliaron algunas disposiciones que embrionariamente existían en la Constitución de 1918, creando una serie de mecanismos, que he buscado en la doctrina nacional para tener una noción de conjunto general, en su sistematización en nuestro Cuerpo jurídico fundamental, y he encontrado algo que siempre me atrajo y me gustó particularmente: un estudio que, siguiendo la doctrina italiana, hiciera el doctor Aparicio Méndez en la revista de Derecho Público y Privado. Y cito especialmente a este maestro del Derecho porque es uno de los Abogados consultores en el asunto que tenemos a estudio, sobre cuyo aspecto de fondo me reservo el derecho de intervenir en otra oportunidad, si la Asamblea entrara a su consideración.

En esta materia, señalaba el doctor Méndez que, en lo que yo indicaba como reparación o restauración del derecho, pueden distinguirse en la Constitución de 1934 una serie de procedimientos, una serie de mecanismos que son de carácter objetivo, vale decir, que no funcionan en virtud de los intereses particulares, sino que son medios de coordinación objetiva entre los organismos o poderes del Estado, que tienen un carácter institucional y que se hacen en función de la buena marcha del Estado, y que ulteriormente, al constituir o al propiciar una mejor marcha de la vida ética, van a beneficiar también al particular, porque lo que se corrige en una esfera general alivia al particular de impulsarlo él con su esfuerzo, con ese esfuerzo que mueve su acción ante el Poder Judicial propiamente dicho o ante los Organismos de lo Contencioso Administrativo.

Esos mecanismos de coordinación objetiva institucional tienen un gran alcance, un gran desarrollo en lo que se relaciona con la materia administrativa típica propiamente dicha, y en especial con algo que fue una innovación en la Constitución de 1917: los Entes Autónomos, después Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

La descentralización, al poner en manos de diversos Directorios o diversos organismos, poderes jurídicos de administración, medios de actuación, creó una dispersión, y en consecuencia obligó al constituyente o al legislador a crear los medios para que el Poder Ejecutivo, en un momento determinado, pudiera reasumir las riendas o la conducción del Estado para que no se produjera esa dispersión.

Siguiendo este procedimiento, que es de naturaleza administrativa, entramos en otros mecanismos en los cuales ya no juega propiamente el control administrativo que puede hacerse por la vía de la jerarquía, por la vía de la ingerencia directa del jerarca sobre la actividad del administrado, sino en el cual, por tratarse de organismos totalmente autónomos, ya no puede darse la relación jerárquica ni la ingerencia directa en la vida administrativa del ente.

Y nos encontramos, señor Presidente, con lo que este distinguido jurista calificaba de procedimientos quasi jurisdiccionales, aplicando un término latino, que traducido podría ser procedimiento de naturaleza similar o parecida al acto jurisdiccional.

Cuando se produce un conflicto en la elaboración del Presupuesto Municipal entre los organismos municipales y el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, nos encontramos con que hay allí un conflicto interadministrativo, un conflicto que no es entre particulares ni es un conflicto en el cual los particulares vayan a ventilar sus intereses personales o individuales, sino un conflicto que puede ser de competencia o que puede ser que un ente entiende que un acto es conveniente y otro entiende que es inconveniente o ilegal. Y para zanjar esa dificultad y para que la vida del Estado se mantenga siempre en los carriles que señala la buena administración, se crea ese procedimiento que es de naturaleza similar o parecida al mecanismo jurisdiccional, porque hay un organismo que se actúa de la resolución del otro, dos órganos en conflicto; hay un procedimiento; hay un proceso para que se ventile la contienda, y hay un órgano en conflicto; hay un procedimiento; hay un proceso para que se ventile la contienda.

y hay un órgano que falla, hay un órgano decisor de esa contienda.

Nosotros, en consecuencia, hemos ido al análisis de estos procedimientos, a buscar su naturaleza institucional, para poder decidir, para poder resolver en este conflicto con claridad de conceptos, a efectos de no tomar una resolución apresurada o poco meditada en un asunto de esta naturaleza. Porque la resolución que creo que la Asamblea debe dictar, no entrando en la consideración de este asunto es importante, dado que está en juego su propia competencia.

Yo he querido, señor Presidente, aclarar para mí lo que en primera instancia fueron mis dudas sobre la competencia de la Asamblea General, yendo a la discriminación, a la diferenciación de cuál era la naturaleza de las competencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que podemos situar en ese terreno subjetivo, en ese terreno de los recursos subjetivos que tiene el particular cuando se ve afectado en su interés directo o personal y legítimo, y de este otro mecanismo institucional que estamos tratando, cual es un procedimiento de naturaleza pautada a lo jurisdiccional, en el cual una cantidad de ciudadanos determinada, o un tercio de la Junta Departamental, agravándose en razón de la ilegalidad o inconstitucionalidad de una resolución del Concejo o de la Junta Departamental en bloque, puede venir al seno de la Asamblea General, la cual, por un procedimiento determinado, va a resolver en definitiva validando o invalidando el acto. Y nos encontramos con que en la Constitución de 1942, la cual no preveía, no establecía preceptivamente como lo estableció la presente Constitución, el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, estaban claramente configurados estos recursos y no había una posible confusión entre ellos. El individuo que se siente agraviado en su derecho o en su interés legítimo, personal o directo, podía recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, toda vez que una decisión de los entes administrativos lo lesionara o agravara en ese derecho o en ese interés legítimo.

Y por otra parte, teníamos el artículo concordante del 303, que era el artículo 294 de la Constitución de 1942, que establecía casi exactamente lo mismo en su letra que lo que establece este artículo. Sin embargo, señor Presidente, y me voy a referir casi exclusivamente al conflicto que se suscita o al problema que surge relacionado con estas disposiciones, a la variación, muy importante, a mi juicio fundamental; y que altera las circunstancias o la forma de plantearse la discusión: me voy a referir a la reforma de 1951.

La Constitución de 1942, insisto, planteaba toda esta serie de mecanismos: los mecanismos de coordinación del Poder Ejecutivo con los entes autónomos y los servicios descentralizados; los mecanismos institucionales de coordinación de los Gobiernos Departamentales con el órgano supremo o superior en materia legislativa o, en materia de contralor de constitucionalidad y de legalidad, que es el Poder Legislativo, y los mecanismos de control por medio del Tribunal de Cuentas, que también tienen una naturaleza muy especial y muy digna de estudio, en la que no voy a entrar en este momento, porque en la materia relacionada con el Gobierno Departamental, este sistema de apelaciones de un tercio de los ediles ante la Asamblea General o de 300 ciudadanos inscriptos que ese era el número que exigía la Constitución anterior— o la apelación por el Poder Ejecutivo, no estaba conectada para nada ni con la justicia ordinaria en el terreno constitucional, ni con el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Solamente en la Ley Orgánica del 28 de octubre de 1935, se había previsto una disposición que recordaba con gran sentido de la integración del Derecho el Presidente de nuestra Comisión, doctor Echegoyen: aquella disposición que, a instancias de los legisladores informantes o redactores de la Ley Orgánica de 1935, se había puesto en esa ley para coordinar, según se había dicho o se había explicado en esa oportunidad, el mecanismo del artículo 294, el mecanismo del recurso objetivo, con el recurso subjetivo. No tengo aquí el texto, pero más o menos establecía que la resolución de la Asamblea General sobre la apelación por cuestiones de ilegalidad o de inconstitucionalidad dejaría concluida la cuestión de legalidad. Vale decir, que si existía un particular que recurría ante la justicia contencioso-administrativa—no existía, pero hagamos el supuesto, que es útil— o ante la justicia ordinaria especializada, que no podía entrar a analizar ni a revocar el acto, pues esto no era posible, y el recurso planteado ante la Asamblea General, la ley decía que había que esperar la resolución de la Asamblea General para que ésta dejara concluida la cuestión de legalidad.

Se había coordinado así, con un sentido que me parece lógico y constructivo de ahorro, un sentido de economía procesal y de economía institucional, un recurso subjetivo

con el recurso objetivo, eventualmente movido por los titulares del mismo.

Pero indudablemente no interesa esta disposición; creo que está fuera de la discusión, porque las modificaciones de la Constitución son de tal entidad que producen el decaimiento, vale decir, la derogación, por la vía constitucional, de esta disposición, que aun así podía haber suscitado graves reparos de inconstitucional en el régimen anterior, porque era establecer, por la vía de la ley, por la vía de una norma jerárquicamente o institucionalmente inferior, una cosa que la norma superior no establecía.

Pero dejando de lado este problema, nosotros, señor Presidente, nos encontramos ahora, en la Constitución, con un mecanismo o una disposición de concatenación, de enlace, y me parece una disposición que posiblemente no se meditó en todos sus alcances las consecuencias que ella tendría en su aplicación. Es una disposición que veo que liga las competencias del órgano que entiende, por regla general o por la vía normal, en el recurso subjetivo contencioso-administrativo, con este recurso objetivo que estamos estudiando.

En seguida voy a aclarar lo que estoy diciendo.

Quiero insistir en esta clarificación de la naturaleza de estos recursos, de estos mecanismos que tiene el particular y el Estado mismo para canalizar su acción dentro de los marcos legales y constitucionales, para que no se me haga un reproche que se me hizo en el seno de la Comisión de Legislación, cual es el de que estos mecanismos o estos procedimientos son distintos.

Todo lo que dije, señor Presidente, lleva a una conclusión: que son distintos, diferenciados estos dos recursos, que yo, por imperativo constitucional, voy a unir ahora, a vincularlos y relacionarlos en su aplicación porque la Constitución me obliga a ello.

Creo, señor Presidente, que desde el punto de vista de una Asamblea General que quiere ejercer con amplitud su competencia en este recurso que estudiamos, en este recurso de coordinación de la actividad de los Municipios en materia de legalidad, la disposición que limita la competencia de la Asamblea General para conocer en todos los asuntos que no sean susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, es una disposición inconveniente para la Asamblea General; porque muchos señores legisladores, al tomar conocimiento de esta disposición en todo su verdadero alcance, dirán o pensarán que esta disposición cercena o limita enormemente su competencia para decidir como legisladores, en esta clase de recursos.

Este reproche no se me puede hacer a mí en carácter de intérprete. Yo bien traté de distinguir, de clarificar la naturaleza jurídica y el alcance de los recursos.

Quiero entrar ahora a determinar cuál es la competencia de la Asamblea General para conocer de esta clase de recursos, porque ya dije, señor Presidente, que se daban todos los elementos formales que en una primera instancia o en un primer planteamiento del problema son suficientes para decidir si la Asamblea es o no competente.

A medida que uno lee el artículo y se compenetra con la naturaleza del mismo y el alcance que se le dió en la reforma constitucional, en la Legislatura constituyente, nos damos cuenta que se ha limitado de manera muy importante, en un gran campo, la acción de la Asamblea General. Esta ya no es competencia para conocer en cualquier ilegalidad o en cualquier vicio de inconstitucionalidad cuando se trate de decretos de la Junta o de resoluciones del Concejo Departamental. No; hay que ver si esas resoluciones no son susceptibles de ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en cuyo caso no es competente la Asamblea General: es competente el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Y quería señalar hoy, cuando me referí a que eran diferenciados estos institutos—Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Asamblea General, en el ejercicio de estas competencias más o menos similares— en esencia, pero no en todos sus detalles, porque el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo tiene también una competencia, que es la de anular una norma o un decreto o una resolución que puede ser de carácter general, con efecto—como decimos los que tenemos tráfico con las cuestiones legales, "erga omnes", vale decir, con efecto general, con efecto similar al recurso de carácter objetivo, de carácter coordinador de la vida jurídica del Estado. Es decir, que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, tal cual está configurado en la Constitución de 1951, tiene muy distintas características del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que teníamos o que pudimos haber tenido por la Constitución de 1942. Es el artículo 311 el que da esas facultades de intervenir en la vida administrativa del Estado al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, ya no para satisfacer el interés particular de un sujeto de derecho agraviado o lesionado en aquellas facultades de que es titular, sino que cuando se trate de la buena administración, del interés de la buena administración o el interés de la regla

de derecho. la decisión del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo producirá efectos generales y absolutos.

Este artículo, señor Presidente, es nuevo, e indudablemente es un artículo que le quita, digamos así, pureza a la actividad del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, por la naturaleza misma de sus funciones, diferenciándolo y alejándolo mucho de los órganos de la justicia común.

Quiero recordar aquí que aun la Suprema Corte, el Superior Tribunal de Justicia de la República Oriental del Uruguay, cuando declara inconstitucional una ley lo hace con efecto para el caso concreto; no tiene efecto general como podrá tener, en un futuro, la resolución del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo si éste, en alguna oportunidad o de acuerdo a alguna corriente jurisprudencial decide hacer uso de esta competencia que tiene por el texto constitucional.

Voy a continuar, en consecuencia, con este análisis que estaba haciendo.

Considero previo, primario, estudiar detenida, concienzudamente cuál es el alcance de la competencia de la Asamblea General. Recordaba hace un momento, en esta apelación en la cual no hubo resolución de la Asamblea General, el informe del doctor Echegoyen, que para mí es sumamente ilustrativo por el respeto que me merece el doctor Echegoyen y porque además su consideración es digna de toda atención.

El propio doctor Echegoyen citaba aquí los antecedentes de la reforma constitucional, el informe de la Comisión Especial en mayoría de la Cámara de Representantes, en el cual decía que la introducción, de esta disposición en el texto constitucional tiende a armonizar estos recursos con la nueva organización del contencioso-administrativo, etcétera, texto que he podido leer también en la versión de la discusión de la Legislatura constituyente.

Señor Presidente: es evidente que hay que armonizar estas disposiciones, y cuando nosotros repasamos la discusión en la Cámara de Representantes, sobre todo donde estuvieron destacados juristas y en especial gente experta y avezada en materia constitucional, destacamos el propósito y el deseo de los constituyentes de adecuar este mecanismo objetivo con el mecanismo subjetivo, o más o menos subjetivo o primariamente subjetivo y secundariamente objetivo del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, a efectos de que no se produjera ulteriormente un conflicto de competencias, declarando la Asamblea General válido, o ilegal o inconstitucional un acto administrativo, un acto de los Gobiernos Departamentales, y posteriormente el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, declarándolo inválido o adoptando una resolución contradictoria con la de la Asamblea General.

Se vió ese problema y a los efectos de adecuar esa competencia se introdujo esta disposición.

También se puede hacer un reproche a esta tesis coordinadora o armonizadora de las disposiciones constitucionales que vengo a propiciar aquí, y es que este mecanismo quedaría vacío, jugando en el aire, sin competencia, de hecho, la Asamblea General, los legisladores no podrían nunca ejercer la competencia que un artículo les da con tantos detalles, con tanta precisión jurídica. Sin embargo, señor Presidente, distinguidos legisladores se plantearon esa duda y preguntaron cuándo y en qué momento se podría ejercer entonces la competencia de la Asamblea General, de qué naturaleza sería o para qué serviría eso. Y entonces se dijo que éste era un recurso de carácter político.

Evidentemente comparto ese criterio, aunque a mi juicio no se debe tomar la palabra "político" en el sentido limitado, sino en el sentido etimológico de "polis", de elemento social, vale decir, un recurso de carácter político en el sentido de marcha de la Administración o de dirección administrativa o legislativa. Y sin duda lo es: de modo que es un recurso objetivo.

Pero aún cuando todos los asuntos que sean susceptibles de ser conocidos o ser fallados por el Tribunal de lo Contencioso vayan a ese Tribunal y no puedan venir a la Asamblea General, esta no queda vacía de competencia. Todos estos asuntos políticos en los cuales el interés particular no puede moverse porque no tiene un interés directo, personal y legítimo, son de competencia de la Asamblea General.

Hemos tratado y resuelto muchos de esos asuntos —si no muchos por lo menos varios— en los cuales justamente estaba en juego el interés político, la buena, la correcta, la constitucional integración de los órganos departamentales y allí jugó la competencia de la Asamblea General fallando por ilegalidad o por inconstitucionalidad.

Yo señor Presidente, en una primera instancia planteé todas estas que primero fueron mis dudas. Pero después, con la lectura de la discusión de la Constitución de 1951 y frente a los argumentos esgrimidos en contrario —que no dieron satisfacción a mis dudas— me fui robusteciendo en la afirmación o en el criterio que ahora vengo a expresar a los señor legisladores. Vuelvo a recordar aquí

una cita de un austriaco que estuvo muy de moda y que hasta con cierto cinismo, con cierta crudeza —que por eso mismo levantaba siempre resistencia por parte de sus colegas—, al hacer sus planteamientos en materia jurídica —me refiero a Kelsen— decía en muchos de sus libros —no sé ahora en cuáles porque hace mucho que no frecuento la lectura de ese autor— que en la interpretación de las leyes muchas veces era un mito eso de que existían lagunas jurídicas. Lo que pasaba era que el intérprete frente a una situación que no le convenía o que le parecía injusta, sostenía que comparando la aplicación fría o silogística de la ley, se producía allí una consecuencia contraria a sus convicciones morales o propiamente jurídicas, y por tanto sostenía que había allí una laguna y que había que integrar el derecho, porque eso no estaba previsto: eso era una laguna jurídica.

Pues bien; no queremos proceder en esa forma: queremos formarnos la convicción, de acuerdo a la naturaleza de los mecanismos institucionales que estamos aplicando, y no queremos inventar una laguna jurídica en este caso. Creemos en el caso presente de la ordenanza promulgada por el Poder Ejecutivo Departamental, que se trata de un instrumento jurídico o de una resolución municipal perfecta y acabada desde el punto de vista formal. También creemos que esa resolución no es susceptible de impugnarse en la Asamblea General por más que se den los demás requisitos formales que acabamos de enumerar. Consideramos, por el contrario, que se trata de una resolución susceptible de ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y estimamos, si no estamos equivocados, que en ese sentido también los particulares lesionados por esa resolución se han dirigido ante ese Tribunal.

Pero eso tampoco deseo que sea tomado como un argumento, porque a mí no me interesa el problema de si los particulares se han presentado o no. Soy yo, como legislador y como miembro de un organismo que va a decidir soberanamente, quien de acuerdo con la Constitución debe discriminar, y no si se han presentado o no los señores A o B ante el Tribunal, sino si ese asunto es susceptible de ser fallado por el Tribunal. Para el caso de que sea así, de que sea susceptible de entrar en la órbita institucional de otro organismo, es que la Asamblea General debe declararse incompetente.

Señor Presidente: declaro, con honestidad, sin ningún "parti pris", sin ningún interés personal de ninguna especie, que de acuerdo a la letra de la Constitución, de acuerdo al espíritu que se evidencia al recorrer las páginas o al estudiar la discusión de la Constitución de 1951, esta disposición de la competencia de la Asamblea General no es una casualidad; no es de esa clase de disposiciones que a veces se injertan en los cuerpos legales por inadvertencia de los legisladores o sin darse cuenta de su verdadero alcance, o teniendo una finalidad distinta a la que propone el legislador, o en forma oscura o, por lo menos, poco clara. No, señor Presidente: entiendo que el Constituyente de 1951, claramente modificó la trayectoria que tenía este recurso desde 1934, y lo limitó, lo cercenó. Ahora, que desde el punto de vista de las consecuencias prácticas, en cuanto a la aplicación de esta disposición, nos encontremos que como legisladores ya no podremos entrar a la resolución de cantidad de asuntos, eso es otra cosa; pero lo cierto es que si aplicamos sensata, lógica y jurídicamente esta disposición, nos veremos inhibidos de entrar a la consideración de una gran cantidad de asuntos que posiblemente hubiera interés en entrar a considerar para resolverlos, pero que no podremos hacerlo.

Este que tenemos a estudio, señor Presidente, es un recurso que debe interponerse ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Yo declaro honestamente, y sin perjuicio de toda esta exposición mía voy a insistir y voy a aclarar, —porque posiblemente se hagan algunas objeciones que en este momento no puedo prever— que cuando fui al seno de la Comisión de Legislación de la Asamblea General, primeramente se me planteó la duda —lo mismo que a mi compañero de Comisión el señor senador Bayley— de si era competente la Asamblea General. Pero frente a la carencia o falta de argumentos en el sentido contrario —no nos hacían ninguna fuerza los argumentos que se dieron y que posiblemente se den y en los cuales, si se nos permite y es posible, podremos entrar— nos fuimos robusteciendo con el estudio de los textos, con el estudio de la naturaleza jurídica de los procedimientos que estamos tratando y con el examen de la discusión en la Constituyente, que, cuando se trata, como en el caso presente, de un acto jurídico que lesiona un interés legítimo, personal y directo o que eventualmente puede lesionarlo, los interesados deben recurrir o pueden tener o tienen abierta la vía del Tribunal y en este caso la Asamblea debe declararse incompetente.

Estos fundamentos, sin perjuicio de los que en momentos posteriores del debate pueda dar, son los que me inclinaron a fundar lo que en principio fué una cuestión de orden

y luego derivó en un debate un poco confuso, pero que en el fondo y en sustancia consiste en que la Asamblea General declare que no tiene competencia para entrar en el conocimiento de este asunto.

Re terminado.

(¡Muy bien!).

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR BATLLE PACHECO.** — Señor Presidente: no considero bien fundada la argumentación que se hace para demostrar que el Parlamento no debe tener intervención en este asunto.

¿En qué se la funda? En el artículo 303 de la Constitución, que establece que se podrán tratar aquellos asuntos que no sean susceptibles de ser considerados por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. La Constitución establece después cuáles son los asuntos que corresponden a este último Tribunal, y en su artículo 309 dice que "La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, o violado o lesionado por el acto administrativo".

¿Qué significa esto? Que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo actúa cuando un interés particular de un solo ciudadano o de muchos, se considera lesionado por una disposición administrativa. Pero, ¿es que acaso estamos frente a un interés particular? De ninguna manera: estamos frente a un interés general. El hecho de que mil ciudadanos lo hayan considerado como propio, prueba bien a las claras que no es ya un asunto limitado al interés particular, lesionado o no por las medidas de un organismo administrativo. Es un asunto que interesa a la ciudad; por ende, es un asunto de interés público, y entonces corresponde a la Asamblea General ver si el asunto se ha movido dentro de la Constitución y de las leyes.

Se me dirá: "¿Y si después el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo trata este asunto y resuelve que no ha sido inconstitucional ni ilegal?" Creo que esa posición es totalmente falsa. Una vez que la Asamblea diga que es inconstitucional o ilegal, ya el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo no lo puede tratar, porque no es órgano de la misma jerarquía que la Asamblea. Podría haber un conflicto entre la Suprema Corte de Justicia y la Asamblea General por la aplicación de la ley; pero de ninguna manera puede haberlo entre el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y la Asamblea General, porque entre las facultades del primero no está la de discutir las resoluciones que pueda tomar la segunda.

Me parece que esto es claro y que, por lo tanto, no debemos tomar una medida basada en una interpretación que haría fácil sustraer a la consideración de la Asamblea, a cada momento, asuntos de interés público. Bastaría con incluir un artículo que determinara que algo corresponde al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, para que la Asamblea se vea privada de actuar. Y me parece que la importancia que tiene la Asamblea como custodia del cumplimiento de la Constitución y de la ley no puede estar supeditada a las disposiciones de un Cuerpo de menor jerarquía.

Es lo que tenía que decir.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor senador.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Este problema, señor Presidente, se planteó en la Comisión de Legislación. Fué motivo allí de un examen cuidadoso. La posición de los impugnantes de la competencia de la Asamblea General fué primitivamente de incertidumbre, o planteada, por lo menos, con cierta timidez. Esa posición fué afirmándose hasta adquirir los caracteres radicales que presenta en este debate.

En la Comisión se señalaron, además, otras posibilidades de impugnación a cargo de los mismos opositores a la competencia de la Asamblea, en otro ensayo de penetración para el aniquilamiento del artículo 303.

Estas consideraciones son puramente objetivas, y ocioso es decir que en ninguna de estas expresiones hay desmedro de la consideración debida en el orden personal a mis distinguidos contrincantes.

Se dijo, al principio, que esta ordenanza municipal no podía ser motivo de conocimiento y decisión, en cuanto a su legalidad, por la Asamblea General, porque el artículo 303 de la Constitución se refería a los decretos de la Junta Departamental y a las resoluciones del Concejo, contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, etc., y que, en dichos decretos, no estaba comprendido el caso en examen, puesto que aquí se trataba de un decreto de la Junta Departamental promulgado por el Concejo, es decir, un acto complejo en el que concurrían ambas voluntades, y aquel texto mencionaba actos individuales o propios de cada uno de esos órganos.

En consecuencia, según esa letra, no cabría competencia de la Asamblea General.

Tuve la preocupación de exponer, en la misma Comisión, los antecedentes demostrativos de que esa impugnación carecía de fundamento. No tengo la certeza de que no pueda reaparecer en Sala; de manera que repetiré aquí lo que dije en la Comisión.

El artículo 303 de la Constitución dice lo que acabó de expresar respecto de los decretos de la Junta Departamental, pero no es menos cierto que el artículo 281 de nuestra Carta dice que los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Concejo Departamental. Por consiguiente, para que el decreto de la Junta tenga eficacia, imperio, es indispensable la voluntad conforme del Concejo, o, naturalmente, en caso de observación por parte de este último, la ulterior ratificación por la Junta, según está previsto en la Constitución.

Cuando se habla de decretos de la Junta que pueden ser impugnados ante la Asamblea General, dentro del propio mecanismo de la Constitución, deben ser, claro está, decretos con imperio, con fuerza de tales, y, como esa condición no la pueden obtener si no concurre la voluntad del Concejo, es preciso concluir que, cuando el Constituyente, en esa disposición, habla de los decretos de la Junta Departamental que pueden ser apelados, se refiere a los que tiene el imperio que le da la concurrencia de tal voluntad del Concejo y, por ende, comprende casos como el de la Ordenanza a estudio.

Esa observación se fundaba en que, en otras partes del texto constitucional, se alude con distinta letra a esos decretos. Así, por ejemplo, en el 260, se habla de los "decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley"; etc. En el 299, se alude también a los "decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos"; y el 300 establece que el Consejo Nacional de Gobierno podrá apelar ante la Asamblea General, "los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos".

Esta diferencia de léxico en la mención de dichas decisiones, ha podido dar fundamento, pero sólo aparente, a esa tesis.

En el mismo artículo 303 impugnado, se da un nuevo motivo para reforzar el criterio que sustento, desde que se dice, al final del primer inciso: "En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo".

Ahora bien: los decretos que aumentan las rentas departamentales no pueden ser disposiciones aisladas de las Juntas, puesto que dentro del mecanismo legal, los decretos de las Juntas que establezcan tal aumento de rentas, necesariamente exigen la concurrencia de la promulgación del Concejo Departamental. En consecuencia, este artículo se está refiriendo también a los decretos del Gobierno Departamental.

Cabé aducir, para mejor información en este asunto, que el léxico, en el orden municipal —ya expuse estas referencias en la Comisión, pero tengo el deber de hacerlo ante la Asamblea, para que mi pensamiento quede nitidamente explicado— ha sido muy desajustado, a través de la historia de sus instituciones, telón de fondo, —diré— que puede servir para percibir con exactitud el alcance de los conceptos ahora empleados en los textos.

Se advierte la diversidad en el Reglamento de la Junta E. Administrativa de Montevideo, de 4 de diciembre de 1891, y en la ley de creación de la Intendencia, de diciembre de 1908 y en la ley de Juntas de 1909.

En el artículo 134 de la Constitución de 1917, se decía: "Las decisiones de las Asambleas Representativas creando o modificando impuestos podrán ser apeladas ante el Poder Legislativo".

No eran decisiones aisladas de dichas Asambleas, puesto que las decisiones que crearan o modificaran impuestos, existiendo Gobiernos Locales, debían dictarse, naturalmente, con la voluntad conforme del Concejo respectivo. Sin embargo, el constituyente las llamaba "decisiones de las Asambleas Representativas". La propia ley de 23 de diciembre de 1919, al hablar de este género de decretos, establecía, en su artículo 23, que se encabezarían con la fórmula: "La Asamblea Representativa de..." —aquí se pondría el nombre del Departamento— "decreta": Vale decir que, si la objeción tuviera fundamento, también se habría podido decir entonces que no existían decretos de las Asambleas Representativas en esa materia. Pero había que armonizarlas con el contexto y darle a ese giro, simplemente, el contenido de un modo de referirse a tales decretos.

El constituyente o el legislador no siempre son de una

rigurosa exactitud en los medios de indicación o en las referencias que hacen, y suele ser forzoso atender al propósito, a los motivos de orden lógico que concurren para extraer su voluntad real por desajuste del léxico empleado.

En la Constitución de 1917, con rigorismo literal, debió decirse: "Los decretos de los Gobiernos Locales". Sin embargo, se dijo otra cosa, pero a nadie se le ocurrió que el texto no comprendía aquellos en los que concurren la voluntad de ambos órganos colegisladores, en el orden departamental.

En la misma ley de diciembre de 1919, se decía, en el artículo 79: "Los decretos de la Asamblea Representativa creando o modificando impuestos podrán ser apelados... etc". No podían existir estos decretos sin la concurrencia del Concejo Departamental, y siendo así, la misma ley que establecía la intervención de los Concejos, para que esos decretos tuvieran validez o eficacia, no habrá podido razonablemente hablar de decretos de la Asamblea Representativa, sino de decretos del Gobierno Local.

Nunca se hizo hincapié en ello, porque era inequívoca la intención de referirse a la voluntad del gobierno departamental, y era puramente formal —diremos así— la alusión a los decretos de las Asambleas Representativas, teniendo presente que, en su presentación como decreto, aparecía como voluntad de tal Asamblea, aunque concurren el perfeccionamiento ulterior de la voluntad del Concejo.

El artículo 80 de la misma ley decía: "Dentro del plazo establecido en el artículo anterior y con el mismo efecto suspensivo, el Consejo Nacional podrá apelar ante el Poder Legislativo de los decretos de la Asamblea o actos del Concejo de Administración que fueren contrarios a la Constitución o a las leyes, señalando concretamente el precepto constitucional o legal violado y en qué consiste la violación".

Caben, respecto de este artículo, las mismas observaciones que acabo de formular.

Posteriormente a la vigencia de la Constitución de 1917, estos decretos han seguido apareciendo como decretos de la Junta, con la indicación al pie, de su promulgación por el órgano ejecutivo departamental: la Intendencia, antes, el Concejo ahora. Y tanto es así, que la propia ordenanza motivo de examen por esta Asamblea, dice también que es la Junta Departamental la que decreta. En la Carta de 1934, se procuró ajustar dicho léxico, y la ley de 28 de octubre de 1935, tuvo presente ese propósito, según resulta del dictamen respectivo de la Comisión de Constitución del Senado.

La misma Ley Orgánica de 1935 estableció, en su artículo 68, que "los decretos y resoluciones de las Juntas y las resoluciones y reglamentos de los Intendentes, contrarios a la Constitución y a las leyes, serán apelables para ante la Cámara de Representantes, por un tercio de la Junta, etc...".

Aquí también se puede observar la misma separación aparente en cuanto a las decisiones de cada órgano.

Cuando se habla, pues, de decretos de las Juntas, deben entenderse comprendidos también los decretos de las Juntas con voluntad conforme del Concejo. Por consiguiente, y para no hacer más cargosa esta consideración del primer punto, respecto del léxico, concluyo que la objeción apuntada primitivamente en el seno de la Comisión, carecía de fundamento.

El otro planteo es el que acabamos de oír, que tuve el gusto de tomar en cuenta en la Comisión de Legislación. No lo creo con eficacia bastante para modificar las conclusiones que sostenemos en cuanto a la plenitud de competencia de este Cuerpo, punto que paso a examinar.

Se hizo alusión al artículo 260 de la Constitución, que establece que "los decretos de los Gobiernos Departamentales, que tengan fuerza de ley en su jurisdicción, podrán también ser declarados inconstitucionales, con sujeción a lo establecido en los artículos anteriores", y se aludió a la posible interpretación según la cual, cuando se objetara la inconstitucionalidad de un decreto el órgano competente debía ser la Suprema Corte de Justicia y no la Asamblea General. Hay aquí una ordenanza; se objeta la inconstitucionalidad; entonces, se decía, pertenece a la competencia de la Suprema Corte.

Bien. Con esta interpretación, llegábamos a esta conclusión, que es un ilogismo total: el recurso, o la defensa, acción o excepción de inconstitucionalidad que se puede entablar ante o para ante la Suprema Corte de Justicia, por definición, no tiene más alcance que el del asunto en que se promueve; vale decir, que no puede ser invocado por quien no haya sido parte en los procedimientos judiciales en que se planteó. Le aprovecha a él exclusivamente. Se llegaba, así, al absurdo de entender que debía declinar la competencia de la Asamblea General, cuyo fallo es de carácter universal, "erga omnes", como recordaba

muy bien el señor diputado Balay, sustituyendo por tal interpretación un mecanismo de defensa que podía conducir a la anulación por inconstitucionalidad, de un decreto de la Junta, por un recurso en virtud del cual el fallo no podía tener eficiencia sino en los limitados alcances del interés invocado en los procedimientos judiciales respectivos. El resto de la población, los que no hubieran impugnado el decreto por vía del "interés directo personal y legítimo", no podían, absolutamente, invocar las resultancias del fallo dictado por la Corte.

En consecuencia, no se substituía un recurso con un alcance determinado, por otro con igual alcance y la única diferencia del órgano competente para entender en uno o en otro, sino que se reemplazaba un recurso con un incuestionable alcance de interés público, en cuanto a la universalidad de sus efectos, por otro que no tenía sino la limitada resultancia de aprovechar exclusivamente a aquel que lo intentaba.

Este paralelo o enfrentamiento de los dos recursos no necesita mayores comentarios para demostrar la imposibilidad de la tesis. Agrego, como argumento, concurrente un principio general que impregna toda esta exposición, y que creo debe tenerse capitalmente en cuenta en el examen por esta Asamblea: que estas interpretaciones que critico, —después lo aplicaremos al otro aspecto que queda por estudiar— el de lo contencioso administrativo— tienen el defecto de colocar por encima del interés colectivo, el interés individual.

No creo que, a esta altura de nuestra civilización jurídica se pueda defender como principio, como directiva del intérprete, que, frente al interés colectivo, a la defensa objetiva de la Carta fundamental, y de las leyes, a los recursos que muevan los titulares del derecho público, que para el caso son el tercio de ediles, o el número de mil inscriptos que establece el artículo 303 de la Constitución; frente a esos titulares que mueven recursos impersonales, que son desinteresados desde el punto de vista patrimonial, o de sus bienes o derechos, frente a todo ello, digo, pueda el intérprete llegar a la conclusión de que debe prevalecer el interés del individuo que pueda moverse, en el orden personal y directo, invocando una lesión ante la Suprema Corte de Justicia.

(¡Muy bien!).

—Esta consideración no es puramente práctica, es una consideración de principios, y entiendo perfectamente legítima su invocación, porque no puedo creer que, en el espíritu de ningún constituyente, haya podido existir la más remota idea de que la nueva Carta estaba de tal modo conformada, que, en algunos casos, colocaba por encima de los intereses colectivos, el interés de los individuos.

(¡Muy bien! — Apoyados).

SEÑOR BALAY. — ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ECHEGOYEN. — Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señor legislador.

SEÑOR BALAY. — Pido excusas al señor legislador por interrumpirlo en su disertación, que es para mí tan interesante y tan importante aún desde el punto de vista formativo, pero la afirmación que hace el señor legislador — que tuvo la delicadeza de no interrumpirme cuando hice uso de la palabra, aunque posiblemente di motivo para ello — me obliga a sentar aquí mi discrepancia o mi impresión aunque sea personal o subjetiva, respecto a las palabras del señor legislador.

Dice el señor legislador Echegoyen que se trataría de una interpretación o de un principio interpretativo de retroceso porque pondría el interés particular por encima del interés general.

He esbozado en mi disertación este punto. He tratado de aclarar mi posición con respecto a esto, que no creo que sea así, en primer lugar porque si así fuera, señor legislador, si así estuviéramos yendo para atrás en materia constitucional, no seríamos nosotros los intérpretes, sería la Constitución.

Traté de señalar bien la naturaleza jurídica distinta de los dos mecanismos de reparación del derecho cuando ha sido lesionado. Si la Constitución, con conciencia de lo que hacía, pero por error o por una consideración distinta del problema, a la que hace el señor legislador Echegoyen, fue para atrás, ese es otro problema. Si se hizo un corte en las competencias que tenía la Asamblea General con anterioridad a 1951 y se dió un "hachazo" a esas competencias, no es culpa de los intérpretes. Por eso cité a Kelsen, que con un poco de cinismo manifestaba que el intérprete no debe inventar las lagunas cuando no existen, y que debe lógicamente, dentro de las limitaciones del intérprete — y en este caso del legislador que habla — interpretar y cumplir la Constitución dentro de lo que la lógica jurídica impone y lo que la trayectoria institucional le obliga.

Por otra parte, también puede desdoblarse e invertirse el argumento; ese argumento de finalidades, ese argumento de principios sirve también para decir: la Constitución ha avanzado despojando a la competencia de la Asamblea General de todo aquello que no sea objetivo y general y dejando lo subjetivo para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Recuerdo una intervención que me gustó mucho de un señor legislador, que dijo que a veces nos dejábamos impresionar por los grandes rufufos, por los grandes nombres de "justicia", "derechos" y "principios", y eso nos llevaba a hacer interpretaciones que no eran las que, como las que propicio en este caso, se adecuaban a la letra y al espíritu de la Constitución.

Muchas gracias.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Decía, señor Presidente, que no creía que hubiera estado en el espíritu de ningún constituyente, ni hay el más leve rastro de que haya podido ser así, el propósito de retroceder, en esa materia principista, colocando en un plano de preferencia el interés individual sobre el interés general; y siendo ese un viejo principio, que puede decirse constituye parte integrante de nuestra propia vocación democrática, y estando nuestra legislación, todo nuestro derecho, inspirado en la idea de que el interés colectivo, las razones de orden general, de orden público, han de prevalecer siempre sobre las de interés individual, no puede pensarse que el constituyente hubiera realizado un vuelco tan trascendental, hasta el punto de afiliarse a una tesis que significaría un regreso inexplicable de un principio más que secular, por lo menos sin que algún rastro del cambio quedara en las deliberaciones constituyentes, porque una transformación tan fundamental de conceptos no puede hacerse sin un intento, si quiera, de justificación.

Agregaré, siguiendo una vieja directiva de Jeze, que siempre tengo presente en estos problemas de hermenéutica, que, cuando una interpretación conduce a efectos perturbadores de intereses fundamentales, hay que concluir que la interpretación es equivocada, porque el derecho, por muy devoto que sea el culto que se tenga por su forma de expresión, nunca puede autorizar una conclusión de tal modo contraindicada a la luz de los principios cardinales como es, en el caso, situar el interés del individuo como dominante, frente al interés colectivo.

(¡Muy bien!)

El constituyente debe procurar siempre, como todo legislador, la paz jurídica, la paz social y la paz política.

(¡Muy bien!)

—Ahora, quedaría por examinar...

**SEÑOR GRAUERT.** — ¿Me permite una interrupción si es que va a pasar a otro punto, si es que terminó este punto?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — ¿A qué punto se refiere?

**SEÑOR GRAUERT.** — Justamente al que usted se estaba refiriendo: la interpretación que pretende dar supremacía a los intereses particulares sobre los intereses generales o colectivos.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Con mucho gusto.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede interrumpir el señor legislador.

**SEÑOR GRAUERT.** — Yo no me afilio a la tesis de los que consideran que el constituyente haya sufrido ese proceso de retroceso, justamente subordinado el interés colectivo o general al interés individual. No creo que sea esa la interpretación. Me afirmo en que la evolución hacia una mayor racionalización de las constituciones y en búsqueda de la perfección cada vez mayor del llamado "Estado de Derecho", se ha deseado sin duda alguna a través de la historia de nuestra propia constitución también, ir despojando, por su naturaleza de órgano político...

(Muy bien)

...al Parlamento, de funciones jurisdiccionales.

(Apoyados).

—Y así es que frente a la vieja y clásica división de Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se ha ido creando en el Estado moderno una serie de órganos que actúan, podría decirse, por su jerarquización en las propias Constituciones de la República como otros poderes: primero legalizando la Corte Electoral en 1924 —haciendo historia en nuestro país— y después, constitucionalizándola como órgano jurisdiccional electoral. Después, creando dentro de la esfera que constitucionalmente también determina sus funciones, el Tribunal de Cuentas. Y, por último, creando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encauzando cada vez más hacia órganos típicamente jurisdiccionales, aislándolos en todo lo posible de la intervención política, para salvaguardar los intereses particulares de los ciudadanos y también los intereses generales.

Cuando estudiamos esta reforma constitucional —y yo recuerdo haber intervenido en varios cambios de ideas con respecto a la redacción de este capítulo con el lamenta-

blemente fallecido amigo doctor Alvaro Vargas— mucho conversamos sobre la naturaleza de este contencioso que íbamos a establecer.

Recuerdo que hubo entre algunos compañeros, quienes pretendieron seguir la orientación clásica de los ingleses, es decir, dejar supeditado a la justicia ordinaria justamente este aspecto jurisdiccional, y aún negándose a que ese órgano jurisdiccional tuviera facultades de anular el acto administrativo, dejándole simplemente la facultad de indemnizar el daño causado por la vía civil. Otros, creo que los más, porque en definitiva fué la idea triunfante en este capítulo, nos inclinamos por la organización del contencioso francés, el contencioso sustantivo, como le llama Hauriou creando una magistratura especial, un órgano jurisdiccional que por su naturaleza es especial y separado totalmente del otro poder jurisdiccional del estado, del Poder Judicial propiamente dicho y dándole, eso sí, facultades sustantivas para poder intervenir en proceso, anulando el acto administrativo con aquella extensión de universalidad o de "erga omnes", como se ha dicho aquí y no teniendo efecto individual para las partes en litigio solamente.

Creo que la interpretación no es que el Constituyente haya deseado subvertir los valores generales por los valores individuales, sino que lo que ha deseado es limitar las potestades jurisdiccionales de un organismo político, como indudablemente lo es el Parlamento. Y le ha ido sustrayendo casos en que, de acuerdo con las Constituciones anteriores tenía las facultades constitucionales para intervenir. ¿cuáles fueron, de acuerdo con este Estado de Derecho, los casos que eliminó de las facultades jurisdiccionales de la Asamblea? ¿Aquellos que afectaban solamente intereses individuales? No; eliminó es verdad, algunos que pudieran afectar intereses individuales, pero eliminó también aquellos que podían o podrían afectar o lesionar intereses generales por desviación o por exceso de poder, llegando hasta la anulación del acto mismo.

Recuerdo que en el artículo 309, en el primer apartado, se marcaba esta intención claramente al decir que "el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la administración en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder". Y cuando se refiere a los actos administrativos dictados por la Administración en ejecución de sus naturales funciones, excluye en el artículo 303, al referirse a "los decretos de Juntas Departamentales, resoluciones de Concejos Departamentales contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles, de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo". Los que no son susceptibles de tener entrada o quedarles expedito el camino a los interesados por la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esos sí se recurren ante la Asamblea General. Pero aquellos otros actos administrativos que ya no sólo podrían afectar un interés individual sino incluso un interés general, deberían ir por la vía del Contencioso Administrativo, cuando hubiera lesión de intereses o lesión de derecho.

Yo me pregunto, si no se discriminara con claridad estas dos vías, ¿qué ocurriría mañana, sin ir más lejos y sin entrar en el aspecto de fondo de esta ordenanza, si hoy la Asamblea General resolviera que la ordenanza debe quedar en vigencia por no ser contraria a las leyes ni a la Constitución? Nada impediría que siguiera su trámite normal el recurso planteado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como en este caso que ha sido planteado por las dos vías, resolviera en definitiva por sentencia, de que es contraria a la ley o a la Constitución, y que el Poder Comunal de Montevideo, con exceso o con desviación de poder, ha lesionado esos intereses y decreta la anulación —"ergo omnes"— de esta ordenanza, ¿qué conflicto de poderes tendríamos? ¿Cuál sería el organismo constitucional llamado a resolver el conflicto planteado? ¿Es que acaso la empresa CUTCSA, para hablar con toda claridad, si en la noche de hoy tuvieran mayoría quienes sostienen la legalidad de esta ordenanza, va a desistir por eso del recurso que tiene planteado ante el Tribunal de lo Contencioso? Seguramente que no. Y si al final resultara que este organismo jurisdiccional entendiera lo contrario que nosotros, ¿quién estaría llamado a poner orden en esta segura interferencia que se hubiera producido?

Y si, al revés, ocurriera que hoy la mayoría resolviera que esta ordenanza es ilegal y suponiendo que CUTCSA no desistiera de su recurso —cosa que no ocurriría— y el Tribunal llegara a las consecuencias contrarias, nuevamente tendríamos el conflicto planteado, sin saber desde el punto de vista de nuestro ordenamiento institucional, cuál sería el órgano llamado para resolver en definitiva.

Por eso, doctor Echegoyen —y termino en seguida—,

yo decía que no me afiliaba a la otra tesis que usted estaba criticando en este último aspecto de su disertación, sobre la supeditación de los intereses generales a los intereses individuales, sino que yo creía que el verdadero ordenamiento institucional era el de despojar —si quiere llamársele así, con toda crudeza— al organismo y de carácter y de integración política, que es el Parlamento, de sus facultades como órgano jurisdiccional, para dárselas a un órgano jurisdiccional típico, que actúa en una determinada materia, con facultades específicamente determinadas en la Constitución, y que puede responder, movido por el interés de uno o de la generalidad de los individuos, dando como resultancia, en definitiva, por las consecuencias que trajera aparejada, la anulación de derechos que a veces pueden tocar a un interesado, pero muchas otras veces pueden afectar a la generalidad de los interesados.

No quiero entrar en repeticiones —y le agradezco al doctor Echegoyen esta interrupción—, pero yo, que siempre lo escucho con tanto gusto y, sobre todo, en esta materia, en la que tanto aprendemos escuchándolo, quiero hacer hincapié en este aspecto de la cuestión, que es el que me ha decidido a mí y no a otro. Me parece que han sido magníficos la disertación y el trabajo del señor diputado Balay en lo referente al aspecto general, pero confieso que en mi opinión ha influido fundamentalmente, esta característica de desarrollo constitucional, que nos ha llevado a crear un órgano de una naturaleza especial con facultades especiales, quitándole al Poder Legislativo facultades jurisdiccionales que se le reconocían en anteriores Constituciones.

Muchas gracias.

(¡Muy bien!)

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Yo me estaba ocupando de una de las objeciones, la referente a que había un artículo en la Constitución que disponía que, respecto de ordenanzas como ésta, cabía el recurso de inconstitucionalidad, y había subrayado que ese recurso —llamémosle, prácticamente, así, aunque el término no sea totalmente ajustado— de inconstitucionalidad, responde, por definición, a un interés individual, y no tiene alcance sino en el juicio en que aparece invocado; por consiguiente, no definiendo la Constitución objetivamente, sino en cuanto la norma impugnada pueda haber lesionado un interés personal, directo y legítimo; pero el resto de la sociedad queda indefenso. Si prosperara esa tesis, quedaría indefenso —repito— porque si el fallo no puede ser invocado útilmente nada más que por aquel a quien le interesa personalmente, en el procedimiento judicial respectivo, claro está que, como defensa de la Constitución, desde el punto de vista del interés público, carece de toda eficacia.

Entonces, no podría decirse que hubo un simple trasporte de competencia de la Asamblea General a la Suprema Corte, en ese aspecto, porque no son equivalentes. (Interrupciones).

Sus consecuencias son diferentes y no ampara a la población: no tiene carácter universal.

(Apoyados).

Con ese motivo, invocaba entonces la quiebra del principio, que suponía esa supremacía del interés individual sobre el colectivo.

Queda por analizar la parte referente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Lo que ha dicho elocuentemente, en su exposición muy ilustrada, muy equilibrada y útil, el señor diputado Balay, acerca de que el artículo 303 excluye los asuntos respecto de los cuales cabe el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es incuestionable en cuanto a que el texto lo dice así; que la excepción está establecida de modo inequívoco; y sigo creyendo que estaba perfectamente invocado en el dictamen de la Comisión de Legislación de la Asamblea, a que el señor diputado Balay, se ha referido. Los problemas que pueden presentarse son otros.

Una ordenanza puede contener disposiciones que interesen al particular, y disposiciones que interesen a la sociedad o a la población en general. Una ordenanza compleja como ésta, en la que se tocan temas distintos, puede contener normas que ataquen la ley o que vayan contra la Constitución, de un modo general o impersonal, y otras que lesionen un interés personal, directo y legítimo —presupuesto o extremo requerido para entablar demandas de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo—. ¿Es acaso razonable, puede reputarse armónico como interpretación del contexto, que la sola circunstancia de que haya una disposición que afecte a un particular y que pueda mover la acción correspondiente ante dicho Tribunal, a la luz de su interés, pueda bastar para aniquilar el derecho de la población o de los ediles, a mover la apelación consiguiente ante la Asamblea General, cuando la disposición que afecta a esa población, es distinta de aquella que puede determinar la promoción de la acción de nulidad del particular?

¿Qué razón hay para sacrificar al interés individual, un recurso tan fundamental como el que se dirige a la tutela objetiva de la legalidad, si es otra la disposición por la cual se siente agravada la población y mueve la apelación consiguiente por el tercio de los ediles o por los mil ciudadanos inscriptos?

(¡Muy bien!)

—¿En virtud de qué raciocinio debe ser sacrificado el interés colectivo, cuando la disposición a invocar no es aquella que mueve la acción del particular, sino otra? Sería una aberración, una especie de honor gratuito y sin razón dispensado al interés personal, como en el caso que ya comenté, del recurso de inconstitucionalidad; y en este caso más criticable...

**SEÑOR UBILLOS.** — Pido la palabra para una cuestión de orden.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor diputado.

**SEÑOR UBILLOS.** — Señor Presidente: solicito que se me informe a qué hora vence el término de la sesión.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — A las 22 y 33.

**SEÑOR UBILLOS.** — Hago moción para que se prorrogue la sesión hasta terminar con este asunto.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Se va a votar la moción del señor diputado Ubillos.

(Se vota: 65 en 69. — Afirmativa).

Puede continuar el señor senador Echegoyen.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Decía, señor Presidente, que sería un sacrificio gratuito del interés general al interés individual, cuando las disposiciones a invocar para uno y otro caso, son distintas.

No podría decirse con justeza que, en ese caso, el asunto es susceptible de demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y por ello la Ordenanza ha de recurrirse ante la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando, contentiendo ella tópicos diferentes, la disposición que el particular va a invocar para promover su demanda, no es la que los mil ciudadanos inscriptos o el tercio de los ediles puedan indicar a los efectos de la apelación ante la Asamblea. En consecuencia, no estaríamos, en ese caso, dentro del texto literal del artículo 303 de la Constitución.

Puede ocurrir —y es el caso más difícil, pero no insoluble— que una misma disposición contenga posibilidad de agravio para los dos órdenes de intereses; que un texto, al mismo tiempo que es agravante de la ley, en el orden personal, también lo sea para el interés general. Sería el caso, por ejemplo, de una disposición general que se refiriera a normas sobre higiene, defensivas de un interés general, y que acarrearra, como consecuencia, el cierre de un establecimiento particular. En ese caso, ¿qué se hace?

Si la disposición lesiona ambos intereses, ¿es razonable colocar en un plano excluyente, el interés individual sobre el general? Volvemos el mismo planteo. Se me dirá que el artículo 303, de modo radical, excluye los asuntos susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; pero habría exceso de derecho, en mi concepto, si la circunstancia de que la disposición contuviera ambos intereses no fuera tenida en cuenta. Si la lesión es doble, si hay motivo para que los titulares de derecho público a que antes he aludido, se consideren en situación de apelar ante la Asamblea porque hay razones de interés público que justifican el recurso, ¿es razonable, acaso, trabar el curso de esa apelación fundándose en que, al mismo tiempo, esa disposición lesiona o puede lesionar a un particular, y, por ende, éste puede actuar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Si tuviera que resolver la dificultad, lo haría a la luz de los mismos principios que invoqué hace un instante; que está excluida, para mí, una interpretación en virtud de la cual quedaría sacrificado el interés general al interés individual.

Podríamos hacer algunas consideraciones más respecto de estos casos de confluencia de ambos intereses en un mismo texto, pero no creo que valga la pena, y nos llevaría a un debate académico, cuando el caso que se plantea no es éste, sino otro. El caso que se plantea es el de que la Ordenanza contiene, en nuestro concepto, violaciones de orden constitucional y legal....

(Apoyados)

...diferenciables de las que pueden mover la acción de los particulares y, en consecuencia, bastantes para determinar la competencia de la Asamblea General.

Por ejemplo, en esta Ordenanza se establece una disposición claramente inconstitucional, que ningún particular podría invocar para mover su acción, y es la que se refiere —tema que también tocamos en la Comisión de Legislación— al ordenamiento político de los órganos departamentales, su organización formal, el modo de formar la voluntad del Gobierno Departamental.

En el artículo 1.º de la Ordenanza, se dice: "La revocación de los permisos se hará previa venia de la Junta Departamental, la que dispondrá de un plazo de 45 días para expedirse. Vencido ese plazo sin que la Junta se haya

expedido, se considerará otorgada la venia solicitada.

Esta es una disposición por la cual se entra a legislar sobre el modo de formar la voluntad del Gobierno Departamental. Esto no está ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Gobiernos Departamentales; es una disposición que no se refiere, propia y sustancialmente, al transporte, sino que toca un tema que es típicamente de carácter legislativo o constitucional sobre formación de dicha voluntad gubernativa. El ordenamiento, la disciplina de los órganos departamentales, a los efectos de la constitución de una voluntad útil que obligue, es materia típicamente constitucional o legislativa. Sin embargo, en este caso, el Gobierno Municipal, en una ordenanza de transporte, dice cómo se constituye la propia voluntad del mismo. En este sentido, el Gobierno Departamental mueve una competencia que no tiene.

Dichos Gobiernos carecen de tal potestad, que por otra parte, si se permitiera, podría llegar a una diversidad de legislaciones, en los diecinueve Departamentos. En rigor, lo que se estaría haciendo es la Ley Orgánica Municipal en ese aspecto, por los propios Gobiernos Departamentales.

(Muy bien).

—Este es un asunto puramente de derecho político. ¿Qué clase de acción va a intentar el particular frente a esta transgresión, si a él no le afecta ningún interés personal, directo ni legítimo? ¿Puede presentarse impugnando esa resolución por razones de interés general o de defensa de la norma? No, señor; porque para que el interés pueda abrir la instancia ante la Corte o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es necesario que sea de carácter subjetivo, personal o directo. No hay lesión de ese carácter; es un asunto de orden impersonal y objetivo.

Basta, entonces, que en la Ordenanza haya una sola transgresión constitucional o legal, de carácter público aunque haya otras respecto de las cuales se puedan mover recursos personales para que tenga sentido la competencia de la Asamblea.

(Muy bien! Apoyados)

**SEÑOR GRAUERT.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Sí señor senador.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede interrumpir el señor senador.

**SEÑOR GRAUERT.** — Con relación a este último tema, los apelantes en la página 13 del repartido que tenemos a la vista, en el párrafo final y refiriéndose justamente a este aspecto de la organización de la Ordenanza con respecto a la intervención del Concejo, dice: "Esta delegación de funciones cuyo ejercicio, además, se deja librado a la discrecionalidad del Concejo, en cuyas manos quedarán, sin garantías, los intereses de los permisarios particulares, es también clara inconstitucionalidad, porque el ejercicio de los poderes que la Constitución confiere a un determinado Órgano..." Quiere decir que los apelantes han argüido en su escrito de apelación justamente la situación de desamparo o de falta de garantías en que ellos pudieran quedar por este traslado o transferencia de competencias de la Junta al Concejo Departamental.

En definitiva, ellos han fundamentado su escrito justamente en su propio interés y no en el interés de la norma que se pudiera haber transgredido.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Cuando me referí al artículo 1.º, tuve cuidado de aludir a la revocación de los permisos: "La revocación de los permisos —dice— se hará previa venia de la Junta Departamental, la que dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días para expedirse". ¿De dónde extrae competencia el Gobierno Departamental para ordenar la voluntad del Concejo y la voluntad de la Junta, por un modo no previsto por la Constitución ni por la Ley Orgánica Departamental, en virtud del cual se apela al mecanismo de la venia, dándosele la correspondiente situación predominante al Concejo Departamental? No es la propuesta del Concejo, que habitualmente plantea sus iniciativas ante la Junta Departamental y sobre las que ésta delibera libremente. No; aquí aparece un nuevo método de formación de la voluntad departamental para materia en que ni la Constitución ni la ley lo disponen, que es la institución de la venia.

**SEÑOR GRAUERT.** — Exacto.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Lo que yo sostengo es que la institución de la venia, este proceso de formación de la voluntad, es típicamente materia constitucional o legislativa, porque el Gobierno Departamental tiene que moverse, en toda su actuación, desde el punto de vista de tal formación de esa voluntad, según los cánones establecidos en la Constitución y en la ley, que en este caso se modifican.

Esta intervención de la Junta, por la vía de la venia, no puede ser instituida por una ordenanza departamental.

(Apoyados)

—Esa es una modificación de derecho político.

**SEÑOR BAYLEY.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Perdóneme, pero voy a terminar el punto.

Decía el señor senador Bayley, en la Comisión, que que-

daban para la Asamblea los asuntos típicamente políticos, no en el sentido partidario, sino en el sentido del derecho público.

Para mí no había ninguna referencia más típica, de modificación de tal derecho, del orden político, que ésta que he citado, por vía de ejemplo, en la que se modifica el modo de conducirse los órganos departamentales, en el orden de sus potestades.

Naturalmente que, por vía de su defensa, los particulares puedan también hacer referencias o enunciaciones en esta materia. Está en la táctica defensiva o en los puntos de vista que todo letrado sigue para procurar el éxito de su tesis. Pero es innegable su carácter típico de violación de derecho público, que no da lugar a demanda ni ante la Corte ni ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Bien. Quiero decir, entonces, que, en mi concepto, basta que haya un solo texto, una sola disposición que permita llamar la competencia de la Asamblea General, para que, aunque en la ordenanza existan otras que puedan justificarse la promoción de la demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, esté justificada la competencia de la Asamblea.

(¡Muy bien!)

**SEÑOR BAYLEY.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Sí, señor senador.

**SEÑOR BAYLEY.** — Como el señor senador hacía referencia a una opinión que he dado en la Comisión de Legislación de la Asamblea, hubiera deseado que me hubiese concedido la interrupción en el momento de referirse a ella. No voy a comentar, por lo tanto, la conclusión a que acaba de llegar el señor senador, porque eso será materia de controversia, seguramente, en otra oportunidad, si basta o no que en el cuerpo de una ordenanza se encuentre una sola disposición que afecte a lo político puro o al derecho público, para ya excluir toda posibilidad de acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Voy a referirme, como me proponía hacerlo al pedir la interrupción, solamente a esa disposición concreta de la ordenanza que ha citado el señor senador Echegoyen, en virtud de la cual se agrega a la voluntad del Concejo de revocar un permiso —creo que esas eran las palabras: revocación de un permiso— dado con calidad de precario y revocable— la voluntad de la Junta, que habría que exteriorizarse u objetivarse en la concesión de la venia para hacer efectiva esa revocación.

Me sorprende que desde un Cuerpo Legislativo, generalmente tan celoso de su jerarquía por la índole del cometido específico del mismo y por la gravitación que tiene ante la opinión pública como expresión de la soberanía, se señale, desde ángulo crítico, la actitud de un organismo ejecutivo, como lo es el Concejo Departamental dentro del Gobierno Municipal, que, en lugar de aumentarse facultades, en lugar de usurpar atribuciones ajenas —a lo que se dice ser tan dado, por lo general, el Poder Ejecutivo— autolimita sus facultades, las facultades que le corresponden en virtud de esa distribución de competencias que la Constitución y la ley hacen entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo y de contralor del Gobierno Departamental.

El régimen hasta ahora vigente en materia de otorgamiento de permisos y de revocación de permisos individuales, ha sido, sin protesta de nadie, el de que íntegramente estuviera librado a la competencia exclusiva del órgano ejecutivo del Gobierno Departamental. Hasta ahora, sin que se sepa que se haya suscitado ni siquiera un reclamo de orden particular, ni el del perjudicado por la revocación de un permiso precario, ante la Justicia Ordinaria o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Han corrido los años, sin que jamás se enjuiciara la legitimidad de esa competencia, o de esa atribución puesta en marcha o ejercida exclusivamente por el Concejo Departamental o por las Intendencias.

Y entro al tema. Desde que llegó la primera iniciativa del Concejo Departamental a estudio de una Comisión Especial de la Junta —no sé si se llama Comisión de Legislación o cómo— se advierte, repasando los antecedentes, que los ediles se caracterizaron por un propósito, reiteradamente sostenido, de tomar participación lo más preponderante posible en este nuevo ordenamiento que, con el título de coordinación, se da en esta ordenanza al servicio de transporte colectivo de Montevideo, y que, cada vez que creyeron advertir en la suerte de los permisarios, de los titulares de los permisos, de los propietarios, de los elementos del personal obrero o administrativo que concurre a poner en marcha ese servicio, dependiendo sea de la empresa privada o de la pública, una ingerencia excesiva del Concejo, que pudiera gravitar en forma peligrosa o de riesgo para los intereses particulares comprometidos —para los del propietario, para los del permisario, para los del empleado administrativo u obrero— la junta dijo: "Ah, no! Que esto no lo haga el Concejo solo; aquí habría que aumentar garantías".

En un régimen que es de suyo, casi por definición, carente de garantías y erizado de riesgos como es el del permiso precario o revocable, hay que cuidarse de interpretaciones demasiado literales.

Hay que poner algo que sea un freno, que ponga coto al posible ejercicio arbitrario de esa discrecionalidad excesiva que parece fluir o desprenderse, de las características que se cubren bajo las palabras "precario", "revocable", y con el aditamento de "sin derecho a reclamo o indemnización alguna".

Entonces, es que se quiera dar más garantías, más estabilidad; y por ello es que no se concibe que nadie vaya al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a protestar contra una norma que lo único que hace es sustraer de la órbita competencial pura del Concejo —pero proclive, no obstante toda su ilegitimidad, a la arbitrariedad, a la persecución, a la injusticia— la posibilidad de revocar arbitrariamente y con verdadera impunidad —porque a veces sigue haciéndolo, no obstante la posibilidad del reclamo ante la Justicia, de larga y costosa duración e incierto resultado— no se concibe, digo, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de una conducta que agrega a la voluntad del órgano que por sí sólo podría hacer las cosas, la voluntad de otro órgano del Gobierno Departamental, constitucionalmente instituido con funciones legislativas y de contralor de la actividad del Departamento ejecutivo.

Se trata de instituir un contralor eficiente de la actividad del Departamento ejecutivo de la Comuna, un contralor enérgico contra todo posible desmán o abuso de autoridad por parte del Concejo, mediante esa venia de la Junta que el Concejo reconoce pertinente en trance de tal gravedad como la revocación, que no se desea arbitraria, que se desea que inspire confianza; que se desea aplicar sólo en situaciones de gravedad y de pertinencia indiscutibles. La venia emana de un organismo en que tienen representación a veces, inclusive, más sectores de opinión que los que la logran en el Cuerpo Legislativo Nacional; en que hay representación de todos los intereses y en que, para lograrla son necesarias mayorías especiales, no muy fáciles de conseguir.

Esa actitud del Gobierno Departamental, concretada en esa disposición de la ordenanza, ¿puede ser enjuiciada como una actitud que signifique una transgresión constitucional, un propósito de disminuir la jerarquía de la Constitución o de la ley y una patente de impunidad o de agresividad contra algún interés legítimo que corresponda defender? ¿Dónde existe el administrado, el titular de un permiso revocable que diga: "No; esta ordenanza no puede venir, porque ahora es verdad que yo soy titular de un permiso precario, revocable; pero ahora vivo tranquilo porque sólo me lo puede revocar el Concejo; en cambio, si se aprueba esta "iniquidad" bastaría con que, además del Concejo, se confabulen en mi contra, en la Junta, la mayoría de los miembros concediendo la venia, para que quiten el permiso.

Únicamente un insensato, un loco, colocado en la situación individual del permisario, provisto de un permiso revocable y precario puede protestar, puede alzarse contra esta disposición, ante la Asamblea, ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, ni ante sí mismo; Tendría miedo de ponerse a monologar, por si alguien lo oyera y creyera que estaba protestando contra esta disposición, que no hace nada más que beneficiarlo y sumar garantías.

Querría ver, si es que fuera posible, abstraerse un poco, salir de la realidad y del momento que estamos viviendo, si esta ordenanza, materia del recurso de apelación, no fuera lo que es un conjunto de disposiciones— y en cambio fuera una resolución municipal, con esa sola disposición: "declárase, o dispónese que a partir de la fecha los permisos precarios, revocables sólo se podrán revocar con la voluntad del Concejo y venia de la Junta", si estaríamos reunidos tratando esta apelación, si habría surgido la posibilidad de una apelación ante la Asamblea, de una acción ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo o ante la Suprema Corte, o siquiera de un mero recurso de reposición o revocación en la vía de iniciativa pura interna dentro de los órganos municipales.

Como sólo quería referirme, por ahora, exclusivamente a este punto, agradezco al señor legislador la interrupción que me ha concedido.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Voy a contestar.

El señor legislador Bayley se refiere a una realidad que en mi concepto es irregular, que no ha contado nunca con mi asentimiento.

El presupuesto de que parte es discutible: los Concejos Departamentales, como las antiguas Intendencias, tienen facultad para otorgar permisos —según esa tesis— sin intervención de la Junta. Lo que voy a discutir es esa premisa, que no tiene ningún texto que la autorice.

Esa es una situación defacto. Ahora bien; la circunstancia de que exista una situación defacto, no puede ser nunca un argumento en contra de mi tesis. Entiendo que esos permisos no han podido ser concedidos nunca por la autoridad ejecutiva exclusivamente, porque, en el fondo, son de la misma naturaleza de las concesiones. Las conce-

siones y los permisos no versan sobre materia distinta; tienen diferencias en lo que respecta a la duración y limitación en cuanto a algunos derechos.

La precariedad se refiere a la duración, a la firmeza o estabilidad del derecho que se otorga para la explotación de un servicio. Pero tanto en la concesión, tratándose del transporte, como en el permiso, la sustancia es común; hay solamente alguna diferencia que no modifica el substratum de ambas situaciones, cuando las otorga el Gobierno Municipal.

Tengo anotada esta observación, pero ello es entrar al fondo del asunto.

Para mí, el proceso verdadero es otro. Si hubiera alguna duda y se entendiera que no hay previsión en materia de permisos, ya que en la Constitución y en la Ley Orgánica Municipal se habla de concesiones, pero no de permisos, yo, intérprete, tratándose de esa sustancia común, sin otras diferencias que las antedichas, entendería que éstas nunca podrían justificar un cambio de radicación de la potestad, y que si las concesiones las otorga la Junta, los permisos deben otorgarse también por la misma autoridad. Lo haría por interpretación, si se me permite, extensiva; y si se fuera muy exigente con el intérprete, diría que, aún por vía de analogía, también debería llegarse a la misma conclusión. Digo por vía extensiva, aplicando los conceptos que enseña Coviello, a propósito de la interpretación de las leyes, y distinguiéndola de la analogía propiamente dicha. Entendería, pues, que está atribuida, en cuanto a su otorgamiento, al órgano que tiene la facultad de hacerlo respecto de las concesiones de servicio público.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Tengo el temor de enredarme en la propia maraña de mis razones. En seguida voy a terminar la parte referente a la objeción del señor legislador Bayley, y luego, con mucho gusto, le voy a conceder la interrupción.

Quiero decir esto, en lo que respecta a la irregularidad de una realidad con la cual yo no me solidarizo. Y segundo, suponiendo que esa venia de la Junta fuera evidentemente una garantía que esta ordenanza le otorga así, graciosamente, a los interesados, le objetaría que ese género de reformas, por muy plausibles que sean desde el punto de vista del propósito tutelar que las inspira, no las puede hacer el Gobierno Departamental.

(Apoyados).

Hay una vía constitucional, que es la de que dicho Gobierno se dirija al Poder Legislativo, señalándole la conveniencia de que se agreguen a los textos legales, tales o cuales garantías.

Lo que se está defendiendo aquí, y concepto que la tesis es equivocada, es que eso lo puede hacer una ordenanza. En eso discrepamos. No puede, por vía de concesión generosa, con criterio de derecho privado, reconocerse a un Gobierno Departamental la facultad de aumentar garantías con la sola invocación de que ese aumento mejora la protección de los particulares.

(Apoyados).

—Sí, repito, se cree fundado, es, en cambio, irregular la vía que se elige para otorgarla.

(Apoyados. — Muy bien).

—Ahora, con mucho gusto oíré al señor legislador.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede interrumpir el señor legislador.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Ha pasado un poco la oportunidad de la interrupción que le pedí al señor legislador. Era simplemente a efectos de precisar un concepto.

El señor legislador Bayley señalaba que a efectos de la concesión de los permisos alcanzaba con la intervención normal del órgano ejecutivo municipal. El señor legislador Echegoyen discutía esta situación, sosteniendo que en ese caso también debe corresponderle intervención al órgano legislativo comunal.

De acuerdo con esta tesis —y este era el punto en el cual yo quería centrar el problema— todas las concesiones efectuadas sin la intervención de las Juntas serían nulas por haberse omitido un requisito fundamental.

Si esta es la conclusión a que se llega, el razonamiento del señor legislador Echegoyen es perfectamente lógico.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Tengo la seguridad de que mis contradictores no invocarían esa nulidad, porque la filosofía de su actitud es, naturalmente, la de la defensa de un orden creado por el Gobierno Departamental.

Uno de sus fundamentos es que estos permisos pueden seguir siendo otorgados por el Consejo.

Me parece muy difícil que, simultáneamente se sostuviera que son nulos los permisos anteriores porque no han sido otorgados sin el proceso que acabo de enunciar.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Lo que me interesaba en su conclusión.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Agrego lo siguiente, señor legislador: no creo que sea una réplica jurídica la demostración de que determinada tesis pueda tener el inconveniente de que se anularan situaciones anteriores que han podido ser otorgadas en contra del derecho. Si esas situaciones, en realidad, fueran agravantes de los textos positivos, naturalmente que las consecuencias correrían a cargo de los que así lo resolvieron y de los que pudieron recibir los beneficios de esa resolución. Pero, de todas maneras, ese reproche no cabría respecto de mí, que no tuve intervención.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Sí, señor diputado.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede interrumpir el señor legislador.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Yo no le formulaba ningún reproche al señor senador, ni sacaba ninguna conclusión; simplemente formulaba una pregunta, de acuerdo con la tesis que él sostuvo, la conclusión lógica era que esos permisos son nulos. Era simplemente una verificación que quería hacer y en el momento oportuno nos ocuparemos de algunos aspectos de su exposición. Pero lo lógico —y como conclusión a donde se va naturalmente el argumento de fondo— es eso: si eso fué concedido en forma deficiente desde el punto de vista de los órganos encargados de su intervención para poder legitimarlo, esos permisos han sido dados en forma irregular y en consecuencia son nulos.

El otro problema de las consecuencias de una situación de hecho es un asunto que en este instante no entra a juzgar dentro del razonamiento que se estaba efectuando. Muchas gracias.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Los raciocinios que yo haga respecto de esta tesis, no pueden ser, naturalmente, apremiados por la invocación de situaciones de hecho. Yo sostengo el derecho tal como lo interpreto a la luz de los principios y de los textos que he invocado, y no se reduce, en mi concepto, absolutamente su eficacia, con la invocación de que haya podido haber situaciones irregulares creadas según interpretaciones que no son las que yo sustento.

En cuanto a la nulidad, no comprometo opinión; la nulidad no es una consecuencia que fácilmente se tome de la mano apenas se compruebe una irregularidad. En materia administrativa, sobre nulidad —lo sabe muy bien tan ilustrado letrado como mi contrincante— hay que andar con paso muy cauteloso. La nulidad no es una consecuencia que caiga como la fruta madura apenas la agite la más leve brisa: es una consecuencia a meditar por lo menos dos veces.

(¡Muy bien!).

—No me quedaría —a esta altura tengo el deber de ser breve— sino por examinar una objeción que apuntaba el señor senador Grauert, respecto de los conflictos sobre pronunciamientos de autoridades diferentes, en esta interferencia posible de acciones o de recursos que se pudieran entablar.

El legislador de 1935 ya se planteó esta cuestión, y el señor diputado Balay invocaba un artículo que tuvimos ocasión de comentar en la Comisión de Legislación: el 63 de la Ley Orgánica Municipal, que dice: "Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, quedará en suspenso el derecho de los particulares de reclamar ante la justicia ordinaria (artículo 64), quedando también en suspenso el trámite de las acciones que al efecto se hubieran deducido. El pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre dicho recurso dejará concluida la cuestión de legalidad".

El doctor Bado, informante de este asunto explicaba que la razón que movía esta disposición era la de mantener la uniformidad de pronunciamiento del Estado en los conflictos que se suscitaban. "La Comisión creyó conveniente, señor Presidente, —decía— velando por la unidad interpretativa y, por tanto, de fallos sobre el mismo tema, que, en los casos en que se producía el recurso ante la Cámara de Representantes (es el régimen viejo) quedaran en suspenso las acciones que se hubieran deducido ante la justicia ordinaria, y tendientes al mismo objeto, a la espera del pronunciamiento legislativo sobre la cuestión de ilegalidad. Así se modifica en parte el sistema; se impiden en esa hipótesis, las actuaciones paralelas estableciendo entre ellas una relación de subordinación en la que predomina la que se desarrolla ante la Cámara. Esta subordinación es plena en sus efectos con relación al examen de la cuestión sobre legalidad, de modo tal que producido el pronunciamiento de la Cámara, desechando el recurso, queda totalmente excluida la posibilidad de volver a plantear la cuestión ante la justicia ordinaria. En cambio, si la Cámara de Representantes proclamara la ilegalidad del acto reclamado, los interesados que fueron lesionados en su derecho podrán acudir a la justicia ordinaria para reclamar la reparación patrimonial, la reparación civil de los daños y perjuicios que el acto o decisión ilegal les pudieran haber causado. En ese caso, se tratará de un procedimiento de

determinación y liquidación de daños y perjuicios".

La tesis de la Comisión de Constitución del Senado y los conceptos del doctor Bado, van dirigidos entonces a mantener la uniformidad de las resoluciones.

Es una posición. Puede admitirse —en la Comisión se conversó al respecto— la posibilidad de sostener otra tesis: la de los fallos diversos ante autoridades distintas.

Si tuviera que preferir alguna, naturalmente sería consecuente con la que sostuve en aquella oportunidad, porque, en la necesidad de optar por un criterio, prefiero mantener la uniformidad y dar la predominancia al Cuerpo Legislativo como tutor de la legalidad.

(¡Muy bien!).

—Bien, se podría decir: esto era para la justicia ordinaria; pero, ¿que se hace con los otros recursos? ¿Qué se hace, por ejemplo, con el recurso de inconstitucionalidad? ¿Qué se hace con la demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Son materias que no están previstas en esta disposición.

Si se me obligara a fijar criterio ahora, aunque puede no ser obligación de esta Asamblea ocuparse del punto, porque, demostrada su competencia respecto de los asuntos en examen, las consecuencias que de ello pudieran resultar desde el punto de vista de la diversidad de los fallos, por otros órganos, serían ajenas al tema, —yo preferiría la tesis de la uniformidad. Habría la razón de que, a falta de texto expreso, se podría apelar al criterio interpretativo que da el Código Civil, en su Título Preliminar: los fundamentos de leyes análogas. De manera que, si dicha ley fijaba el criterio de la uniformidad, me inclinaría a entenderlo procedente, también, en el caso.

Pero éste es un criterio personal y no toca el fondo del tema sobre la competencia.

**SEÑOR GRAUERT.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Sí, señor senador.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede interrumpir el señor senador.

**SEÑOR GRAUERT.** — He tenido a la vista el texto de la Ley de Gobiernos Locales del año 1935 y la discusión a que ha hecho referencia el doctor Echegoyen con motivo del informe del doctor Bado. Desde luego, planteado el problema en el plano teórico, podría llegarse a la conclusión a que hace referencia el doctor Echegoyen por el de una mayor analogía con el régimen anterior, si bien es cierto que ya él descartó que se trataba justamente de la justicia ordinaria y de la reparación civil. Pero yo creo que precisamente, el Constituyente, al estructurar el capítulo de lo Contencioso-Administrativo en la forma en que lo ha hecho, se ha separado de la anterior situación, no sólo por la creación de ese organismo jurisdiccional distinto, no sólo porque no busca la reparación de los daños causados...

(Muy bien).

... sino que llega hasta a anular el acto administrativo y con carácter universal solamente porque era justamente el pivot del pensamiento que pretendía desarrollar anteriormente: que el Constituyente actual, al diversificar en dos órganos que actúan con potestades jurisdiccionales distintas —la Asamblea General por un lado y el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo por el otro— no le puede dar entrada a los dos recursos paralelamente porque uno u otro de los órganos tiene que declararse incompetente por las razones expresadas en el propio texto constitucional.

Es el texto constitucional el que establece la norma, es decir, las condiciones para que en uno u otro caso sea viable el recurso interpuesto. En mi concepto, al crear esta situación, evita que pueda plantearse el hecho del paralelismo a que hacía referencia el doctor Bado, de acuerdo con la Constitución anterior y con la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales de 1935. Esa, justamente, era mi posición.

Es decir, que el argumento que el doctor Echegoyen esgrime para contestarme el problema que planteaba yo de interferencia de potestades entre esas dos funciones jurisdiccionales, hace en definitiva que vayamos al punto de partida, que es lo único que está expresamente dicho en la Constitución: cuando un recurso puede interponerse ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y cuando tiene, por el contrario, su correspondiente canalización ante el Parlamento.

Creo firmemente —porque vuelvo a decir que incluso esas conversaciones, aunque participé extraoficialmente, con quien estructurara principalmente este capítulo, que fue el doctor Alvaro Vargas— que lo que más buscamos en aquella oportunidad, es el deseo de ir cada vez más hacia el Estado de Derecho, fue aminorar la intervención del órgano político —que de cualquier manera, por su propia integridad lo es el Parlamento de la República— en sus potestades jurisdiccionales.

Hace un momento, un distinguido compañero de bancada me decía: "¡Pero no! Si la Asamblea General, por razones de su jerarquía, de órgano jerárquico dentro de los Poderes

del Estado resuelve que la ordenanza es inconstitucional, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, lo tiene que aceptar y se acabó". A mí me parece que no es así. Eso estaría bien en el Parlamento inglés, le decía yo, que puede hacer todo menos de un hombre una mujer, pero no en un Parlamento que tiene sus facultades establecidas a texto expreso en la Constitución; y, por lo tanto, en esa misma Constitución, y estructurado por capítulos, por separado, y casi con facultades como otro Poder del Estado — como lo es dentro de su especialización el Poder Judicial — el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo que tiene potestades propias que entran en juego en la forma que, ella lo determina y con un alcance que la misma no le da a ningún otro Poder del Estado; particularmente no se la da al Poder Judicial que, para el caso tan referido por el doctor Echegoyen, planteado solamente por un interés particular legítimo, puede decretar la inconstitucionalidad; pero con efecto solamente para el interesado, sin tener más extensión esa declaratoria de inconstitucionalidad para todos los otros ciudadanos de la República.

Es decir, que vuelvo un poco a mi posición primitiva. Por eso le decía al doctor Echegoyen que esta argumentación que ha hecho para contestarme con respecto al planteamiento de conflictos por resoluciones diferentes que pudieran darse por el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo por un lado y la Asamblea General por el otro, es exactamente la misma que decía el compañero de bancada a que me refería.

Creo que en la Constitución actual no puede darse — y está dicho en el informe del doctor Bado — lo que se otorgaba en la Constitución anterior con la Ley Orgánica de 1935, porque aquí están canalizados los dos rumbos que pueden tomarse, y además están determinadas las consecuencias según actúe un Poder con función jurisdiccional — el Poder Legislativo — o según actúe el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo que para mí, aún cuando no se determina como Poder — como tampoco se determina como Poder la Corte Electoral —, dentro del ámbito de las funciones que le determina la Constitución de la República es órgano de mayor jerarquía que no admite por sobre sí ninguna resolución, al igual que el propio Parlamento en el ejercicio normal de sus competencias.

Muchas gracias.

(Apoyados).

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Yo me había ocupado de los conflictos posibles entre resoluciones, respondiendo a algunas expresiones de alarma del señor senador Grauert, referentes al caso de fallos contradictorios. Y nada más que a eso.

Entonces, me sentía en la obligación de expresarle cuál era mi opinión respecto de cómo se evitaban esos conflictos.

El criterio seguido en 1935 fue el de la uniformidad. Hay quien sostiene, aún dentro de la Constitución — apelo a los recuerdos de nuestras deliberaciones en la Comisión de Legislación, de los señores legisladores Balay y Bayley respecto de la opinión de la Cátedra de Derecho Constitucional, del doctor Jiménez de Aréchaga, en sus comentarios de la Constitución — en cuanto a que, después del pronunciamiento de la Asamblea, en lo que se refiere a la inconstitucionalidad, no estaría vedado al particular continuar los procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia, es decir, que, según esa interpretación, no habría la posibilidad de un solo fallo, sino que la competencia de la Corte subsistiría no obstante el pronunciamiento de la Asamblea General.

Cito el antecedente porque, siendo de tan alta categoría, demuestra que la propia interpretación que hace el señor senador Grauert, de que en esa forma no hay posibilidad de conflicto, no es compartida por la opinión a que me refiero.

Es momento que dé término a mi exposición, señor Presidente, puesto que lo sustancial ya está dicho. Pido excusas a la Asamblea por su extensión.

(¡Muy bien!)

**SEÑOR BAYLEY.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor senador.

**SEÑOR BAYLEY.** — Me siento en el deber, aun contrariando la opinión de los médicos, — veo que algunos están vigilando esta intervención mía en el debate — de hacer una exposición, porque integro, como es notorio, la Comisión de Legislación de la Asamblea y planteé en ella mis puntos de vista, que han sido objeto de comentarios, con indicaciones claras o veladas del autor y de algunas ocurrencias que se me atribuyen que se habrían ido destruyendo; por lo menos en opinión de sus contradictores.

Quiero decir, en primer término, que en la Comisión de Legislación, como lo hiciera en alguna otra oportunidad en esta Asamblea, planteé el problema de la competencia de la Asamblea General para entender en estos recursos, adelantándome a expresar mi deseo de que un tema de tanta importancia como éste hubiera sido estudiado y resuelto sin tener que hacer frente a plazos de verdadero apremio, en

un caso concreto, en un recurso determinado. Es decir, que hubiera aspirado a que por conducto de la Comisión de Legislación primero, y luego por decisión de la Asamblea, se hubiera podido llegar a fijar con carácter general, impersonal, desconectado de toda situación concreta, cuál era la exacta delimitación, el área bien determinada de la competencia de la Asamblea General para conocer en esta clase de apelaciones.

Comencé por señalar ante la Comisión de Legislación, a través de un minucioso recorrido de los textos constitucionales, cómo la Constitución vigente puede caracterizarse por un reiteradamente demostrado afán de sus autores de extremar garantías, posibilidades de reclamo, recursos, acciones, excepciones, procedimientos especiales de denuncias y de acusación para proteger a todos los administrados contra los riesgos de error, de mala voluntad, de abuso o desviación de poder, de transgresión de la Constitución o de las leyes, por alto, encumbrado o poderoso que resultare el autor del error, del daño o de la transgresión constitucional, legal o reglamentaria, según los casos.

Y efectivamente es así, y es noción demasiado conocida, aunque lamentablemente no haya sido objeto, hasta hoy, de una clara sistematización.

No hay impunidad en el país en materia de transgresión de la Constitución o de las leyes, para ningún Poder del Estado. El Poder Legislativo está alcanzado, a texto expreso, por la acción, la excepción o el pedido de oficio de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, planteado este último, espontáneamente, por los jueces y los miembros de los tribunales, aún del de lo Contencioso Administrativo, cuando, a pesar de que las partes lo silencien, crean advertir un caso de inconstitucionalidad de las leyes.

Los actos del Poder Ejecutivo, los de la Administración Central, los de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados han sido alcanzados todos, principalmente por esa Institución armada con gran relumbrón, con gran énfasis, con gran unión y satisfacción patrióticas, por creer que se ha llegado al límite máximo de las garantías susceptibles de obtenerse al estructurar en la Carta Fundamental, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En Constituciones anteriores, habiéndose vislumbrado la importancia de la Institución, se dejó librada su puesta en marcha a la diligencia de los legisladores; pero los hechos demostraron que esa diligencia no fué tanta, y de no haber interferido otra carta constitucional, todavía estaríamos esperando la ley que organizara el referido Tribunal.

Todas las garantías citadas existen sin perjuicio de las viejas garantías de orden administrativo interno que se concretan en los recursos de reposición, de apelación, jerárquicos, de revocación, etcétera, dentro del ámbito administrativo, cuando se tratara de jerarcas o de órganos de autoridad sometidos a una relación de jerarquía con organismos con jurisdicción para reverter, revocar o volver a analizar sus decisiones.

Ese conjunto, y en esa dispersión de disposiciones — que han escapado a la tarea de algún curioso que intente su sistematización — nos muestra una dosificación progresiva del derecho dado a los administrados y a los órganos del Poder Público y aún a los Poderes del Estado, que van desde la simple advertencia y la observación, hasta la denuncia, la acusación, el juicio político, la responsabilidad, la revocación, la anulación de los actos, la declaración de inconstitucionalidad.

Con esa gama tan nutrida de recursos y ese afán muy plausible de hacer ganar en cantidad, de hacer progresar cada carta o cada faena del constituyente en relación a las cumplidas anteriormente, parece evidente que el legislador constituyente de 1951 rindió homenaje a una tentación en la que es fácil caer: sobreestimar su esfuerzo en función de haber aumentado en número los recursos, las vías, los medios jurídicos puestos a disposición de los perjudicados o de los que quisieran propender, por todos los medios posibles, al imperio de la Constitución y de la ley y al acatamiento a las reglas de derecho.

Ese propósito se trasluce en múltiples oportunidades, principalmente a través de la labor de la Comisión Especial que más trabajó en esta materia — me refiero a la Comisión de los Veinticinco Representantes — que estudió el proyecto original de Constitución y le introdujo algunas modificaciones importantes.

Además, se advierte cómo no se hace uso mezquino del énfasis para exaltar el progreso en razón de haber dado más medios jurídicos de los que existían antes para que los particulares, los órganos del Estado, los jerarcas, los funcionarios, en fin, se defendieran de los riesgos de inconstitucionalidad, ilegalidad, abuso o desviación de poder, etcétera. Esto acredita, — ya lo dije antes — plausible e innegable afán de aumentar garantías acreciendo el número de los medios jurídicos creados con tal fin.

Pero no siempre el aumento de los medios de garantía constituye una exposición de acierto. No hace muchos mi-

autos, el señor senador Echegoyen, respondiendo a una objeción que yo hiciera, decía que en el supuesto de que una venia fuera efectivamente un aumento de garantías, no por eso ha de concluirse que está bien el haberlo hecho, o que sea legítimo que el Concejo, por acto de propia determinación y autoridad, endose o agregue para formar la voluntad del órgano, sin texto constitucional o legal que lo determine, una venia que ni la Constitución, ni la ley, exigen.

Traslado esa reflexión o manera de argumentar, que no favorecía mi tesis sino que la contradice en el caso anterior, a este caso particular, en la esperanza de que pueda servir la réplica de mi contendor ocasional para abonar lo que estoy expresando. Esto es, que no siempre el doble hecho innegado de las buenas intenciones y del aumento en cantidad de los medios jurídicos de garantía, es expresión de acierto. Puede no serlo, en los casos en que al proliferar, tal vez en exceso, los medios de garantía, no se haya tenido el tino, la suerte o el acierto al intentar hacerlo o realizarlo efectivamente, el ajuste o adecuación debidos, de todos los resortes y medios jurídicos, para que la acción de los distintos órganos o la puesta en marcha de estos distintos medios jurídicos no provoque problemas, dificultades, perplejidades como las que en este caso concreto se han suscitado y estamos tratando de superar.

Los legisladores, los miembros de la Comisión de los Veinticinco de la Cámara de Diputados con funciones de constituyentes, dejaron muchos rastros que demuestran que percibieron los riesgos de esa acumulación un poco arbitraria o caprichosa de jurisdicciones, de medios jurídicos, de garantías, y estos tomos que se han publicado con los debates ocurridos tienen muchas pruebas de cuanto acabo de expresar.

Para no entregarlo todo integralmente al puro recuerdo, llevé a la Comisión de Legislación anotadas, —y se hizo la distribución de esas anotaciones entre sus miembros— todas las páginas en que a lo largo de estos tres tomos publicados traen referencias al caso que tratamos de esclarecer.

Desde que se plantea, por primera vez, en la Comisión de los Veinticinco, en el orden de numeración de los artículos del proyecto de Constitución el tema relativo a la inconstitucionalidad de las leyes, con la doble innovación fundamental; además de excepción como antes, la declaratoria de inconstitucionalidad puede perseguirse o procurarse mediante la acción, y segundo, no se trata ya de acción o excepción que se ponga al servicio exclusivamente del titular particular de un interés directo, personal y legítimo, sino que además aparecen convertidos también en titulares de la acción, de la gestión que de oficio pueden promover para que se llegue a la declaratoria de inconstitucionalidad, los Jueces y los miembros de los Tribunales y también los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Se enriquecen entonces, dentro de ese tema, desde el primer momento, las posibilidades de hacer una defensa, una tutela más eficaz de la Constitución, creando nuevos titulares del derecho, nuevas formas para hacerlo valer. Y si siguiéramos tomando la Constitución y olvidáramos el proyecto de Constitución, sobre todo el inicial, o ignoráramos el proceso de elaboración de ese proyecto y del orden dado a las disposiciones en el texto final de la Constitución vigente, tendríamos que dejar como si no existiera por ahora esa parte de la Constitución sobre leyes inconstitucionales, cuyo texto encara precisamente la situación tal vez más conexas con la que tiene a su estudio la Asamblea, esto es, la de la inconstitucionalidad o la pretensión de inconstitucionalidad advertida o denunciada como contenida en un decreto del Gobierno Departamental, con fuerza de ley en la respectiva jurisdicción departamental.

En el régimen de la Carta anterior se discutió, era tema librado a la doctrina y que tuvo muchas oportunidades de planteamiento en los estrados judiciales ante la Corte, si la declaratoria de inconstitucionalidad podía la Corte referirla y hacerla efectiva con relación a los decretos de los Gobiernos Departamentales.

La posición de la doctrina puede decirse que era confusa y poco uniforme. Desde hace muchos años en nuestro país, desde poco después de la Constitución del año 17, con motivo de haberse dictado algunas disposiciones emanadas de órganos de Gobiernos Departamentales que importaron modificación de las leyes originales sobre pavimento, se planteó la inconstitucionalidad de algunas disposiciones municipales, y de liquidaciones hechas por la Contaduría Municipal, y esa acción de inconstitucionalidad llevó al Fiscal de Corte de la época a sostener, en el Cuerpo de un dictamen de gran utilización posterior, que los decretos de las Juntas Departamentales, cumplidos todos los requisitos formales, dictados dentro de la competencia, eran verdaderas leyes departamentales; eran verdaderas leyes de Gobierno Departamental y que podían, por lo tanto, considerarse comprendidas dentro de la simple expresión de "leyes" utilizada para abrir la declaratoria de inconstitucionalidad referida a las leyes.

Se planteó entonces el problema de a qué leyes se refería la Corte: si a las leyes por su fuerza general obligatoria y

su fuerza coactiva o a las que, además de por su contenido, fueran leyes en función de haberse dictado cumpliendo el proceso que la propia Constitución determina para la preparación, presentación, discusión y sanción de las leyes, la etapa de las dos Cámaras, etcétera.

No habría más leyes, según esta interpretación que suma al elemento del contenido el elemento formal fijado en la Constitución, que las que emanan del Parlamento Nacional.

Pero en el texto constitucional fue legitimada la otra creencia o interpretación en función principalmente de haber asignado a las Juntas Departamentales, a las Asambleas Representativas en su época, además de funciones de control del órgano central de la administración o comunal o del Poder Ejecutivo departamental, funciones legislativas, lo que parecería impulsar la interpretación de que también son leyes, o podrían ser consideradas leyes, las emanadas como tales, de los Gobiernos Departamentales.

En realidad, la Constitución de 1951 terminó con la controversia, soslayando el problema técnico de la adecuada o ajustada denominación. ¿Por qué? Porque no dijo "leyes departamentales", no dijo simplemente "decretos departamentales"; no dijo "hay leyes inconstitucionales", y "hay decretos departamentales que pueden ser declarados tales", sino que se habló de decretos departamentales, con fuerza de ley, en la respectiva jurisdicción Departamental.

Esto, en cuanto a la inconstitucionalidad de las leyes.

Pero, yo aludía hace un momento a la importancia de conocer o ignorar el proceso exacto de incrustación o injertación —como prefieran— de ese artículo que da poderes a la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de los decretos de los Gobiernos Departamentales. Puede resultar de ello, a estar a las referencias que he recogido, si no una justificación, una explicación interesante para concebir en la misma Carta dos textos que se prestan a confusión y desorientan en cuanto a su interpretación y aplicación acertada: el que en materia de inconstitucionalidad de las leyes extiende la competencia de la Suprema Corte de Justicia, facultándola para declarar también la inconstitucionalidad de los decretos de los Gobiernos Departamentales, y el texto que para esos mismos decretos departamentales —artículo 303 de la Constitución—, contrarios a la Constitución, abre en unos casos, como regla general, la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en otros casos, como regla de excepción, es decir, eliminada toda posibilidad de intervención del Tribunal, la competencia de la Asamblea General.

Si como una conquista, si como un progreso innegable de la nueva Constitución, esos decretos de los Gobiernos Departamentales se someten al riesgo de la declaratoria de inconstitucionalidad por la vía de la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia, subsiste sin alterarse una disposición como la del artículo 303, que parece dividir, "como por gala en dos", todas las competencias posibles, cuando se enjuicia la inconstitucionalidad o la ilegalidad de decretos de las Juntas Departamentales o de los Gobiernos Departamentales, según prefieran, contrarios a la Constitución y a las leyes, y abre una vía, la vía ancha del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la que va pareciendo cada vez más estrecha y reducida, de la Asamblea General.

Y es difícil, con la compaginación actual de la Constitución ya hecha, con este tomo que tenemos casi todos sobre los pupitres entender la verdadera explicación de esta cosa anómala.

No se puede decir que el artículo 303 fue redactado sin tener en cuenta las disposiciones anteriores, porque en él se ve que se ha puesto una frase entre comas, que dice: "no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo". De manera que el Constituyente, después de haber armado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reduce a dos competencias la posibilidad de impugnación de los decretos de los Gobiernos Departamentales por inconstitucionalidad: Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Asamblea General.

Y podemos preguntarnos qué hacemos con la Suprema Corte de Justicia.

La disposición parece derivar de lo que alguien —deploro que no esté en Sala el señor senador Ferrer Serra, que estaba aquí hasta hace poco— me ha explicado en la Comisión de Legislación de la Asamblea General, diciendo que el artículo 260 de la Constitución, que establece la posibilidad de declarar inconstitucional es por la Suprema Corte de Justicia los decretos de los Gobiernos Municipales, fue injertado a último momento en el proceso de preparación del primer proyecto, como dando solución a la contienda doctrinaria y jurisdiccional, cuando

do ya estaba terminado todo el trabajo de articulación de la Constitución.

Entonces, pareció oportuno trasladar —siempre según el señor senador Ferrer Serra— creo que de una reciente constitución italiana, una disposición similar, y agregar al título de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, la que alcanza a los decretos de los Gobiernos Departamentales. No se advirtió luego, al retomar de la Constitución de 1942, con las reformas que voy a indicar, en el texto del artículo 303, que no bastaba para ponerlo al día con poner entre comas "no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo", sino que era además menester tener presente que se había abierto una competencia nueva y expresa en favor de la Suprema Corte de Justicia.

Bien. Esto no resultó ignorado, naturalmente, en el momento de discutirse en Sala el problema, y aun de plantearse en Comisión, y así, desde el primer momento, cuando se referían al tema de la inconstitucionalidad, otro legislador, que estaba hasta hace un rato, el señor diputado Washington Beltrán, observó que por ampliarse el campo del dominio de la inconstitucionalidad, al comprenderse como susceptibles de ser declarados tales los decretos de las Juntas Departamentales, puede, de acuerdo con el artículo 303, haber dos fallos distintos de inconstitucionalidad, uno de la Suprema Corte de Justicia y otro de la Asamblea General.

El señor senador Grauert parece que hace un momento se refería al riesgo de dos posiciones distintas, pero encarándolo la posibilidad de pronunciamientos de la Asamblea General y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El señor diputado Washington Beltrán, en la Comisión de los Veinticinco, señalaba el riesgo de contradicción entre las decisiones de la Corte y de la Asamblea General y preguntó concretamente qué ocurriría en tal caso y cuál de los dos pronunciamientos tendría validez. El señor diputado Ferrer Serra, con esa rapidez y vivacidad intelectual que todos le reconocemos, dió de inmediato una respuesta, pero que examinada no en aquel momento sino dos, tres o más años más tarde, no parece que pueda satisfacer, y menos que pueda cimentarse en esa explicación, todo un sistema de interpretación.

Dijo el doctor Ferrer Serra que la Asamblea General tiene que pronunciarse antes por existir un plazo de sesenta días para hacerlo, y ese pronunciamiento hace innecesario el otro, lo que nos llevaría, de tomar esta explicación como satisfactoria, a la solución —que constituye, a mi modo de ver, una verdadera aberración— de cargar en la cuenta nuestra, por lo menos de todos los que continuamos siendo legisladores habiendo integrado la Legislatura constituyente anterior, el horror de haber armado una competencia con toda la importancia jerárquica del texto constitucional, y su estructuración prolija, en la misma Constitución, para hacerla innecesaria.

**SEÑOR FLORES.** — No sería el único error.

**SEÑOR BAYLEY.** — Porque una sería imprescindible, muy importante, con una prioridad y jerarquía indiscutibles, y la otra totalmente inútil, si ello ocurriera en función de una razón, por ejemplo, de jerarquía del órgano que podría haberse esgrimido, pase. Pero es claro que la jerarquía del otro órgano no era de descuidar; era nada menos que la Suprema Corte de Justicia, cabeza de Poder, todo un Poder, frente a otro: Poder Judicial, Poder Legislativo. Admitiendo que la razón fuera la de la jerarquía del órgano si se hubiera dado ese argumento, podríamos tal vez transigir con ella.

Peró no: es en función del plazo; es el constituyente que hace una diablura y le dice a los particulares: "Aquí sentimos un poco de horror por los organismos políticos, la Asamblea General, tumultosa, agitada por intereses políticos que la sacuden, llena de pasiones. En cambio allí, aquello tan recatado, tan discreto, tan sereno, tan imparcial, como la Suprema Corte de Justicia. Fijense qué garantías les damos: la Suprema Corte de Justicia".

Y cuando empezaron los gritos y expresiones de júbilo frente a esta conquista, les dirían en seguida: "no sean tontos, que se va primero a la Asamblea, que en 60 días los políticos hacemos desaparecer los recursos y nos tragamos todas las garantías y después ese otro pronunciamiento se hace innecesario, porque no hay ninguna Suprema Corte de Justicia, ningún Juzgado, ningún Tribunal ni Juzgado de Paz que resuelva hoy en menos de 60 días ninguna cuestión y menos una de este calibre y con estas dificultades.

(Murmullos)

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — ¿Me permite una interrupción?

**SEÑOR BAYLEY.** — Se la concedo, porque si no, ocu-

rrirá lo que seguramente están deseando: que tenga que terminar así de inmediato.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Puede interrumpir el señor legislador Echevoyen.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — No sería propiamente inútil; tendría aplicación en todos los casos en que no actuara la competencia de la Asamblea General. Esta es la conciliación con el artículo 303. De manera que no se podría decir que el artículo es ocioso.

En lo que respecta a la interpretación que invoca el señor legislador Bayley, le recuerdo que hay dos opiniones, y señalaba, hace un momento, la de la cátedra de Derecho Constitucional, del doctor Justino Jiménez de Aréchaga, que admite la posibilidad de una segunda resolución.

Esa no es una objeción contra mi tesis.

**SEÑOR BAYLEY.** — Si el señor legislador me obliga a ello tendré que fastidiar un poco más a la Asamblea y tendré que mandar buscar el tomo del libro del doctor Jiménez de Aréchaga y decirle, como en la Comisión de Legislación, que la opinión no es tan así.

Cuando en Comisión invoqué al señor legislador la opinión del doctor Jiménez de Aréchaga, antes de ver su último libro referido a la constitución del 52, pero con datos suficientes en el libro sobre la Constitución anterior, me adelanté a manifestar que seguramente en el libro nuevo no podía mantener la primera opinión, porque ahora se había incluido en la Constitución esa norma en el artículo 260. El señor senador Echevoyen citó en la Comisión de Legislación, la opinión del doctor Jiménez de Aréchaga; y allí, en aquel ambiente, que, a pesar de su serenidad y cordialidad, alcanzó, a lo largo de la deliberación, para producir un nuevo retroceso en mi estado; y que no nos permitió ni siquiera votar el tema previo de la competencia, por deferencia, que agradezco, de los demás miembros de la Comisión que no quisieron aprovechar mi ausencia para ello, el resultado de la lectura completa de esa parte del libro del doctor Jiménez de Aréchaga, no pareció dar por segura la posibilidad de acudir a dos o más jurisdicciones, ni encontramos material suficiente para extraer, del que contiene efectivamente la obra, la conclusión de que esas posibilidades de fallos diversos se presente como un elogio o como una ratificación de que hay multiplicidad de medios viables de garantía sucesivamente utilizables por los reclamantes.

Evidentemente, para no entrar en un nuevo diálogo, admito que el concepto del doctor Ferrer Serra, aunque no pueda apuntalar una técnica o un sistema de interpretación, es de recibo para aquellos casos en que el particular no acude a la Asamblea General o para aquellos casos en que la Asamblea General, como se dijo también durante la elaboración de la Constitución, ahondara la huella que ha abierto como tradicional y como expresión de su costumbre ya prolongada, de dejar vencer los plazos sin expedirse porque entonces si la Asamblea General no se pronuncia, el recurso, según el artículo 303, se tendrá por no interpuesto. Entonces tampoco habrá fallo contradictorio.

De cualquier manera, parece que no guarda relación la euforia con que se saludó esta ampliación de las posibilidades de declaración de inconstitucionalidad con tanta limitación de la posibilidad de acudir a los otros organismos buscando garantías y protección.

No fue sólo el señor diputado Washington Beltrán el que hizo esa pregunta no satisfactoriamente contestada; también la hizo el entonces diputado Baroffio, en la Comisión de los 25, sin ser más afortunado en las explicaciones recibidas.

Todo esto en cuanto a la inconstitucionalidad.

Siguiendo el orden de la Constitución nos encontramos que, en cuanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el doctor Ferrer Serra, que trabajó tanto en esto y luego fué miembro informante, refiriéndose al artículo 311 en su apartado final, —que fue objeto de un preciso y claro desarrollo por el señor legislador Balay en su muy ilustrativo discurso— dijo expresamente, y en esto da una réplica, —claro que muy anticipada en el tiempo— a algo que dijera el señor senador doctor Echevoyen.

El señor senador Echevoyen dijo, palabra más o menos, que al Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se podía acudir en la defensa del interés abstracto, en la sola defensa de la legalidad o de la Constitución; que no era, esa, una jurisdicción abierta para los desesperados o enfermos de legalidad o constitucionalidad, sino que era menester que llevaran en su acción, en su mochila, en las manos quejas o suplicantes, la demostración de un interés legítimo, directo, personal lesionado.

El apartado segundo del artículo 311 dice expresamente, que las sentencias del Tribunal, o los fallos del Tribunal, pueden referirse a una situación de derecho subjetivo y que también pueden ser dictados por razones de interés general, en el interés de la regla de derecho, en cu-

yo caso tienen efecto "erga omnes", efecto absoluto y general.

El doctor Ferrer Serra decía, explicándolo: cuando es un problema de puro derecho, de derecho objetivo, la simple violación de una norma general de derecho, el fallo produce efecto "erga omnes" para todos en un sentido amplio. Luego, un poco más adelante, hay un cambio de palabras, un diálogo entre el Presidente de la Comisión, que creo lo era el doctor Malet y el doctor Ferrer Serra. Y dice el Presidente de la Comisión, doctor Malet: "El segundo inciso del artículo 303"—que es el 311 actual—"establece que cuando la decisión resuelve una cuestión de puro derecho objetivo en exclusivo interés de la regla de derecho o de la buena administración,—no se trata del interés del reclamante o de protección del patrimonio del reclamante, ni de compensar o reparar el daño o abrir la acción de reclamación en favor del reclamante, sino que la decisión se dicta en interés exclusivo de la regla de derecho, produce efectos generales y absolutos." Y agrega: "Yo, desde luego, me reservo para en su oportunidad oponerme a esta norma que además, en principio, contradice el artículo 251," que es el actual artículo 260.

Ese artículo establece que, en materia de declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, éstas tienen efecto sólo en el caso concreto y no tienen, por tanto, alcance general.

De manera que, cuando se declara inconstitucional una ley, la decisión de la Suprema Corte de Justicia tiene sólo alcance respecto al caso planteado ante ella, y por ello es que puede darse el caso curioso de que el Tribunal haga lo que no puede hacer la Corte es decir, transformarse en una especie de órgano legislativo. Vale decir que este órgano, puramente jurisdiccional se transforma en órgano legislativo.

Yo no sé si el doctor Malet en la discusión particular replanteó este problema o promovió y promulgó la corrección o supresión del texto. Lo cierto es que el texto quedó tal como estaba proyectado: y, entonces, tampoco puede decirse que no existe la contradicción o hasta la subversión de poderes o posibilidades de ello entre organismos que a lo sumo serán de igual jerarquía, pues nunca se ha dicho que el Tribunal de lo Contencioso tiene jerarquía superior a la de la Suprema Corte de Justicia, no obstante ello tendría efecto mayor la decisión del Tribunal que la decisión de la Corte.

Quedó el texto, sin modificarse y sigue entonces produciéndose una situación aún más complicada que la que resultaba del artículo 260 enfrentado con el 303. Ahora hay tres, cuatro, cinco posibilidades de jurisdicción: la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Asamblea General, la Justicia ordinaria, los recursos jerárquicos o puramente administrativos, en la vida interna de la administración.

El doctor Balay, seguramente con más acierto que el que habla, pareció circunscribir, al menos, en la parte final de su enjuiciada exposición, las posibilidades de discusión a los efectos de determinar la prioridad de las posibles competencias a la Asamblea General y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, decidiéndose por este último Cuerpo para recursos de la índole del aquí planteado.

Yo creo que eso significó un empujamiento de las dificultades del tema, que tal vez, su espíritu ha podido superar. Yo sigo considerando más compleja la situación, porque no puedo descartar del panorama, contemplar las competencias a estudiar, la competencia de la Suprema Corte de Justicia.

En algún momento de su disertación el señor senador Echegoyen —y éste es otro de los motivos que me obligan a fatigar un poco más a la Asamblea— aludió a un planteamiento que yo hiciera en un primer momento en la Comisión de Legislación y me parece que lo dió por destruido o aniquilado, y, aunque sólo a mayor abundamiento, por si se replanteaba aquí, hizo extensa argumentación. Yo hablé en un primer momento, y no me arrepiento de haberlo hecho, aunque sé de por destituida mi ocurrencia y se le niegan posibilidades de recibir, de que me sorprendía la diversidad de léxico utilizado por el Constituyente para referirse a actos y a órganos a los que ya había tomado en cuenta con una denominación distinta.

Efectivamente, en la Constitución, se habla de resoluciones de los Concejos y de decretos de las Juntas Departamentales en el artículo 303. Se habla de decretos de los Gobiernos Departamentales en el artículo 299, me parece cuando crean impuestos y se dan medios al Poder Ejecutivo para anelar ante la Asamblea con efecto suspensivo, etc. Se habla en otras partes de la Carta, de actos administrativos definitivos.

SEÑOR FUSCO. — Esos no son con fuerza de ley.

SEÑOR BAYLEY. — Actos administrativos definitivos, etc.

SEÑOR FUSCO. — Con fuerza de ley es otra cosa.

SEÑOR BAYLEY. — Dice así: Por no hacer perder tiempo no voy al texto.

Y se habla de decretos de los Gobiernos Departamentales con fuerza de ley en el artículo 260. En el Tribunal de lo Contencioso se habla de actos administrativos definitivos y luego se dice que, comprende la competencia o jurisdicción del Tribunal, los actos administrativos definitivos, sean de los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, etc.

SEÑOR FUSCO. — Eso es para recursos de inconstitucionalidad.

SEÑOR BAYLEY. — Y para lo contencioso también, señor senador.

A mí me había llamado la atención esa diversidad de léxico, y frente al artículo 303 que hizo plantear muchas interrogantes en la Comisión de los Veinticinco, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación del Senado y en el Senado, pensé que esas palabras, distintas a las utilizadas en todos los otros textos constitucionales, podrían tener sentido distinto a las fórmulas utilizadas en las demás oportunidades.

El señor senador Echegoyen, atribuyéndome una ingenuidad que he perdido hace tiempo y que no espero tener oportunidad de recobrar, recordaba que no hay decreto de las Juntas Departamentales que se puedan poner en marcha, que se puedan aplicar, si no cuentan con la promulgación del órgano ejecutivo, del Gobierno Departamental.

Yo le podría decir, sin irreverencia, "chocolate por la noticia". No era la mía, la ocurrencia que formulé en la Comisión de Legislación de la Asamblea, la de que existían decretos de la Junta Departamental, así solitos, que anduvieran como papeles volando por ahí y que desde el momento mismo que la Junta los dictara salieran por ahí para hacer sentir su fuerza obligatoria, sin promulgación, sin disposición de publicación, etc.

Lo que señalé en la Comisión, y señalé en la Asamblea, aunque parezca ocioso, también, es que la expresión "decretos de las Juntas Departamentales y resoluciones de los Concejos" tiene, en lo que se refiere a uno y otro órgano de los Gobiernos Departamentales, perfecta posibilidad de aplicación como cosa distinta de lo que parece definir primero, decretos de los Gobiernos Departamentales; segundo, actos administrativos definitivos; tercero, decretos de los Gobiernos Departamentales con fuerza de ley en sus respectivas jurisdicciones. ¿Por qué? Por que si no hay decretos de la Junta que puedan aplicarse sin el "cúmplase" o la promulgación consiguiente por el Concejo Departamental, hay decretos que surgen de las Juntas Departamentales por efecto de la sola voluntad de la mayoría de sus integrantes.

Hay actos que son de competencia privativa, exclusiva, de las Juntas Departamentales, y el Concejo Departamental tiene respecto de ellos sólo la posibilidad de la observación o el veto, pero, si no los observa, tiene el deber de promulgarlos, y esa promulgación es más que un requisito de fondo, es más que la expresión de una colaboración o contribución de voluntades: es el cumplimiento de un requisito puramente formal e integra el proceso más que de formación de la ordenanza y de las voluntades del órgano, el proceso de ejecución, el proceso adjetivo de la situación, el proceso de la puesta en marcha, para hacer obligatoria la voluntad de las Juntas Departamentales.

Pero, junto a estos actos que son emanación de la sola voluntad de la Junta, no discutidos u observados por el otro órgano simplemente y que, aunque se observen o discutan puede ratificarlos la Junta Departamental y hacerlos igualmente obligatorios; junto a esos actos, digo, hay otros, que son exclusivos del Concejo Departamental. Y, además, en la órbita de los Gobiernos Departamentales, hay, dentro de su competencia y de su régimen constitucionales, régimen además, legal, para expedir o formar la voluntad del órgano. Gobierno Departamental, como decía muy bien el señor senador Echegoyen, actos, materias, instrumentos jurídicos, contentivos de la voluntad del órgano, que suponen necesariamente, ineludiblemente, la concurrencia de voluntades coincidentes del órgano ejecutivo del Gobierno Departamental y del órgano de legislación y contralor del mismo Gobierno.

Me refiero, por vía de ejemplo, a los presupuestos: iniciativa del Concejo Departamental, aprobación por la Junta, promulgación por el Concejo, con la cuña, todavía, del Tribunal de Cuentas en la etapa del proceso de aprobación. Creo, que, cuando el Constituyente habla de decretos de los Gobiernos Departamentales, se refiere o puede referirse a esos casos, a esas situaciones en que la voluntad es la del Gobierno Departamental, esto es, Junta más Concejo, no Junta o Concejo aisladamente, sino necesariamente unidos en un proceso de gestación o de

formación de la voluntad del Gobierno Departamental, que supone la intervención necesaria de los dos órganos: del Gobierno Departamental, el ejecutivo y el legislativo • de contralor.

No me parecía tan descaminado que fuera útil, ahondar un poco en la investigación, porque es indudable que son actos de jerarquía diferente, son, para el Constituyente, actos de importancia y relevancia distinta los que integran la competencia de uno solo de los órganos, y los que se jerarquizan requiriendo todo un proceso de elaboración, en conjunto o mediante esfuerzos que, aunque sean relativamente autónomos, se han de encontrar, se han de confundir en cierto momento en el proceso de elaboración para ser expresión de la voluntad indiscutible del Gobierno Departamental y no de uno de los órganos que lo integran.

Lamentablemente —no tengo reparo en decirlo— no he encontrado para esta cavilosidad, si se quiere, mía, o para este empeño de encontrar una salida que permitiera armonizar y no hallar en contradicción las disposiciones constitucionales, casi ningún punto de apoyo en la voluminosa historia de la sanción de este asunto en la legislatura Constituyente.

Podría simplemente decir que, en algún momento de la discusión, creo que en Cámara o en la Comisión de los 25, más de un diputado se preguntó: ¿Y sólo los decretos de la Junta? ¿Sólo las resoluciones del Concejo? ¿Es que no hay otras cosas en la actividad de las Juntas? ¿Es que la Junta no dicta resoluciones también? ¿El Concejo no dicta reglamento? ¿Qué hacemos entonces con las resoluciones de la Junta, con los reglamentos del Concejo? ¿Es incompleto esto? ¿Es que esto abre una cuña y va dividiendo las posibilidades y medios de obrar de los órganos del Gobierno Departamental y dice, respondiendo a una técnica científica o a algún capricho del que no ha quedado rastro: “Esto es recurrible”, “Esto no es recurrible”? Resulta que sería recurrible el decreto de la Junta, pero no la resolución de la Junta. Recurrible la resolución del Concejo Departamental, pero no el reglamento que dicta el mismo Concejo Departamental.

Y nos encontramos con este artículo 303, que ya no habla de decretos de los Gobiernos Departamentales, sino que habla así, en esa forma tan trunca, sólo de resoluciones del Concejo y de decretos de la Junta, y vuelca los recursos en primer término, al Tribunal de lo Contencioso. Y vamos en la discusión de los textos, al Tribunal de lo Contencioso, y allí sí que hay abundancia de datos de interés. Allí entra todo; allí se recurre de la resolución, se recurre del decreto, se recurre del Reglamento, se recurre del inciso 27 del artículo 290 del Reglamento de limpieza, del nombramiento, de la promoción, del destino. Todo es recurrible ante el Tribunal de lo Contencioso. Pero, conforme al artículo 303, sólo serían recurribles las resoluciones del Concejo y los decretos de la Junta Departamental.

Otro antecedente que recuerdo ahora, es el de la perplejidad provocada en muchos legisladores constituyentes por este artículo 303. El doctor Enrique Beltrán, o Washington Beltrán, o los dos, preguntando: “¿Y se puede saber cuál es el decreto de la Junta Departamental o la resolución de la Junta Departamental que no se puede recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no es susceptible de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso”. Y cuando se plantea una pregunta así, tan concreta, tan precisa, —no estoy seguro de la indicación que hago de los nombres de los legisladores, pero la seguridad la podría concretar casi de inmediato— uno de los miembros informantes hace un desarrollo otra vez, con cierto énfasis y gran satisfacción, sobre cómo se han aumentado garantías en función de que se han aumentado las posibilidades de los órganos con jurisdicción, en función permanente cuantitativa y no del contenido de las reformas, y sin contestar las observaciones muy sutilmente planteadas y sagazmente presentadas, de que si no será cuestión que, por crear tantos órganos con jurisdicción, lo que se traiga sea el caos, la confusión, el desconcierto, frente a la posibilidad o la realidad de resoluciones contradictorias, que no se arreglan con lo dicho por el miembro informante: “no se preocupen, porque la Asamblea General se va a expedir primero y las demás acciones serán innecesarias”.

Porque, si la Asamblea tiene 60 días, ¿para qué van a andar dando vueltas por otros lados?

Cuando se da esa explicación por el señor miembro informante, nos encontramos con que el artículo 303 nos dice palabra más o menos: al Tribunal de lo Contencioso Administrativo irá todo aquello que supone la lesión de un derecho subjetivo, de un interés directo personal y legítimo, y al recurso ante la Asamblea General lo bautizan en aquel momento —tal vez sea una frase expresiva, y puede ser que feliz y cetera, y la vamos a aprovechar en alguna cosa ya lo indicó el señor diputado Balay en al-

guna parte de su exposición: “Este es un recurso político-jurisdiccional”.

Ahora, los asuntos que tengan que ver con un interés directo y legítimo, personal; Tribunal de lo Contencioso Administrativo; pero, cuando el asunto es político, puramente político, típicamente político, como dijo el señor senador Ferrer Serra: Asamblea General.

Pero, cuando se da esa explicación, ¿quién sale al cruce de ese artículo a que me he referido antes? El apartado final del artículo 311, que cuando se refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nos lo presenta, dentro de su gran majestad e importancia, también con competencia para resolver o dictar resolución de efecto general para todo, —no para el caso concreto— cuando el fallo o la decisión se dicta no para proteger un interés legítimo personal y directo del reclamante, del postulante, sino en defensa exclusiva de la regla de Derecho. Y de la buena administración, me acota el señor diputado Balay.

Entonces yo planteé en la Comisión de Legislación de la Asamblea como problema, como trabajo —hubiera sido muy grato el poder vencer tantas dificultades— el ver si no era posible una armonización de los textos constitucionales.

Es fácil decir, sobre todo después que lo han dicho otros, “¿Qué hacemos? ¿Qué jurisdicción prevalecerá? ¿A dónde se va? ¿Se va a la Corte o a la Asamblea? ¿Se va al Tribunal o se viene a la Asamblea?”, en fin, todas esas combinaciones, con la base de la competencia o jurisdicción triangular. Y se puede, una vez que se ha denunciado ese riesgo, entregarse y decir: “Habrá contradicción: ¡paciencia!, mala suerte”. Se habrá creado nuevas jurisdicciones a sabiendas de que son innecesarias, o de que no se puede llegar a ellas. El pueblo “tragará” esto como una conquista de la nueva Constitución: pero, en los hechos, se van a encontrar con que pasan los sesenta días, después de los cuales el órgano, siempre que la Asamblea diga que es inconstitucional, resolverá en el sentido de que es ajustado al derecho, a la Constitución, o viceversa. Todo quedaría aquí: en este órgano que muchos señores diputados, como el señor diputado Flores —que dijo que no lo citara como autor; pero éste es uno de los casos en que tengo que mencionarlo— pelearon tenaz y denodadamente para que no interviniera en esta clase de recursos, para que se volviera al régimen anterior, que daba competencia a la Cámara de Representantes, bastante menos remisa que esta Asamblea General para constituirse para considerar y resolver el recurso dentro de los términos que se le fijaban.

Creo que en lugar de entregarnos resignadamente a decir que la Constitución es contradictoria y nos coloca en un callejón sin salida, que vamos a tener que aceptar, como de recibo constitucional, decisiones totalmente contradictorias, radicalmente encontradas, creando un verdadero caos en muchas situaciones, parece que es deber del intérprete de encontrar el camino de la armonización.

SEÑOR ECHEGOYEN. — ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYLEY. — Ahora que estaba por encontrar el camino de la retirada, que iba a ser tan festejado por todos: el camino de que nos fuéramos...

Pero le concedo la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ECHEGOYEN. — Es para decir que no era exacta la invocación que el señor senador hiciera, refiriéndose a la que yo expresara con respecto a la opinión del doctor Jiménez de Aréchaga.

SEÑOR BAYLEY. — No tanto como que no era exacta. Yo dije que no era tan así la opinión.

SEÑOR ECHEGOYEN. — Me considero en el deber de citar la fuente original de donde extraje mi aseveración.

El doctor Jiménez de Aréchaga, comentando el artículo 260, que es el que establece esa disposición, dice: “Yo no tengo dudas en cuanto a que el hecho de que sobre un decreto de una Junta, la Asamblea General se pronuncie en el sentido de su constitucionalidad, no obsta en manera alguna a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia, posteriormente, declare que ese acto es inconstitucional”.

Y concluye el comentario del artículo diciendo: “Pero siempre queda la otra posibilidad: la de que a pesar de que haya un pronunciamiento expreso de la Asamblea General en el sentido de que el decreto municipal es conforme a la Constitución, un fallo ulterior de la Corte establezca lo contrario”.

Digo esto nada más que para demostrar la corrección de la cita que yo había hecho.

SEÑOR BAYLEY. — Yo no intenté —ni podía hacerlo, tratándose de un legislador—, agraviar a nadie; no ha estado en mi pensamiento, y muy particularmente por tratarse del señor senador Echegoyen queda descontado que no he tenido ni tengo la intención de atribuirle un acto incorrecto. He dicho que no es tan así, y lo reitero. Porque no es a expensas de la lectura de ese sólo párrafo que ha formado opinión sobre la posición de la cátedra;

la he formado de la lectura de esos libros que he mandado buscar —porque son dos tomos distintos que tratan estos temas y hay que conectarlos; no basta con leer uno solo de ellos—, estudiando tanto lo referente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como los Gobiernos Departamentales, como la parte de la inconstitucionalidad de las leyes.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Aquí están los dos tomos.

**SEÑOR BAYLEY.** — Pero aún con todo el material a la vista no llegó a la conclusión del doctor Echegoyen.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Yo no abro juicio sobre esa opinión.

**SEÑOR BAYLEY.** — Usted la señala como abonando su tesis.

**SEÑOR ECHEGOYEN.** — Lo que quiero decir es que, habiendo invocado yo una opinión de la cátedra frente a una objeción del señor senador Grauert, me parecía que estaba en el deber de citarla textualmente sin abrir juicio sobre ella, en lo que respecta a la uniformidad de los fallos, desde que se había hablado de la necesidad de que no hubiera contradicción entre los fallos. Como eso formaba parte de la argumentación del señor senador Grauert, quise demostrarle que había quien entendía que, a pesar del nuevo texto constitucional, subsistía la posibilidad de fallos contradictorios.

Era nada más que eso.

**SEÑOR BAYLEY.** — Es natural. Según esta opinión, nos hemos estado gastando en una controversia totalmente inútil, porque vamos a llegar a la misma conclusión.

Estaba destacando que no había pasado desapercibido a muchos diputados y senadores, en ocasión de considerarse el proyecto de reforma constitucional, que esta mayor creación de jurisdicciones, no constituía por sí sola una garantía de acierto, porque no se habían clarificado y ordenado los disposiciones de manera suficiente para impedir ese resultado. Lo dijeron diputados que he mencionado antes, y lo contestó, según ya lo dije, no de manera satisfactoria, uno de los miembros informantes.

Lo que quiero decir cuando me refiero a la opinión de la Cátedra, es que ésta no creo tampoco que haya juzgado aclaradas y delimitadas con precisión las competencias, y recuerdo que se menciona allí un caso, a propósito del artículo 260 o de una expresión que utiliza la Constitución, en alguna otra parte, cuando habla de decretos de los Gobiernos Departamentales con fuerza de ley, etcétera. Entonces pregunta el doctor García Pintos a qué leyes o decretos departamentales se refiere; si es a los que tienen el contenido de la ley o a los que tienen también la envoltura material —usaba la palabra "material"— de las leyes; es decir, a su arquitectura.

Y uno de los miembros informantes —y ahora no me refiero al señor senador Ferrer Serra para que no parezca que me personalizo con legisladores que hace un momento estaban en Sala y ahora no están—, uno que ya no está en el país, el doctor Ciasullo, por toda explicación le dice: "Eso es", y sigue adelante.

La índole de los decretos de los Gobiernos Departamentales que el constituyente, desde el punto de vista de la declaratoria de inconstitucionalidad asimila a las leyes, es esa para la que el doctor García Pintos proponía que se refiriera al elemento material.

No quedó en la reforma constitucional la enmienda, a pesar de haberse manifestado que se aceptada, y sigue el texto sin explicarse suficientemente.

Yo desembocaba, cuando el señor senador Echegoyen trajo esa referencia un poco con efecto retroactivo para referirse a una expresión del doctor Grauert que me ha quitado un poco del punto en que me encontraba, diciendo que frente a tantas dificultades, frente a evidentes contradicciones, yo me había afiliado a la tesis no de resignación, de quietismo, abúlica, de dejar correr las disposiciones o de dejarlas amontonar y decir: "Que se arreglen los que quieren impugnar por inconstitucional o ilegal, sea una ley o un decreto del Gobierno Departamental, o sea un acto administrativo, o que vayan dando golpes en todas las puertas hasta que alguna se abra o les dé satisfacción". Me parece que es deber del intérprete, frente a un caso concreto, actuar en otras condiciones de serenidad, tratando de armonizar y encontrar sentido congruente a las disposiciones aunque parezcan absolutamente contradictorias.

No hice ninguna cosa original, porque me apoyo, principalmente, en esas frases sueltas, en esos pasajes aislados que he encontrado a lo largo de la discusión de los textos constitucionales.

Recordaba hace un momento que hubo un legislador que dijo —y creo que lo repita Jiménez de Aréchaga—: ¿qué actos no son de la competencia del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo? ¿Cuáles pueden ser los decretos de las Juntas Departamentales o las resoluciones de los Concejos que puedan escapar a las posibilidades de apreciación o consideración por parte del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo? ¿En qué casos el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo podría decir que en determinado

asunto no entra a conocer, que se declara incompetente?

El doctor Ferrer Serra hizo una especie de enumeración de las situaciones que abren la vía al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, diciendo que hay actos de Gobierno, y actos que son puramente administrativos. Los actos de Gobierno no dan lugar a que intervenga el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo; son los actos puramente administrativos. Primera distinción. Luego, dentro de los actos administrativos, dice que entran todos aquellos que, siendo definitivos, son contrarios a la regla de derecho, o se aplican con abuso o desviación de poder.

¿Cuáles son los actos contrarios a la regla de derecho? (aquí empiezan las enumeraciones del miembro informante, y, en lugar de aclararse, se ahonda en la confusión). En primer término, la Constitución, que es la regla de las reglas; luego, la ley, el reglamento y alguna otra cosa que no recuerdo en este momento, pero que podrían ser las resoluciones especiales y concretas, como, por ejemplo, el caso de un ascenso que se niega. Esta primera interpretación, como digo, agrava o ahonda las dificultades. ¿Por qué? Porque en la Constitución, en la parte referente al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, nos encontramos, al final de todo, con un precepto que dice que en las contiendas de competencias, o en las dificultades —es ésa la palabra que utiliza— entre poderes del Estado, Municipios, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos, o entre estos órganos o entre integrantes de Concejos y Directorios, es competente el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo. Pero agrega que, en toda contienda fundada en la Constitución, entiende la Suprema Corte de Justicia. Es claro que estamos en el dominio de las contiendas, no de las leyes inconstitucionales.

En esa disposición parece haber hecho pie el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, según se informara en la Comisión por algunos de los compañeros, para sacarle el cuerpo a todo lo que esté fundado en la Constitución, como si eso fuera privativo de la Suprema Corte de Justicia y, si se quiere, también de la competencia de la Asamblea. Pero es una interpretación que no autoriza, tratándose de actos de los Gobiernos Departamentales, el artículo 303, que especialmente regula la competencia y el régimen de los recursos contra los decretos de los Concejos Departamentales; si son contrarios a la Constitución o a las leyes, y no son susceptibles de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, serán apelables ante la Asamblea General.

Entonces, es realmente difícil, como lo destacaba, entre otros, el señor senador Manini Ríos en su extenso discurso sobre la reforma pronunciado en el Senado, concebir un solo caso de resolución del Concejo Departamental o de decreto de la Junta en que no se pueda acudir al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, imputando inconstitucionalidad o ilegalidad.

Se dirá que no puede concurrir cualquiera; que tiene que ser el titular de un interés directo, personal y legítimo. Es cierto; pero cuando se habla de "el titular" no quiere decirse, porque se emplee el singular, que ha de ser una sola persona, que es una gestión necesaria y fatalmente individual del perjudicado, ante el Tribunal. Pueden ser órganos públicos, del Gobierno Nacional o Municipal; puede ser también, aunque aquí se ha dicho otra cosa, el interés directo, personal y legítimo invocado por un particular cualquiera, aunque no se haya causado daño alguno sobre su patrimonio. Y puede serlo en función de dos cosas: en primer lugar, en función de que la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede terminar con una declaración de nulidad, dejando sin efecto el acto; y en razón de que puede ocurrir que, sin declarar la nulidad, reserve la acción de resarcimiento o de reparación, o abra el contencioso de reparación, lo que quiere decir que puede no haber daño directo patrimonial, y el procedimiento se anula.

Puede ocurrir también, como se dijo aquí, en el recinto de la Cámara de Diputados, que no obstante no declararse la nulidad y abrirse la acción de resarcimiento, no haya luego sentencia de la Justicia Ordinaria mandando resarcir, porque para ello es menester que se justifique que se ha causado un daño. Hubo diputados que dijeron que esa reserva del Tribunal de lo Contencioso significaba negarse a la reparación; otros dijeron que no se podrá llegar a dar entrada a la acción. Pero una cosa es dar entrada a la acción, y otra condenar a la reparación. Quiere decir, que, con reparación o sin ella, con ánimo de tener resarcimiento o sin él, se puede ir al Tribunal. O sea, que en función del artículo 311 de la Constitución, cuyo apartado final se ha citado tantas veces, puede ocurrir que, incluso invocando un daño directo y el derecho a un resarcimiento a su patrimonio, el Tribunal diga que no hay daño directo, que no hay nada que resarcir, pero que, en defensa exclusiva de la regla de derecho o de la buena administración, declara nulo el acto; y como consecuencia de la declaración de nulidad, será imposible de aplicarlo.

A ese efecto, no se ciñe al caso particular, sino que es un efecto general y absoluto, frente a todos.

De modo que es difícil advertir algún caso de decreto de las Juntas Departamentales o resolución de los Concejos que no entre en esa bolsa tan amplia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra el cual quede cerrada toda posibilidad de gestión ante dicho Tribunal.

¿Qué queda, entonces, para la Asamblea General? La primera reflexión que podemos hacernos es la de que están equivocados todos los que piensan que no queda nada para la Asamblea, porque sería atribuir al constituyente una torpeza tan grosera que sería prácticamente inconcebible. ¿Cómo va a ser que organice a texto expreso una competencia de la Asamblea General, para que no tenga contenido, para que sea totalmente imposible utilizar esa competencia o acudir a esa jurisdicción? Tiene que tener un contenido; por grande que sea la posibilidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de asumir competencia, algo tiene que quedar para la Asamblea General. ¿Y la inconstitucionalidad?

Apartándome un poco del derrotero seguido por el señor diputado Bayley, recordaría que en materia de inconstitucionalidad hay un texto expreso que da la competencia a la Suprema Corte de Justicia. En esta materia puede ocurrir que ese artículo 311, inciso 2º, cuando habla de la defensa del solo interés de la norma de derecho, incluya como tal a la Constitución, como lo decía el doctor Ferrer Serra en su explicación en la Comisión de los Veinticinco.

Pero todavía es posible que quede algo para la Asamblea. Otra vez el señor senador Ferrer Serra es quien contribuye a marcar el camino: el acto de Gobierno y el acto de lesión; el acto referido al particular y el acto referido a nadie singularmente, sino que va a alcanzar a todos los administrados y fundamentalmente eso que él llamó en una jerga un poco pintoresca y propia, "el recurso político jurisdiccional".

Eso puede abrir un camino, y la pertinencia o la posibilidad de que se abra ese camino para la Asamblea General en una zona de competencia incuestionable, la abonan los hechos ocurridos en esta misma Asamblea General durante la vigencia de la nueva carta.

Hace algunos meses la Asamblea General resolvió, sin discrepancia alguna, por unanimidad de presentes, en solo dos minutos, no hubo más que el tiempo de votar el informe casi unánime de la Comisión de Legislación de la Asamblea, que lucía una discordia del señor senador Echegoyen y del señor diputado Pons, que se refería no al fondo del problema, sino a si el recurso tenía el número de firmas que la Constitución reclama; si se había interpuesto por el tercio real de voluntades de miembros de la Junta o si había dos o tres ediles que firmaban por solidaridad, o para ver qué pasaba, para ver qué dice la Asamblea, pero sin alzarse contra la decisión. Entonces, la Asamblea General resolvió declarar contrarias a la Constitución y a las leyes las designaciones hechas por el Concejo Departamental de Artigas y la anuencia prestada por la Junta Departamental para integrar en determinada forma los Concejos locales de cuatro o cinco localidades de aquel Departamento.

¿Qué materia se había planteado a la Asamblea? ¿Por qué no fué dudosa su competencia prescindiendo de esa reserva sólo de orden formal planteada en las discordias de los señores legisladores Echegoyen y Pons? Un asunto típicamente político: forma de constituirse los órganos de Gobierno Departamental, integración de cuerpos esencialmente políticos que debían ser en su integración reflejo o expresión de la representación de las fuerzas políticas en el seno de la Junta Departamental de la misma jurisdicción. Este es el primer caso.

Segundo caso: Este tema de la forma de integración de los Concejos locales no fué planteado únicamente en Artigas. Llegaron a la Asamblea General recursos interpuestos por el tercio de los miembros de las Juntas de San José, de Treinta y Tres y otros recursos de Artigas, por otro caso —al que me referiré después— y no sé si de algún otro Departamento.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Pido la palabra para una cuestión de orden.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor diputado.

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Hago moción para que se haga un cuarto intermedio por el término de quince minutos.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — A consideración.

**SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA.** — ¿Con qué objeto?

**SEÑOR VASCONCELLOS.** — Con el fin de que descansen algunos señores legisladores.

(Murmullos).

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Yo le pedí al señor Diputado

Vasconcellos que hiciera esa moción en virtud de un pedido del médico de la Casa, para que diera un descanso al doctor Bayley.

Se va a votar.

(Se vota).

— Ochenta y cinco y cinco: **Afirmativa.**

La Asamblea pasa a intermedio.

(Así se efectúa a la hora 0 y 55 del día 19).

— Continúa la sesión.

(Es la hora 1 y 17).

**SEÑOR GRAUERT.** — Pido la palabra para una cuestión de orden.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor senador.

**SEÑOR GRAUERT.** — Yo desearía saber si hay algún otro orador inscripto para ocuparse de esta cuestión previa que estamos discutiendo.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — No, señor senador.

**SEÑOR GRAUERT.** — Entonces, haría moción para que inmediatamente que termine el señor senador Bayley, votáramos el punto.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tengo entendido que el señor diputado Dubra se iba a ocupar de la cuestión previa.

**SEÑOR DUBRA.** — Yo iba a hacer una moción, señor Presidente, pero quería fundamentarla.

**SEÑOR GRAUERT.** — En el supuesto de que no hubiera otro orador anotado, iba a proponer que se votara esta cuestión previa inmediatamente después que termine de hablar el señor senador Bayley, y que pasaríamos a intermedio hasta luego a la hora 19 y 30.

(No apoyados. — Murmullos. — Campana de orden).

**ARIOS SEÑORES LEGISLADORES.** — ¿Cuándo vence el plazo?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — La Mesa informa a la Asamblea que el plazo vence el 22 del corriente.

(Murmullos).

— A consideración de la Asamblea la moción formulada. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

**ARIOS SEÑORES LEGISLADORES.** — ¿Qué se vota?

**SEÑOR GRAUERT.** — Si para ocuparse de este aspecto previo no hay otros oradores inscriptos...

**SEÑOR PRESIDENTE.** — No los hay.

**SEÑOR GRAUERT.** — ... la moción consiste en que votemos este aspecto en cuanto termine el señor senador Bayley, pasando a intermedio hasta luego a las 19 y 30, de tal manera que permitamos que las respectivas Cámaras celebren sus sesiones ya fijadas. La asamblea continuaría sesionando a la hora 20, ya que se reúne media hora después de la fijada en la citación.

**SEÑOR SILVA.** — La moción debería ser hecha después que termine el señor senador Bayley. Como anuncio está bien, pero no como moción.

**SEÑOR DUBRA.** — ¿Me permite, señor Presidente?...

Yo iba a hacer uso de la palabra, precisamente, para formular una moción igual a la del señor senador Grauert, es decir; que se vote que la Asamblea tiene competencia para considerar la ordenanza impugnada. Luego, no habría inconveniente por parte de nuestro sector en que se votara un intermedio para el día de hoy, a la hora que se disponga.

**ARIOS SEÑORES LEGISLADORES.** — ¿Qué se vota?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Se va a votar la moción formulada.

**SEÑOR SILVA.** — Es condicionada; no se puede votar. (Murmullos).

**SEÑOR BELTRAN.** — ¿En qué consiste la moción?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — En que inmediatamente después que termine el señor senador Bayley, la Asamblea se pronuncie sobre si tiene o no competencia para entender en el asunto, pasándose luego a intermedio hasta hoy a las 19 y 30.

**SEÑOR VIDAL ZAGLIO.** — Señor Presidente: a mí se me ocurre que el señor senador Grauert podría postergar su moción, esperando hasta que termine el señor senador Bayley, porque votar una moción supeditada al tiempo que pueda hablar el orador y que después interprete la Mesa que llegó el momento de levantar la sesión, no me parece prudente.

(Apoyados).

—Escuchemos al señor senador Bayley hasta que termine después votaremos o no la moción del señor diputado Grauert.

**SEÑOR GRAUERT.** — No tengo inconveniente.

**SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA.** — Se le podría rogar al señor senador que abrevie.

(Murmullos).

**SEÑOR BAYLEY.** — Si votamos el cuarto intermedio, por complacerlo hasta renuncio a seguir hablando. Estoy muy fatigado y hasta he acudido a medicamentos para poder proseguir. En realidad, hice una exposición demasiado desordenada. Seguramente no he agotado el tema ni lo he presentado con acierto, lo que en buena parte se debe a que no tenía formado el propósito de hablar. Sólo porque se hizo referencia a opiniones mías vertidas en la Comisión de Legislación, me creí obligado a intervenir contrariando la prescripción médica perjudicándome, en mi salud más de la cuenta, pero no quería que pudiera quedar aquí la sensación de que yo había planteado en la Comisión de Legislación de la Asamblea una cuestión de carácter previo con el solo fin de entorpecer o dificultar la consideración del recurso; sino que motivos muy poderosos movieron mi ánimo al hacerlo, y me había creado grandes dificultades la interpretación de los textos constitucionales manejados.

Reitero que hubiese preferido que este planteamiento se hubiera hecho en circunstancias en que la Asamblea no estuviera apremiada por la inminencia del vencimiento del plazo, para expedirse en determinado recurso.

Volviendo a la cuestión de la competencia del órgano, al margen totalmente de la situación de CUTCSA, con CUTCSA o sin ella, con Concejo Departamental o sin él, para saber a qué atenernos definitivamente, hace unos minutos yo señalaba mis esfuerzos para tratar de encontrar una coordinación en este maremagnum de las competencias y del funcionamiento de los diversos órganos a que alude la Constitución.

Estaba examinando lo ocurrido en la Asamblea General en los últimos tiempos: competencia no discutida, no observada por nadie, ni en el seno de la Comisión de Legislación de la Asamblea ni en esta misma, cuando se interpuso ante ella recurso de apelación contra las decisiones y la anuencia de la Junta Departamental de Artigas, y las designaciones hechas por el Concejo de ese Departamento para integrar los Concejos Locales.

Nadie discutió que era un caso claro de competencia de la Asamblea; a nadie se le ocurrió observar esa competencia. Luego, producido el pronunciamiento unánime declarando contrarias a las Constitución y a las leyes las resoluciones y la anuencia mencionadas, esa actitud de recurrentes se repite en diversas Juntas Departamentales: la de San José, la de Treinta y Tres y no puedo asegurar si la de Colonia. Y esos tres recursos relativos a la misma materia sobre los cuales tampoco se suscitaron en la Comisión de Legislación dudas de ninguna especie en cuanto a la estricta competencia de la Asamblea General para resolverlos, cayeron, digamos, en lo que parece ser la jurisprudencia dominante en la Asamblea: el vencimiento del término sin estudiar el recurso.

En este aspecto la situación suele a veces agravarse, porque el término llega sin que ni siquiera la Comisión de Legislación se expida; —como en este caso, en que no pudo hacerlo no obstante su empeño,— o sin que la Comisión se reúna, como se señalaba precisamente al impugnar la reforma introducida en la última Constitución, sustituyendo a la Cámara de Representantes por la Asamblea General para conocer en esta clase de recursos.

Tercer antecedente de esta Asamblea. Un tercio de los Ediles de Artigas dedujo apelación ante la Asamblea General contra una resolución de la mayoría de la Junta que validó todas las resoluciones y decretos dictados por la Junta Departamental durante un período determinado; no sé si era del 15 de febrero hasta el 15 de abril, o fines de abril; dos meses o dos meses y medio de actuación. El fundamento para aducir la inconstitucionalidad de la situación, o la ilegalidad de la situación —también inconstitucionalidad, se decía— resultaba de haber actuado la Junta Departamental con una integración distinta de la que según la Constitución y leyes electorales aplicables correspondía.

Se había proclamado por la Junta Electoral y convocado luego por la Junta Departamental, a dos o tres Ediles suplentes para integrar el Cuerpo por renuncia de dos o tres titulares. El Organismo Electoral Departamental, la Junta Electoral no advirtió que no eran esos los suplentes que había que convocar, sino otros de otras listas. La Junta Departamental tampoco advirtió, o en su seno no se observó la forma de integración de la Junta, y bastante tiempo después la Corte Electoral, en ejercicio de la superintendencia que le compete, advirtió que habían sido indebidamente convocados o proclamados esos suplentes, en lugar de otros que estaban en la situación que, según la Constitución y las leyes, los habilitaba para formar parte de la Junta.

Se produjo entonces la sustitución de titulares en la

Junta Departamental de Artigas, y un tercio de ésta impugnó todas las decisiones adoptadas por el Concejo, cuestionó la validez de todos los actos, decretos y resoluciones de la Junta que habían sido adoptados con esos titulares que no podían integrarla.

La mayoría de la Junta, un día dicta un decreto escueto, sin fundamentación muy especial, que da validez a todo lo actuado por la Junta durante ese período que estuvo ilegalmente integrada, y el tercio de la Junta apeló, al parecer, sólo contra ese decreto.

En la Comisión de Legislación de la Asamblea, el doctor Echegoyen, Presidente de la misma, redactó un proyecto de informe al que hizo referencia el doctor Balay en su discurso de esta noche, en el cual sostuvo esta tesis —lo que da jerarquía a través de su pensamiento tan altamente considerado por todos en especial en estas materias:— que la Asamblea General no podía tratar ese recurso; porque si bien estaba aparentemente, formalmente, dirigido a impugnar un decreto de la Junta Departamental —el que validaba todo lo actuado— en realidad lo que estaba en cuestión era la validez o nulidad de docenas de actos, de resoluciones, de decretos de esa misma Junta, cuyo contenido no se conocía por la Asamblea General ni por su Comisión de Legislación, lo que hacía imposible discernir, cosa muy importante y que con toda razón lo señalaba el doctor Echegoyen, porque afectaba nada menos que a la competencia de la Asamblea General impidiendo orientarse o saber si los decretos y resoluciones de la Junta dictados durante ese período de dos meses o dos meses y medio, abrían o no recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y exponían a la Asamblea a usurpar o a invadir competencias propias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; que podían ser privativas de ese Tribunal y no de la Asamblea General.

Ese informe del doctor Echegoyen fué compartido, mediante casi imperceptibles ajustes de redacción, por la casi totalidad de los miembros de la Comisión de Legislación de la Asamblea.

Ese informe se concretaba, en lo dispositivo, a no dar curso a la apelación interpuesta, en razón de no ser cometido de la Asamblea, ni de su Comisión, entrar a discriminar, entre un montón no individualizado de actos de la Junta, lo que impedía saber si el recurso era materia propia de la competencia de la Asamblea o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Quiere decir, entonces, que la experiencia hasta ahora recogida en las actuaciones de esta Asamblea General, nos lleva a caracterizar como situaciones típicas, no capaces de provocar ninguna duda u objeción en cuanto a la competencia de la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, obrando con poderes típicamente jurisdiccionales, las situaciones en que se trata de materia política, como en estos casos que se han planteado, relativos a la forma de integración de cuerpos del engranaje político gubernamental del país.

Eso no ha provocado ninguna duda.

En cambio, ha provocado dudas y ha llevado por lo menos a la Comisión de Legislación a aconsejar en forma casi unánime, o unánime, por lo menos sin mención expresa de discordia o discrepancia, que es de mucha importancia cuidar las competencias que hay que estar seguros de que el asunto sometido a la decisión de la Asamblea o materia del recurso es de competencia de la Asamblea, para no exponerla a invadir competencias o tomar atribuciones, o arrogárselas, propias de otros órganos, en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Y, la importancia del problema de la competencia, al poner en primer plano el tema de la competencia de la Asamblea, también quedó en evidencia en otro asunto de los tratados por la Asamblea General no hace mucho tiempo; y que también recordó el doctor Balay.

Cuando ante la Asamblea se planteó el tema de la remoción de delegados del Partido Nacional en la Corte Electoral, de representantes partidarios, recuerdo que en medida tal vez no menor que la de hoy, pero que puede determinar que ustedes las tomen para privarme el acceso a la Asamblea cuando se trate de estos asuntos yo desarrollé la tesis de la incompetencia de la Asamblea para resolver la cuestión.

No diré que fué la tesis triunfante, porque no sé si se tomaron esas palabras en el momento de darse forma a la moción votada, pero, prácticamente, el resultado fué ése: que la Asamblea General siguió con su procedimiento, que estaba ya en trámite ante la Mesa de la misma, para ir a la remoción o sustitución de esos titulares.

De manera que a través de la actuación de este Cuerpo, en media docena de asuntos, tal vez todos los que ha tenido en sus manos en estos últimos tiempos, en todos se ha hecho cuestión fundamental, ha provocado especial atención de la Comisión de Legislación, de sus informantes y durante los debates que se han producido, el tema de las competencias.

Me parece todo esto muy plausible. Sería mucho mejor, naturalmente, desarrollar las respectiva tesis dentro de la brevedad de que es tan devoto partidario nuestro distinguido colega el señor Senador doctor Rodríguez Larreta, pero a veces las dificultades que se le presentan a quienes no están muy bien dotados para desarrollar rápidamente sus ideas, son superiores al menguado poder de síntesis que puede tener un expositor.

No he tenido más remedio que hacer un desarrollo excesivo, contra todo mi gusto, pero quiero concluir expresando que si con toda lealtad, con propósito de total colaboración, de contribuir al esclarecimiento de un tema complejo, arduo, y de gran importancia, yo llevé a la Comisión de Legislación de la Asamblea mis dudas iniciales sobre el tema, en ningún momento, durante el largo proceso de deliberación habido en la Comisión de Legislación, hice cuestión de torpeza, obstinación, vanidad o amor propio, que no tendrían sentido para mantenerme en la posición.

Mi deseo fué salir de esa situación de dudas. Y debo decir —y seguramente esto no me favorece— que la, como siempre, muy ilustrativa y enjundiosa exposición del señor senador Echegoyen, y la discrepancia que accidentalmente señalaron contra la tesis que defendiendo, algunos compañeros muy dignos y muy capaces de la Comisión, no alcanzaron, seguramente por incompreensión, por insuficiencia de mis posibilidades de comprensión, a sacarme de la duda; y que, ahondando en el estudio de los textos, y acudiendo a opiniones más autorizadas que las mías, seguramente, a opiniones de quienes intervinieron en el proceso de la elaboración de la Constitución y detuvieron su atención, su pensamiento y sus críticas sobre estas disposiciones que hoy manejamos, me han llevado, cada vez con mayor decisión, a la plena convicción de que, por encima del caso particular, por encima, en absoluto de la consideración del caso particular en examen, ésta es la tesis a sostener, la tesis más congruente con la Constitución, la única que permite armonizar todos sus textos y que nos libra del despropósito de creer que existen jurisdicciones y competencias a las que no será posible acudir jamás armadas y levantadas como en broma, y sin sentido, en medio de un gran boato y de gran énfasis.

Es la única, además, que nos libra de sentencias contradictorias y que nos libra también de que se aplique el Poder Legislativo a funciones o cometidos que pueden no serle propios, dejando la gran masa, diríamos, el mayor volumen y número de asuntos o de recursos interpuestos contra decisiones de las Juntas y de los Consejos Departamentales, al Tribunal de lo Contencioso, sin perjuicio de los que corresponden a la Suprema Corte de Justicia.

Y una mínima parte, para que conserve algún sentido el precepto de la parte final del artículo 303, a la Asamblea General, circunscribiendo su intervención a los casos de interés político, en el buen sentido de la expresión, a la materia típicamente política, como dijo el Dr. Ferrer Serra, estando dentro de las que él llamaba el contencioso, o recurso político jurisdiccional, o algo así.

Concluyo, señalando que podría, a través de los antecedentes que no he podido indicar hoy con orden y precisión, indicarse también...

**SEÑOR TEJERA.** — Pido la palabra para una cuestión de orden.

**SEÑOR BAYLEY.** — Ya termino, señor legislador.

...por encima del caso particular, quiero señalar una directiva para los curiosos o para los que hayan dejado de serlo porque lo conocen todo, que al discutirse esta Constitución, a propósito de dos o tres disposiciones relativas a atribuciones a los Ediles, y luego a la Junta, del derecho de pedir informes y llamar a Sala a los Consejales, disponer investigaciones, y nombrar Comisiones Investigadoras en la Administración Municipal, en el momento de elaboración de la Constituyente se replanteó el problema —y otra vez vuelvo a citar al señor diputado Flores— de si el Parlamento podía intervenir por la vía del pedido de informes, de la investigación, etc., en materia municipal.

Entonces, recuerdo que algunos señores diputados: Flores, Brena, Puig, sostuvieron el derecho del Parlamento a investigar en toda materia; pero, junto a esas opiniones respetables, o frente a ellas, se expusieron opiniones también respetables, emanadas de legisladores muy capaces y competentes, recuerdo entre otros a los doctores Malet y Clasullo, y otros más, que dijeron, categóricamente, que, si a partir de la Constitución de 1917 era claro que el Parlamento no podía intervenir en materia municipal, mucho más claro resultaba después de esta reforma de 1951.

Dejo esto anotado así en forma desordenada, y si alguien se preocupa de estos textos, podría ser un argumento coadyuvante, en caso de encontrar prevalencia la tesis que inhi-

biría al Cuerpo Legislativo de estas intervenciones en materia municipal; sería más congruente con la tesis de la incompetencia de la Asamblea General para entender en estos recursos en materia municipal.

Perdone la Asamblea este final tan desordenado, y muchas gracias.

(¡Muy bien!)

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Ha llegado el momento de votar la moción del señor legislador Grauert para que la Asamblea continúe solamente para votar el problema de la competencia de la Asamblea para resolver el asunto, y el pase a intermedio hasta luego a las 19 y 30.

**SEÑOR DUBRA.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor Diputado.

**SEÑOR DUBRA.** — Voy a proponer una moción concreta: que la Asamblea se declare competente para entender en la apelación de la Ordenanza, y que después se vote si se continúa o no con el debate.

(Apoyados)

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Se va a votar la moción presentada por el señor Diputado Dubra en el sentido de que la Asamblea se declare competente para entender en estas actuaciones.

(Se vota: 66 en 83: Afirmativa)

— Está a consideración la moción formulada por el señor senador Grauert para que la Asamblea pase a intermedio hasta hoy a las 19 y 30.

**SEÑOR DUBRA.** — Pido la palabra.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor diputado.

**SEÑOR DUBRA.** — Yo sugeriría, si no hubiera inconveniente de parte del señor senador Grauert y de los otros integrantes del Cuerpo, que se anticipara la hora, porque no será difícil que el debate se vuelva a hacer largo, y que lleguemos hasta las horas de la madrugada. Me parecería prudente que se fijara, por ejemplo, las 18 horas.

**ARIOS SEÑORES LEGISLADORES.** — Hay sesión de Cámara.

**SEÑOR DUBRA.** — Precisamente tengo en cuenta eso que la Cámara de Representantes tendría hoy una laboriosa sesión para estudiar la Rendición de Cuentas. Y creo que no podremos realizar esa sesión, a los efectos de que todos vengamos a considerar el tema que se plantea en la Asamblea General, sin tener que dispersarnos actuando en la Cámara en el asunto de la Rendición de Cuentas, y una hora después en un asunto de la entidad del que estamos considerando. Por eso sugeriría la hora 18.

**SEÑOR GRAUERT.** — ¿Me permite, señor Presidente?

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Tiene la palabra el señor legislador Grauert.

**SEÑOR GRAUERT.** — Señor Presidente: yo lamento no poder acceder al pedido del señor diputado Dubra, pero al proponer la hora 19 y 30 he tenido en cuenta que en la tarde de ayer en el Senado y por moción precisamente del señor senador Cardoso, se resolvió tratar con carácter de urgente el proyecto sobre Fondo de Fomento Ganadero, por las razones que se expusieron por diversos señores senadores en Sala. Lo que quiere decir que es posible que en el Senado, reuniéndose a la hora de costumbre, hasta las 19 y 30 o 20 horas, con la media hora que marca el Reglamento, podamos tratar el proyecto del Fondo de Fomento Ganadero en el Senado, y la Cámara de Representantes podrá iniciar el estudio de la Rendición de Cuentas.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Se va a votar la moción del señor senador Grauert.

(Se vota: 50 en 93. — Afirmativa)

**ARIOS SEÑORES LEGISLADORES.** — Que se rectifique la votación.

**SEÑOR PRESIDENTE.** — Se va a rectificar la votación.

(Se vota: 48 en 93. — Afirmativa)

— La Asamblea pasa a cuarto intermedio hasta las 19 y 30.

(Así se efectúa a la hora 1 y 51)

**LEDO ARROYO TORRES,**  
Presidente.

José Pastor Salvañach — Mario Dufort y Alvarez  
Secretarios

Francisco Gagliardi.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos  
de la Cámara de Representantes.

# **“DIARIO OFICIAL”**



**FUNDADO POR DECRETO DE 8 DE MAYO DE 1905**

**Para la publicación de las leyes, decretos y demás documentos emanados de los Poderes Públicos, así como de las informaciones y avisos oficiales que conviene divulgar.**

**Inserta en sus columnas las versiones oficiales de las sesiones de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General y resoluciones del Poder Judicial.**

## **SUSCRIPCIONES**

(Decreto 22 de marzo de 1955)

**Retirando los ejemplares en la Oficina**

Por semestre .....	\$ 12.00
Por año .....	" 24.00

**Reparto a domicilio**

Por semestre .....	\$ 18.00
Por año .....	" 36.00

(Incluye \$ 1.00 que se entrega mensualmente al repartidor por la distribución de los ejemplares).

**Interior y Exterior**

Por semestre .....	\$ 18.00
Por año .....	" 36.00

**Oficinas: Calle Florida 1178**

**Teléfonos: 8-33-71 y 9-59-25**

# DIARIO OFICIAL

## SECCION AVISOS

TOMO 201

Montevideo, Viernes 16 de Diciembre de 1955

Núm. 14696

### TARIFAS

#### AVISOS

(Ley 16 de octubre de 1950)

Edictos judiciales y avisos en general:

- A) Hasta 1 publicación, cada 25 palabras, por día ..... \$ 0.80  
Hasta 5 publicaciones, cada 25 palabras, por día ..... " 0.60  
Por más de 5 publicaciones, cada 25 palabras, por día ..... " 0.40  
B) Avisos matrimoniales ..... " 2.00  
C) Balances, por cada línea de columna chica, o su equivalente ..... " 0.60

#### SUSCRIPCIONES

(Decreto 22 de marzo de 1955)

Retirando los ejemplares en la Oficina

Por semestre ..... \$ 12.00  
Por año ..... " 24.00

Reparto a domicilio

Por semestre ..... \$ 18.00  
Por año ..... " 36.00

(Incluye \$ 1.00 que se entrega mensualmente al repartidor por la distribución de los ejemplares).

Interior y Exterior

Por semestre ..... \$ 18.00  
Por año ..... " 36.00

Las Oficinas Públicas que atrasen el pago de las suscripciones injustificadamente, serán privadas del servicio.

#### REGISTRO NACIONAL DE LEYES

(Editado por Diario Oficial)

1908 .....	\$ 3.00	el tomo
1930 a 1932 .....	" 8.00	" "
1933 .....	" 50.00	" "
1934 a 1937 .....	" 8.00	" "
1939 y 1940 .....	" 8.00	" "
1942 .....	" 50.00	" "
1943 .....	" 20.00	" "
1945 .....	" 8.00	" "
1947 .....	" 6.00	" "
1948 y 1949 .....	" 8.00	" "
1951 .....	" 10.00	" "
1952 .....	" 10.00	" "
1953 .....	" 16.00	" "
1954 .....	" 10.00	" "

#### EJEMPLARES

(Decreto 22 de marzo de 1955)

Por día .....	\$ 0.15
Atrasados .....	" 0.25
De más de un mes .....	" 0.50
" " " año .....	" 1.00
" " " tres años .....	" 2.00
" " " cinco años .....	" 5.00
" " " diez años .....	" 10.00

Por ejemplares agotados se entregan copias microfilmadas.

De acuerdo a la Resolución de 18 de octubre de 1940, los avisadores disponen hasta de 30 días de plazo para retirar los números correspondientes a la primera y última publicación.

Los suscriptores deben reclamar los ejemplares que no se le entreguen, dentro de las 24 horas de efectuado el reparto, presentando el recibo.

### Orden de publicación

- 1—Apertura de Sucesiones
- 2—Caducidad de promesas de compras y ventas
- 3—Convocatorias Comerciales
- 4—Dirección de Necrópolis
- 5—Disolución y liquidación de Sociedades Conyugales
- 6—Disoluciones de Sociedades
- 7—Divorcios
- 8—Emplazamientos
- 9—Expropiaciones
- 10—Incapacidades
- 11—Información de vida y costumbres
- 12—Licitaciones Públicas
- 13—Llamados a Acreedores
- 14—Matrimonios de Montevideo
- 15—Pago de Dividendos
- 16—Prescripciones
- 17—Propiedad Literaria y Artística
- 18—Quiebras
- 19—Rectificación de Partidas
- 20—Remates
- 21—Segundas Copias
- 22—Sociedades de Responsabilidad Limitada
- 23—Trámites de Marcas
- 24—Trámites de Patentes de Invencción y Privilegios Industriales
- 25—Ventas de Comercio
- 26—Violación a la ley de Subsistencias
- 27—Varios

NOTA: La primera publicación de cualquier texto, aparece en "AVISOS DEL DIA", que se encuentra en las últimas páginas del diario.

Dirijase la correspondencia comercial a la Administración, calle FLORIDA número 1178. Teléfonos: 8 - 33 - 71 y 9 - 59 - 25.

Los avisadores de la Capital deben observar cómo aparecen sus textos, correspondiendo que en el plazo de 24 horas indiquen los errores a subsanar. Para avisos del interior el plazo se amplía de acuerdo con la forma de realizarse el servicio de Correos. La demora en ordenar correcciones hace perder el derecho de reinserción.

#### ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS

(Ley de 16 de Octubre de 1950)

De \$	Con capital	Hasta \$	20.000.00	\$ 50.00	la página
" "	20.001.00	" "	50.000.00	" 70.00	" "
" "	50.001.00	" "	100.000.00	" 90.00	" "
" "	100.001.00	" "	200.000.00	" 120.00	" "
" "	200.001.00	" "	300.000.00	" 150.00	" "
" "	300.001.00	" "	400.000.00	" 180.00	" "
" "	400.001.00	" "	500.000.00	" 220.00	" "
" "	500.001.00	" "	1.000.000.00	" 280.00	" "
" "	1.000.001.00	" "	2.000.000.00	" 340.00	" "
" "	2.000.001.00	" "	3.000.000.00	" 400.00	" "
" "	3.000.001.00	" "	4.000.000.00	" 500.00	" "
" "	4.000.001.00	" "	5.000.000.00	" 600.00	" "
" "	5.000.001.00	" "	en adelante	" 700.00	" "

Para las Cooperativas Rurales se hará el precio a mitad de tarifa.

El cálculo se realiza sobre la equivalencia del centímetro, esto es: contando 28 palabras.



EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JUAN LANGPAUL, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 25 de Noviembre de 1955. — Dardo Salgado, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17759 Dic.5-v.dic.16.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de VICENTE PASCALE, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 26 de Noviembre de 1955. — Dardo Salgado, Actuario Adjunto.

1) \$36.00 30/pub. 17398 Nov.30-v.dic.31. Feb.10-feb.3.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de PAULA MIRALLES de GUERRERO citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 26 de Octubre de 1955. — Dardo Salgado, Actuario.

1) \$36.00 30/pub. 17309 Nov.28-v.dic.31. Feb.10-v.feb.10.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MANUEL BASO ARNOSO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 21 de Noviembre de 1955. — Dardo Salgado, Actuario Adjunto.

1) \$36.00 30/pub. 17105 Nov.25-v.dic.30.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de SARA CASABE DE BALE, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 14 de Noviembre de 1955. — Dardo Salgado, Actuario Adjunto.

1) \$36.00 30/pub. 16941 Nov.23-v.dic.28.

#### JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE TERCER TURNO

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de DIEGO MARTINEZ LOPEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 23 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18312 Dic.14-v.dic.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de LUIS CASCIANI o CASIANO ZIRPOLI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 7 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18311 Dic.14-v.dic.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JORGE ELOY THOMASSET VICTORIA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 3 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18261 Dic.13-v.dic.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de RAYMUNDO ARTIGAS FERREIRA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de Setiembre de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18280 Dic.13-v.dic.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARIO O'NEILL y DOUGLAS ROBERTO O'NEILL o MARIO y DOUGLAS ROBERTO O'NEIL CARDENAS u O'NEIL, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 5 de 1955. — Héctor López Fernández, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17935 Dic.13-v.dic.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOSEFINA SALDIAS, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 24 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18134 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de RUBEN CARLOS HOWELL, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 24 de Noviembre de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18185 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOAQUIN ACOSTA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 3 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18186 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ESTANISLAO MAKUKA o MACOCA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 22 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18108 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CARMEN BONILLA ALFONSO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 24 de Junio de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 18038 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CONSUELO GONZALEZ DE PAZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 3 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17933 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de AIDA FASSIO DE SILVANO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 3 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17934 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de BARTOLOME AVVERAME o AVVERAMO o BARTOLOMEO AVVERAME o AVVERAMO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 25 de Mayo de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17973 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE MURUGOSA o MUGUOSA o MARUJOSA o MORUJOSA o MURGOSA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 3 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17864 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de PURA IGLESIAS DE REY, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 15 de Agosto de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17861 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de FRANCISCO CALVO MARTINEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás

interesados, para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 1.º de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17862 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CARMEN CALVETE DE MARTINEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 1.º de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17863 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JUAN CONSTANTE FIGALLO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 2 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17865 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ENRIQUETA PAUPY DE ZAMORA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, noviembre 26 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17742 Dic.5-v.dic.16.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ENRIQUE BARICI o ENRIQUE BARICI DUANICH o DIANICH, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 25 de Noviembre de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$36.00 30/pub. 17740 Dic.5-v.dic.31. Feb.19-v.feb.8.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CAYETANO BATILANA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Julio 21 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17755 Dic.5-v.dic.16.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de LUIS GUZZETTI o LUIS GUZZETTI SAPORITI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Julio 21 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17756 Dic.5-v.dic.16.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ANTONIA NOGAREDA DE MOURINO o MARINO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 30 de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$12.00 10/pub. 17757 Dic.5-v.dic.16.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de NISSIN o NISSIM CHAUFAN, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — Héctor López Fernández, Actuario Adjunto.

1) \$36.00 30/pub. 17758 Dic.5-v.dic.31. Feb.19-v.feb.8.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Tercer Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA MAGDALENA CATALINA DAUZERAL DE CASTELLAZZI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 8 de Octubre de 1955. — Elbio A. Panario, Actuario Adjunto.

1) \$36.00 30/pub. 16675 Nov.18-v.dic.23.

#### JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de SOPHIA SANTINA SGUILLA DE PIZZARDI, citándose a los herederos, acre-

y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 6 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18391 Dic.15-v.dic.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE PERALTA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18334 Dic. 14-v.dic.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JULIO FELICIANO MASINA o MASINA ODERA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 30 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18323 Dic.14-v.dic.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JUAN FRANCISCO ETCHART o ETCHART BASTABRECHE, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 6 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18262 Dic.13-v.dic.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ALEXAN o ALEJANDRO ALEXANIAN, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 23 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18188 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de BENITO PEREZ CARRERA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. — 18111 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de SABINO SANTIAGO o SABINO S. MENDEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18057 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CLORIS NATALIA SIMETO DALEIRI o CLORIS N. SIMETO D'ALLEGRI o CLORIS NATALIA SIMETO D'ALLEGRI o SIMETO D'ALLEGRI o CLORIS SIMETO DE BRUNO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 28 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18112 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de IGNACIO PABLO MOLINE o IGNACIO MOLINE o MOLINE D'ALBORA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 28 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18022 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de SANTIAGO FERNANDEZ ANDRES, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17993 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de LUIS CAVALLE o CAVALLE, emplazándose a todos los que se crean con derecho a heredarle, para que dentro de sesenta días, comparezcan con los justificativos de sus

parentescos ante este Juzgado (25 de Mayo 523, 4.º piso), bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. — Montevideo, Diciembre 5 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$16.00 10/pub. 18034 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE MARIA GAGO MERA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17941 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de AURELIA IGLASIAS DE ALVAREZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 23 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17919 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de TOMASA PEREZ DE PACHECO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 28 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17936 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CAYETANA o CAYETANA ALBERTA VILLANUEVA DE MENENDEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17937 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA JULIA ZERBONI o MARIA JULIA CELIA ZERBONI DE CALATRONI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Octubre 18 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17938 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JAVIER GONZALEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 29 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17939 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ENRIQUETA o ENRIQUETA FRANCISCA MERCEDES PALOU o PALOU VALLS DE MACIA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 4 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17940 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ASUNTA ROSA PERNA DE ZAGLIO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 28 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 17942 Dic.7-v.dic.31. Feb.1-vfeb.10.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE SALVADOR o SALVADOR PEREZ MARTINEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 22 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17982 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE GONZALEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Setiembre 16 de 1955. — Raúl Calcagno, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17866 Dic.6-v.dic.17.

# JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de GERTRUDIS CALVO DE AGUIRRE o CALVO MARINO DE AGUIRRE PRADO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18187 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de ANTONIO SANCHEZ BONILLA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 3 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18094 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MATUTINA PEREZ DE CREGO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 30 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18093 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de TERESA o LEOPOLDA TERESA PERRONE, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 30 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18092 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MARIA ZOILA LEONTINA VILA o LEONTINA DE VILA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 10 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18091 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de PABLO o PABLO BAUTISTA FINI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 15 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18122 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MARCELA DE LEON o DE LEON DE ESPINOSA y de ELISEO DE LEON, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17946 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de FRANCISCO o FRANCISCO REGIS BOURDON y de ENRIQUE BOURDON, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 15 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 17956 Dic.7-v.dic.31. Feb.1-vfeb.10.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de JOSE AMADEO CAZZULI GARRONE o AMADEO CAZZULI o CAZZULI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagla, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18023 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MARIANA HITA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de

treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 30 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18031 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de VICTOR VICENTE BERGALLI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17945 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de NATIVIDAD o NATIVIDAD JUANA FERNANDEZ CHAVES DE ZEBALLOS, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17947 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MARIA ARAUJO DE PAULLIER, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17948 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de SALVADOR CAPO o CAPO BELLO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17950 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de ANACLETA LUISA o LUISA GARCÉS DE ALVAREZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17949 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MARIA CARRERA DE GHIGLINO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Julio 21 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17951 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de HILDA ALCIRA BRUCHOU DE CARRERA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17952 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de MARIA ESTULFO DE RUSSI o EERTURFO DE RUSSI, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17953 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de JUAN JESUS FAJARDO o JUAN DE JESUS FAJARDO CABRERA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17954 Dic.7-v.dic.19.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de ADOLFO ALONSO MARQUEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de noventa días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 2 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 17955 Dic.7-v.dic.31.

choso ante este Juzgado. — Montevideo, Diciembre 2 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 17955 Dic.7-v.dic.31.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de LUIS DESANDALO CARRATTO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 15 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17897 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de EMA IDA LUISA KEMPTER o IDA EMMMA KEMPTER DE RUPRECH, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de noventa días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 30 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 17899 Dic.6-v.dic.31.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de FRANCISCO HERSEY o HERCEG, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de sesenta días (artículo 1.125 C. P. C.), a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Setiembre 30 de 1953. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$24.00 20/pub. 15193 Oct.24-v.nov.4.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de ROBERTO GREGORIO AMATO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de noventa días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 25 de 1955. — Rafael Payssé Reyes, Actuario Adjunto.  
1) \$36.00 30/pub. 17397 Nov.30-v.dic.31.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de la sucesión de JOAQUIN GONZALEZ COUTO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de noventa días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Noviembre 18 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 17094 Nov.25-v.dic.30.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno, se hace saber al público la apertura de las sucesiones de MARTIN SAFA o ZAPPA o ZAPPA de MARIA FULADORI o FULADORE o FULADORI DE ZAPPA o ZAPPA y de MARCELINO o HIPOLITO ZAPPA o ZAPPA FULADORI, FULADORE o FULADORI, citándose a los herederos, acreedores y de más interesados para que comparezcan dentro de noventa días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Octubre 31 de 1955. — José Curi Zagia, Actuario.  
1) \$48.00 30/pub. 16339 Nov.12-v.dic.17.

#### JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de LINA VIOTTO DE SALAMANO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Mayo 25 de 1953, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 4 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18310 Dic.14-v.dic.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MANUEL MALLO CAMBON y la de MERCEDES o MARIA MERCEDES MAYO o MALLO DE ROSSELL o ROSSEL, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, Mayo 25 de 1953, sexto piso. — Montevideo, Diciembre 9 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18259 Dic.13-v.dic.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de BALDRAMINA o BALDRAMINA CRISTINA GIMENEZ DE BARDON, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en

forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Diciembre 7 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18181 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ANTONIO CASTRO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523 sexto piso. — Montevideo, Diciembre 9 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18260 Dic.13-v.dic.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JESUSA SALGUEIRO DE GONZALEZ, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 1.º de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18230 Dic.12-v.dic.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de RAMON RUBAL HERMIDA y la de MARIA ANTONIA CARBALLIDO DE RUBAL, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de noventa días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso, habilitándose el feriado para las publicaciones. — Montevideo, Diciembre 6 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$36.00 30/pub. 18106 Dic.10-v.en.14.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de LUISA AIDA SANDRES o SANDRES DE ARTOLA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 8 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18149 Dic.10-v.dic.21.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de DIEGO RODINO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 10 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 18020 Dic.9-v.dic.20.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CLARA CROVETTO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Diciembre 1.º de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17858 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ANTONIO JULIO SCAVINO, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados, para que comparezcan dentro de treinta días, a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 9 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17859 Dic.6-v.dic.17.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de ROQUE SANTANA, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 11 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17806 Dic.5-v.dic.16.

EDICTO. — Por disposición del señor Celestino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CARMELO BERNARDINO o BERNARDO MAZZONI o MAZZONE, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso. — Montevideo, Noviembre 4 de 1955. — Julio E. Real, Actuario.  
1) \$12.00 10/pub. 17807 Dic.5-v.dic.16.

















































































# DIARIO OFICIAL

## ANEXOS

### JUDICIALES

#### SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Celebró Acuerdo, el 21 de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco, la Suprema Corte de Justicia, bajo la presidencia del Ministro Dr. Manuel López Esponda y con la asistencia de los Sres. Ministros Dres. Alvaro F. Macedo, Rivera Astigarraga, Julio César De Gregorio y Luis Alberto Bouza, actuando en la Secretaría Judicial el Dr. Jorge Gamarra y en la Administrativa el Dr. Manuel T. Rivero.

#### Asuntos Tratados:

**Asuntos Administrativos.** — Instrucción y Correccional de 1er. turno, en autos: "Perichón Rodríguez, Alberto". Eleva exhorto. Instrucción y Correccional de 4to. turno, en autos: "Racioppi Smaldone, Roby Nelson"; eleva exhorto. Crimen 4to. turno, en autos: "Fernández Itzaina, Eduardo"; eleva exhorto. Diconca, Roberto L.; denuncia. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en autos: "Arteaga, Luis A. contra Administración de los Ferrocarriles del Estado"; remite solicitud. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en autos: "Silva Oxovi, Olimpia Elina contra Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio"; remite solicitud. Hacienda 2do. turno, en autos: "Hierromat S. L. contra Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas". eleva exhorto. Civil 5to. turno, en autos: "Compañía de Omnibus Canelones-Santa Lucía S. A. contra Martínez Victoriano"; eleva exhorto. Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares. Solicita informes del señor Ernesto Agustín Quintana Solari.

En vista al señor Fiscal de Corte. — Anatolio Palamarchuk Sanin; Horacio Cassinelli Muñoz. Títulos de Procurador.

**Asuntos Civiles.** — Martínez Saravia, Gasiano contra Moreno, Abdon. Gómez Pons, Juan José contra Gobierno Departamental de Colonia. Rosas, Rosa contra Chirazi Bagni Alberto y Mardiresion, Mikron Koch, Heriberto C. contra Veli Ltda. Baron Biza, Raúl y Sabattini de Barón Biza, Rosa Clotilde. Exequatur.

**Asuntos Penales.** — Un recurso de apelación por denegación de casación. Un recurso de casación en causa seguida por homicidio.

Movimiento habido en Secretaría. — Oficios librados: 98; Mensajes: 11; Causas elevadas en consulta 29.

Celebró Acuerdo, el 23 de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco, la Suprema Corte de Justicia, bajo la presidencia del Ministro Dr. Manuel López Esponda y con la asistencia de los Sres. Ministros Dres. Alvaro F. Macedo, Rivera Astigarraga, Julio César De Gregorio y Luis Alberto Bouza, actuando en la Secretaría Judicial el Dr. Jorge Gamarra y en la Administrativa el Dr. Manuel T. Rivero.

#### Asuntos Tratados:

**Asuntos Administrativos.** — Delfín Yguini, Adema, jubilación. Castro Caravia, Juan F. Leopoldo, jubilación. Errazquin, Pedro Eclitino, jubilación. García Ylla, Juan, jubilación. Lacava Perrone, José, jubilación. Roberto Bartoletti, Bu-

genio Ismael, jubilación. Correa Moreira, Pio, Diego, jubilación. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en autos: "Lois Balea, Juan contra Gobierno Departamental de Montevideo"; remite solicitud. Hacienda 3er. turno, en autos: "Fernández Aiscar, Washington contra Banco de Seguros del Estado"; eleva exhorto. Hacienda 3er. turno, en autos: "Fisco contra Vázquez Barrieri, Gonzalo"; eleva exhorto. Cotton, Jacobo contra Rousseau, Jacqueline; exhorto. Capital Jdo. de Paz 1ra. sección; en autos: "Carulla, Sucesión contra Pulio Méndez, Manuel Antonio"; eleva exhorto. Luna de Gallo, Jacinta Cándida contra Luna de Leguizamón, Andrea Evarista; exhorto. González Millán, Angel E. contra Causanel, Tomás Fermín. exhorto. Capillas de Iglesias, Rosa contra Fernández Folgueiras, Dositeo; exhorto. Lemoin, Roberto contra Landy, Juan; exhorto. Candussi, Eugenio; exhorto.

En vista al señor Fiscal de Corte. — Ildefonso Basilio Carmenes Gutiérrez. Título de Procurador. Ana María Bozzolo Gorli y Luis Enrique Rodríguez Vildosola. Posesión de Estrados.

**Matrícula de Contadores.** — Se ordenó la inscripción de Salomón Cynovich y Rafael Vanrell.

**Sentencias dictadas.** — Pedro Díaz contra Manuel C. Catañi. Sadrep Ltda. contra Ada Mosto de Siri. Miguel Furtado contra María Zulima Godoy.

**Asuntos Civiles.** — Malmierca, Luis M. contra Pereira, Aquilino. Cristian Dior Sociedad de Responsabilidad Limitada, exequatur. Alzugaray, Alvaro; Fraga, Juan José contra Negro, Raúl E.; Urueña, Juan P.; Cigliutti, Carlos W.; Terra Arcocena, Aurelio y Benilla, David. Contienda (Art. 313 de la Constitución). Ravera de Rodríguez, Lidya contra Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Longo, Juan contra Fábrica Uruguaya de Neumáticos S. A. (FUNSA). Indemnización por daños y perjuicios.

**Asuntos Penales.** — Un recurso de casación en causa seguida por homicidio. Un recurso de casación en causa seguida por homicidio.

**Libertades anticipadas.** — Concedidas: una.

**Designaciones.** — La Suprema Corte de Justicia designó para desempeñar el cargo de Juez de Paz de la 3ra. Sección de Cerro Largo, Ciudad de Río Branco, a la Escribana Doña Aurora Alvarez de Silva Ledesma.

Movimiento habido en Secretaría. — Oficios librados: 60; Mensajes: 5; Oficios de divorcio por la sola voluntad de la mujer elevados a informe de Secretaría: 20; Causas elevadas en consulta: 28.

Celebró Acuerdo, el 25 de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco, la Suprema Corte de Justicia, bajo la presidencia del Ministro Dr. Manuel López Esponda y con la asistencia de los Sres. Ministros Dres. Alvaro F. Macedo, Rivera Astigarraga, Julio César De Gregorio y Luis Alberto Bouza, actuando en la Secretaría Judicial el Dr. Jorge Gamarra y en la Administrativa el Dr. Manuel T. Rivero.

#### Asuntos Tratados:

**Asuntos Administrativos.** — Oficina de Protocolos. Comunica la entrega de los Protocolos del extinto Escribano Manuel

Lezama Muñoz, Renovaes, Oscar contra Ferrer Eleodora; exhorto. Irisarri Martín T., jubilación. Nordman, Carlos Diego, jubilación. Fierro, Inés Tetimo, jubilación. Silvestre, Luis jubilación. Vignoli, Teodoro Adolfo, jubilación. Acosta, Manuel M. jubilación. Charquero, Primitivo, jubilación. Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en autos: "Altesor Mezquita, Alberto contra Administración de Ferrocarriles del Estado", Remite solicitud. Hacienda 1er. turno, en autos: "Compañía Exhibidora Nacional S. A. contra el Estado", eleva exhorto. Instrucción y Correccional de 6to. turno, en autos: "Jules de Meulemeester, Adolfo". eleva exhorto.

En vista al Sr. Fiscal de Corte. — Carlos Payssé Cash. Washington Carlos Marroni García. Rodolfo Schurmann Pacheco. Posesión de Estrados. Esther Luisa Ferrari Fernández, título de Procurador.

Visita de un Ministro de la Suprema Corte de Chile: Visitó la Suprema Corte de Justicia el Ministro de la Suprema Corte de la República de Chile Dr. Ciro Salazar, quien fué recibido por los miembros de la Corporación.

**Asuntos Penales.** — Un recurso de casación en causa seguida por homicidio. Un recurso de casación en causa seguida por homicidio.

Movimiento habido en Secretaría. — Oficios librados: 97; eMnsajes: 9; Causas elevadas en consulta 27.

Celebró acuerdo, el 5 de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco, la Suprema Corte de Justicia, bajo la presidencia del Ministro doctor Manuel López Esponda, y con la asistencia de los señores Ministros doctores Alvaro F. Macedo, Rivera Astigarraga, Julio César De Gregorio y Luis Alberto Bouza, actuando en la Secretaría Judicial el doctor Jorge Gamarra y en la Administrativa el doctor Manuel T. Rivero.

#### Asuntos tratados

**Asuntos Administrativos:** Arispe, Eugenio, Jubilación. — Modernell Vázquez, Indalecio, Jubilación. — Montaldo Sierra, Remigio, Jubilación. — Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En autos: "Solicitud de informes sobre la legalidad del nombramiento de la doctora N. Pastorini Caula para el cargo de Director Abogado Asesor y Defensor del Gobierno Departamental de Florida". Remite Solicitud Civil 6to. Turno. En autos: "Administración de Ferrocarriles del Estado contra Unión de transportes del Uruguay". Eleva exhorto. — Civil 1er. Turno. En autos: "Remedios, Telmo contra Otamendi, Céllico". Eleva exhorto. — Hugo O'Neill Guerra, Solicitud. — Vaccaro, José L. Denuncia. — Ayusto, Juana E. contra Rodríguez, Alberto. Exhorto. — Montefesrario, Franco contra Messerotti, Césare. Exhorto.

En vista al señor Fiscal de Corte: Ana María Bozzolo Gorli. Título de Procurador.

**Asuntos Civiles:** Baron Biza, Raúl Carlos y Sabattini de Baron Biza, Rosa Clotilde. Exequatur. — Cambios Unidos S.A. contra Alberto Chirazi. — Silvera, Alciblaes contra Ferrocarril Central del Uruguay.

**Asuntos Penales:** Un recurso de casa-



## DIRECCIÓN DE NECROPOLIS

## Defunciones registradas

Día 22 de noviembre de 1955

Nicasio Narciso Clara, oriental, 96 años, viudo, Hospital Maciel.  
 Haydée González, oriental, 9 días, Hospital P. Rossell.  
 Segundo Garro, oriental, 75 años, viudo, Hospital Español.  
 María Esther Mac-Entyre de Pravia, oriental, 52 años, casada, Garibaldi 2013.  
 Reymundo Moranti, oriental, 67 años, soltero, Grecia 3791.  
 Agustín Donagaray, oriental, 68 años, casado, 2 de Mayo 1421.  
 Zulma López de Valas, oriental, 32 años, casada, B. Artigas 1461.  
 Isolina Etchebehere, oriental, 47 años, soltera, Canelones 1365.  
 Pablo Pedro Chiessa, oriental, 64 años, casado, Riachuelo 190.  
 María del Carmen Torres, oriental, 68 años, soltera, Agraciada 2701.  
 Eugenio Felipe Pérez Castro, oriental, 78 años, casado, Cabildantes 3542.  
 José Cosme Muñoz Parpal, oriental, 61 años, soltero, Plaza Zabala 312.  
 Carlos Alfredo Semblat Guerzi, oriental, 64 años, casado, Canelones 1335.  
 Juana Harriague Gazet, oriental, 96 años, soltera, 8 de Octubre 3889.  
 José Carreto, español, 93 años, casado, F. Contucci 3860.  
 Norberto Conde García, oriental, 67 años, casado, I. Bosch 2466.  
 Manuela Prats de Parodi, oriental, 81 años, viuda, Lindoró Forteza 2662.  
 Romeo Domingo Bazzano, oriental, 76 años, casado, Figueroa 1288.  
 Jacinta Lorenzo Álvarez, oriental, 92 años, viuda, Larravide 2261.  
 Carlos Raúl Martínez Vázquez, oriental, 62 años, casado, Hocquart 1601.  
 Fernando Basilio Ferreira, oriental, 81 años, casado, Lucas Obes 1073.  
 Josef Samanie Rosic, yugoeslavo, 69 años, casado, Rincón 393.

Día 23 de noviembre de 1955

Mabel Rodríguez, oriental, 8 días, Casa del Niño.  
 Robustiana Martínez de Ferreira, oriental, 78 años, viuda, Hospital Maciel.  
 Dorotea María Burgos de Velázquez, oriental, 70 años, viuda, Hospital Maciel.  
 Juan Isaias Rodríguez Pérez, oriental, 59 años, casado, Hospital de Clínicas.  
 Demetrio Carbonell, oriental, 59 años, casado, Hospital de Clínicas.  
 Antonio Yodanovich, yugoeslavo, 56 años, soltero, Hospital Pasteur.  
 Angela Mega de Alfaro, oriental, 47 años, casada, Hospital Pasteur.  
 Sara Beatriz Aguiar, oriental, 4 meses, Hospital P. Rossell.  
 Francisco Atala, francés, 92 años, soltero, Asilo P. del Campo.  
 Justo Lozano, argentino, 91 años, viudo, Asilo P. del Campo.  
 Cándida Rodríguez de Lindeblad, oriental, 76 años, viuda, B. Artigas 4483.  
 Ana Malvina Manolito, oriental, 82 años, soltera, Mercedes 1234.  
 Francisco Antonio Pira, oriental, 61 años, casado, Rivera 2569.  
 Carmen Rosas, oriental, 43 años, soltera, Colonia Saint Bois.  
 Tomás Cosella, oriental, 85 años, viudo, General Flores 2900.  
 Rosa Magdalena Celia Colombo de Charlone, oriental, 80 años, viuda, E. Acevedo 1494.  
 Avack Melidenian, armenio, 57 años, casado, Portugal 3647.  
 Carmen Recoba de Marquez, oriental, 65 años, casado, J. E. Administrativa N.º 2177.  
 Rafael Zavattaro, italiano, 78 años, casado, General Pallejas 2567.  
 Silvia de Bello, oriental, 38 años, casada, V. y Vega 1122.

Admundo Horacio Belloni Solari, argentino, 61 años, soltero, San José 1226.  
 Ambrosio Santos, oriental, 48 años, casado, Miraballes 4405.  
 David Eduardo Gutiérrez-Tramonte, oriental, 36 años, casado, Paraguay 1320.  
 Pedro Machini, italiano, 66 años, divorciado, Real 4930.  
 Estefana Getolaza de Varela, española, 69 años, casada, B. Artigas 1463.  
 Balmar Rodríguez, oriental, 49 años, casado, Colonia Saint Bois.  
 Mercedes Aubriot de Santos, oriental, 70 años, casada, Soriano 959.  
 Adolfo Medina, oriental, 15 años, Departamento Lavalleya.

Día 24 de noviembre de 1955

Paulina Hernández de Pía, oriental, 65 años, viuda, Hospital P. Rossell.  
 Tomás Ojeda Rodríguez, oriental, 47 años, soltero, Hospital F. Ferreira.  
 Isabelino Ferrari, oriental, 46 años, soltero, Hospital Pasteur.  
 María del Carmen Franco, oriental, 57 años, divorciada, Hospital Pasteur.  
 Angela Eirale de Battaghino, oriental, 73 años, casada, Hospital Italiano.  
 Juan María Recalde, oriental, 53 años, soltero, Hospital Villardebó.  
 Salvador Cugno, italiano, 86 años, casado, Azarola 2254.  
 Carlos D'Atri Soutel, 63 años, casado, Molles 1424.  
 Olga Panaro de Pantaleón, oriental, 39 años, casada, Lorenzo Pérez 3020.  
 Francisco Mantifian, español, 67 años, casado, Adolfo Berro 1104.  
 José Manuel Estanislao Pérez, español, 61 años, viudo, P. Ellauri 3385.  
 José Espiñeira, español, 81 años, casado, Máximo Gómez 4167.  
 Constantino Facal, español, 70 años, soltero, Eduardo Acevedo 959.  
 Ladislao Menéndez Fernando, español, 84 años, casado, Avda. Rondeau 1545.  
 Erlinda Araujo de Villarino, oriental, 53 años, viuda, Vía férrea y Gral. Tajés.  
 Arturo De Rogatis, oriental, 60 años, casado, 8 de Octubre 2428.  
 Carlos Cruz Macedo, oriental, 15 años, Departamento de Canelones.  
 Washington Soto German, oriental, 23 años, soltero, Departamento de Canelones.

Día 25 de noviembre de 1955

María del Carmen Duarte, oriental, 9 días, Casa del Niño.  
 María Rosa Ramos, oriental, 16 días, Casa del Niño.  
 Blanca Juana Maidana de Castiglioni, oriental, 47 años, casada, Hospital Maciel.  
 Marcos Stic Cucic, yugoeslavo, 52 años, viudo, Hospital de Clínicas.  
 Salvador Rodríguez, oriental, 3 años, Hospital Pereira Rossell.  
 María Carlota Belloni de Correa Luna, 53 años, casada, Juan D. Jackson 1314.  
 Enrique Antonio Repetto Morales, 25 años, soltero, Cádiz 245.  
 Oscar Gutierrez Díaz, oriental, 59 años, casado, Ariel 4740.  
 Juana San Martín de Arrosa, oriental, 73 años, viuda, Capurro 875.  
 María Elvira Tasende de Vanaro, oriental, 62 años, casada, Infantes 3519.  
 Magdalena La Vecchia de Resta, argentina, 49 años, viuda, 8 de Octubre 3288.  
 Emilia Rizzo de Croce, oriental, 75 años, viuda, San José 1226.  
 Carmen Maggiolo de Scarpatti, oriental, 70 años, viuda, Daniel Muñoz 1341.  
 María Penna de Parodi, italiana, 84 años, viuda, Jaime Cibils 2412.  
 César Ceriani, oriental, 65 años, soltero, Millán 3958.  
 Natividad Sticboldt de Recoba, oriental, 89 años, viuda, Francia 1847.  
 Catalina Díaz de Rodríguez, oriental, 60 años, casada, Lavalleya 2299.

Benardo Chigliazza, oriental, 79 años, casado, Spencer 4476.  
 José María Lagos, oriental, 78 años, casado, Millán 2875.

Día 26 de noviembre de 1955

Edelma Fernández Vázquez de Bencancor, oriental, 33 años, casada, Hospital de Clínicas.  
 Gregoria Magallanes de Massioti, oriental, 77 años, casada, Hospital Militar.  
 Carmen Britos de Díaz, oriental, 51 años, casada, Hospital Pasteur.  
 María Muniz de Medina, oriental, 83 años, viuda, Hospital Maciel.  
 Severino Denis, oriental, 67 años, casado, Hospital Maciel.  
 Emilia Mabel Rodríguez, oriental, 1 día, Casa del Niño.  
 Eulogio Campos, oriental, 82 años, casado, Asilo P. del Campo.  
 José Nucetelli Romanelli, oriental, 62 años, casado, Morales 2437.  
 Miquel Tomás Viturera, oriental, 61 años, soltero, Asilo 3831.  
 Aída Belsignore de Bebacua, oriental, 51 años, viuda, Almería 4188.  
 Inocencia Suárez de Morando, oriental, 60 años, viuda, Agraciada 2712.  
 Bernabé Medina, oriental, 75 años, casado, J. Llupes 4545.  
 Teófilo Juan Torres, oriental, 72 años, casado, Lucas 346.  
 Pablo Miguel Venturino Rodríguez, oriental, 74 años, viudo, C. Nery 3673.  
 Eulogio Martín Lemes, español, 86 años, viudo, Maciel 1444.  
 Máriano Méndez Osorio, oriental, 63 años, soltero, A. Muñoz 4080.  
 Josefa Mallada de Garzón, oriental, 44 años, viuda, Cte. Braga, 2458.  
 Settimo Ecker, italiano, 79 años, casado, P. C. Bauzá 3945.  
 Petronila González de González, oriental, 76 años, viuda, Villavicencio 96.  
 Julio César Bouvet, oriental, 58 años, casado, Av. Italia 2474.  
 Paula Juana Gallo de Quiñones, oriental, 69 años, casada, Guaviyú 2385.  
 María Guido de Fernández, oriental, 61 años, casada, Hospital P. Rossell.

Día 27 de noviembre de 1955

Juan José Estellano, oriental, 2 años, Hospital P. Rossell.  
 Pedro Perdomo, oriental, 32 años, soltero, Hospital de Clínicas.  
 Cornelia González de Díaz, oriental, 96 años, viuda, Emilio Raña 3211.  
 Graciana Frasiolla de Rodríguez, oriental, 55 años, casada, Cuñapirú 1766.  
 Angel María Correale, oriental, 50 años, casado, Marcelino Berthelot 1726.  
 Dolitila Leyes de Almeida, oriental, 64 años, viuda, M. Acuña 2942.  
 Juan Felipe Cabrera, oriental, 76 años, viudo, Laureles 235.  
 Polonia Nelma Ferri de Jacobson, oriental, 62 años, casada, Municipio 3030.  
 Jacinta Lamas de Ayala, oriental, 75 años, viuda, Cornelio Guerra 1781.  
 Josefa Rodríguez de Pesqueira, española, 79 años, viuda, Corumbé 4593.  
 José Vila, oriental, 70 años, casado, 8 de Octubre 2435.  
 María del Carmen Martínez Costa, oriental, 3 días, Martín García 1363.  
 Juana Serosona de Pereyra, oriental, 79 años, viuda, Luis P. Lengua 1518.  
 Ramón José Fariña Rosende, español, 65 años, viuda, Barrozo 3790.  
 Margarita Young de Mac Gregor, oriental, 83 años, viuda, Av. Brasil 2507.